

Nos matan y no es noticia

Parapolítica de Estado en Colombia

Ricardo Ferrer Espinosa | Nelson Javier Restrepo Arango



Prólogo de
Carlos Alberto Ruiz Socha



cambalach memoria

Este libro ha sido registrado en la Comunidad de Madrid, España, con el único fin de proteger la integridad de la denuncia y como ratificación de los testimonios aquí recogidos.

© «Nos matan y no es noticia» **Negocios y masacres en el río Atrato, Colombia. Registro de la Propiedad Intelectual, 21 de julio de 2009 (M-006282 / 2009).**

Partes de este libro pueden ser utilizadas en los procesos de reclamación contra el Estado colombiano, por crímenes de lesa humanidad. El autor está en plena voluntad de confirmar los hechos y acompañar a las víctimas del río Atrato en la búsqueda de reparación y dignidad.

El autor asume la responsabilidad plena por sus afirmaciones.

1ª edición Mayo 2010

Editan: cambalache y Soldepaz Pachakuti

Cambalache. C/ Martínez Vigil, 30, bajo. 33010 Oviedo. Tfno.: 985 20 22 92
e-mail: cambalache@localcambalache.org
www.localcambalache.org

Soldepaz Pachakuti. C/ Manuel Llana, 42. 33208 Xixón. Tfno.: 985 14 19 09
e-mail: soldepaz.pachakuti@pachakuti.org
www.pachakuti.org

Diseño: Amelia Celaya
Fotomecánica: Fotomecánica Principado
Impresión: La Cooperativa

Depósito Legal: AS-2426-2010
ISBN: 978-84-614-0084-3
Impreso en papel reciclado

Todos nuestros libros están editados bajo licencia copyleft; esto significa que está permitida su reproducción, modificación, copia, distribución y exhibición, siempre que se haga citando a la autora o autor, sin ánimo de lucro y bajo la misma licencia.

Frente a cánones e impuestos creemos que el interés de la publicación de libros es difundir sus contenidos, servir de herramientas educativas y de debate; por eso todos los libros que publicamos se pueden descargar gratuitamente en www.localcambalache.org

Memoria insumisa

*A los que promueven la amnesia del mundo
les vamos a refrescar la memoria
de sus crímenes.*

*Una y otra vez, aunque duela
o mejor, para que se duelan.*

*Una y otra vez
hasta llevarlos a juicio.*

*Una otra vez
hasta condenarlos.*

*Una y otra vez
hasta que reparen el daño.*

*Una y otra vez
para que esta infamia no se repita.*

*Una y otra vez
en opción por la vida.*

Ricardo

*En memoria de Mario Andrés Flórez Rubianes, médico de
Murindó, asesinado por los escuadrones de la muerte en Caldas
(Antioquia), en junio del 2003.*



Mi gratitud

A los habitantes de Vigía del Fuerte y Murindó, por salvar mi vida (junio de 1997).

A quienes lograron la libertad de los soldados e infantes de Marina (15 junio de 1997).

A quienes se movieron para sacarme de Colombia (febrero de 1998).

A Yusef, Anat, Asaf y Mijal por acogernos en su casa de Haifa (1998-2000).

A Mijael S. por los datos exactos que me dio en Eilat.

A los kibutzim Bar Am, Nir Yitzhak y Yotvetáh, por su solidaridad.

A los periodistas Y. Shrem, Yafa Shir-Retz, Einat Fishbain, Efraín Davidi, Jeny Korén, y a los colegas de Colombia.

A quienes tramitaron nuestro status como refugiados ante ACNUR-Ginebra.

A Mauricio L. por los documentos que me facilitó en Jerusalén (1998).

Al personal de la Embajada de España en Tel Aviv (5 de octubre de 1999).

A CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado, mayo de 2000).

A Bernardo Torres Arias, por su alimento físico y espiritual (2001-2006).

A los sacerdotes, monjas, pastores y cristianos justos que protegen a los humillados de la tierra.

A Vladimir Carrillo, a Carlos Alberto Ruiz, Nelson Restrepo y a quienes han hecho que este libro sea posible. (2009-2010).

A quienes usarán este testimonio para lograr verdad, justicia, reparación y dignidad para los habitantes del río Atrato.

A mi valiente y dulce mujer, por soportar conmigo estos años difíciles.

A mi linda tribu, por darme alegría y soportar mi dolor.

A los insumisos.



Índice

Prólogo de Carlos Alberto Ruiz Socha.....	9
Introducción	33
La obligación de la memoria	37
En el exilio	113
Negocios y masacres en el río Atrato	131
Impunidad y continuidad de los hechos violentos: 1997-2010	145
Conclusiones.....	179
Mapas.....	186



Prólogo

Cuando el olvido, como agua sucia, inunda palmo a palmo nuestro refugio, la memoria decorativa no es una tabla de salvación sino una carga que puede llegar a ser una lápida. Y cuando la impunidad nos ahoga, la ley la acompaña vigilante en la puerta. Frente a eso, este libro nos enseña que, al no haber justicia, sólo nos queda lucharla contra el olvido y la impunidad, y si es preciso contra la ley y la memoria ornamental. Sus páginas están hechas a conciencia. Por el honesto compromiso de sus dos autores enfrentando la indolencia, el silencio y el cinismo que nos circunda. Me tomo prestado un espacio de este testimonio para explicarlo.

I. Una referencia concreta de la producción sin ética de lo que sí es noticia: un juez contra sí mismo

El gran poeta Mario Benedetti, al inicio de *El olvido está lleno de memoria*, recordaba lo que bellamente advirtió otro escritor uruguayo, Rafael Courtoisie: «*Un día, todos los elefantes se reunirán para olvidar. Todos, menos uno*». De alguna forma estamos ante lo contrario, por obra de dos grandes manadas. Ahora mismo, donde se edita este libro, en el Estado español, dos vergonzosas situaciones van en paralelo. En la más cerril y perversa, la manada de la extrema derecha –en la metáfora no diré de qué especie animal–, beneficiaria de una feroz y cruel dictadura, se impone repugnantemente con todo su peso para impedir que un famoso juez investigue crímenes cometidos por el franquismo. Su apuesta no es el olvido, sino la inmunidad de la casta depravada que triunfó y que, en esencia, sigue incólume. La otra manada, incluso con gente progresista pero en parte encogida en sus miras, se reúne en defensa no en sí de la verdad íntegra como valor, sino, preferentemente, por encima de otros imperativos éticos, en torno a un supuesto y engañoso paladín de la justicia. En consecuencia, su derrotero

no es siempre la ética de la alteridad, la justicia para todos, sino la reivindicación de la fundamental memoria histórica de un período tenebroso en España, aunque sean negadas o marginadas de facto y al instante otras memorias, tan legítimas y tan latentes como ésta.

De tal desprecio de hecho hay que hablar desde estas calles de Madrid, donde un juez recibe honores y donde no cuentan, para miles y miles de personas que lo halagan, los crímenes cometidos muy lejos, en Colombia. Porque, parafraseando a Sartre, asistimos al *striptease* de *nuestro nada hermoso humanismo*, que protagonizan hoy no sólo un juez vanidoso y algunos de sus colegas detractores, sino también la prensa y círculos de poder: se exhiben prendas dobles, mientras un conveniente desnudo incita al morbo ignorante o aleccionado del público. Así, miles de páginas y firmas se han apuntado en todo el mundo en defensa del juez Garzón por tratar de cumplir con una obligación legal por la que recibe un buen salario, además de la succulenta notoriedad que suele reclamar, formando parte de la Audiencia Nacional, institución heredera de la dictadura, reparada en el hecho de poner al juez contra el espejo, contra sí mismo, contra su propia inquisición, como un perseguido judicial. Sin duda, el augusto magistrado saldrá exento en ese sumario fruto de la reacción de la extrema derecha; eso esperamos. Tanto como aguardamos muy remotamente sus enmiendas por graves injusticias que ha suscitado. Quedará amparado, mientras cientos de convictos, familiares y amigos de procesados suyos han sufrido por largos años las consecuencias de un torturante ensañamiento que él ha contribuido a modelar contra un entorno político disidente.

Ni una sola de esas firmas y páginas que le exaltan como un nuevo héroe, informadas de la impunidad de *crímenes contra la humanidad*, al tiempo que ha exigido con plena razón investigar y condenar las atrocidades falangistas, ha desagraviado, en el mismo acto y por la misma causa, a otras decenas de miles de víctimas ni ha advertido la existencia de una *normalización del crimen de*

Estado, similar a la sucedida en España, que ayer y hoy las produce a borbotones en Colombia, donde ese juez ha preferido mirar para otro lado. Una siniestra y exitosa *normalización* que, en cuanto a Garzón, está representada en al menos tres actos concluyentes, de los que tomo nota conforme al objetivo de este libro: cuando ha aconsejado sobre la toma de más medidas represivas, como la incomunicación, y de impunidad, como la favorabilidad paramilitar, a un régimen genocida que las aplica contra el movimiento popular; cuando, pagados por el rapaz banco español Santander, ha organizado encuentros de acreditación de Álvaro Uribe Vélez como *demócrata*, avalando su política de seguridad y derechos humanos (certificación realizada, por ejemplo, en Nueva York el 15 de diciembre de 2005 al lado de otro criminal como Henry Kissinger o de impresentables como Ernesto Zedillo de México y Felipe González de España); y cuando ha empleado, junto con otros jueces españoles, instrucciones y consignas recibidas de organismos de inteligencia implicados en crímenes internacionales, para acusar injustamente en España a activistas por la paz y los derechos humanos vinculados con la izquierda colombiana (2008-2010), así como al Gobierno de Venezuela.

Desde esa *normalización* del crimen, es *normal* que Garzón confraternice con Uribe, que a éste se le honre, que haya buenos negocios españoles en Colombia y que esos muertos lejanos que no son noticia no convoquen a manifestaciones de solidaridad a miles de progresistas europeos. La *normal* ausencia de una congruente perspectiva ética e histórica de muchos actores internacionales ayudó a la larga *normalización* del franquismo durante décadas. Sentimientos y razones de indignación no debieron faltar a miles de exiliados y a quienes se quedaron en España padeciendo esa *normalización*, lubricada con silencios provenientes del crudo *realismo* y del inmundito *pragmatismo*, signos con los que muchos reconocieron al régimen franquista y olvidaron a sus víctimas. Bertrand Russell, en el discurso de la Primera Reunión de los miembros del Tribunal de Crímenes de Guerra, en noviembre de 1966,

en ese costoso relato humanista ante el poder, se refirió a una de las finalidades de ese Tribunal: *prevenir el crimen del silencio*. Señaló también que hay quienes son «*criminalmente ignorantes de las cosas que tienen el deber de saber*». Y también que «*es imposible mantener la dignidad sin el coraje para examinar esta perversidad y oponerse a ella*».

El caso de Garzón y su esfera es apenas una muestra. No cualquiera. No sólo por ser un juez dotado con poder excepcional en nombre de los derechos humanos, sino porque en su despacho reposó una querella relativa a crímenes espantosos cometidos por militares y paramilitares colombianos. Como él, su homólogo Grande-Marlaska asume probado que el régimen colombiano es una *democracia* que hace *justicia*. La querella no fue admitida. Víctimas y testigos, entre los que se encontraba Ricardo Ferrer, sufrieron una nueva afrenta. Junto a esas connotadas figuras judiciales podrían contarse centenares de cargos políticos, académicos, funcionarios, intelectuales, empresarios y periodistas. Y, precisamente, esa fusión o amalgama de empresarios/funcionarios/periodistas decide qué es noticia y qué no. ¿Por qué van a ser menos moralmente muchos de los sicarios que disparan a sus víctimas, que los distinguidos autores de silencios y salvoconductos en la cadena del genocidio? Su puntería es semejante.

La condición *sine qua non* de que una *guerra sucia* sea eficaz es conceder a quien la ejecuta la insignia de la razón y el blindaje de la impunidad. Cómodamente, desde sus escritorios, son miles de civiles los que deliberadamente participan del negocio de la guerra contrainsurgente en Colombia y patrocinan sus dispensas o absoluciones. Otros, de forma no intencional, como se dice de los efectos del mercado, quizá por *desinformación*, también colaboran con gran parte del circuito que, en 2010, se renueva sin renunciar a la inspiración uribista. Unos y otros, de cara a las víctimas de crímenes de Estado en Colombia, conforman una gran manada dispuesta a tergiversar, negociar y olvidar. Este libro existe porque no todos los elefantes se han reunido para hacer borrón y cuenta nueva. Algunos mantienen la memoria y la dignidad

en alto, a contracorriente, para reanimar a *la tribu*, como Ricardo Ferrer llama a su gente, a la que él –con afecto y fe– manda y reenvía información sobre Colombia y otras tristezas, como lo hace el compañero Nelson Restrepo, documentando ambos parte de nuestra historia.

II. Una alusión ineludible: estamos enfermos

En 2009 murió el respetable y cultivado humanista Carlos Castilla del Pino, quien elaboró perfiles del *derecho a la memoria*. Le llamaban el *psiquiatra rojo*. Sus textos son útiles para pensarnos, ahora que hieden y se solapan los entornos políticos español y colombiano, que constatamos el encumbramiento y encubrimiento de psicópatas en el poder porque hay sociedades esquizofrénicas que los eligen. Castilla del Pino expresó una vez: *«Tardíamente descubrí por qué nadie quería hablar de la guerra: porque había muchos niveles distintos de complicidad en las fechorías. El que mata, el que denuncia para que maten, el que manda matar, el que tolera, el que sabe pero calla... Todos estaban implicados y era mejor no hablar. Si ves una fechoría y decides callar, en cuanto se habla de ello te sientes culpable... Cuando no puedes hablar de todo lo que debes hablar, estás enfermo: eso crea un tapón que te bloquea muchas otras cosas. Y eso fue lo que pasó en la sociedad en general. Se optó por el 'no pasa nada', por el 'nunca pasa nada'. Eso era muy característico del franquismo»*. Sin lugar a dudas, pueden fundarse muchas analogías entre lo que vive Colombia y lo que vivió y heredó España bajo un régimen fascista.

Apostado el testimonio de este libro en el Estado español, eso que dijo Castilla del Pino debemos recogerlo cuando, entre la inmensa mayoría de los exiliados y exiliadas en la dispersión, hemos necesitado algún día, y seguramente seguimos necesitando, la asistencia puntual de un psiquiatra, de un antipsiquiatra o de alguien que con similares saberes a cuestas nos diga de qué padecemos, de qué hemos enfermado y cuán grave es nuestro esta-

do del alma. Por higiene, no sólo mental sino moral. Porque si las masacres que *no son noticia* son signo de buena salud, nosotros estamos enfermos; porque si, además de retribuir las, es salud premiarlas (como pasó con Uribe Vélez en Madrid delante del sucesor monárquico o Príncipe de Asturias, delante de empresarios y políticos cuya espumosa verborrea *democrática* se confunde con su caviar), nosotros sí estamos enfermos.

Tiene apenas un atisbo de metáfora y sarcasmo lo que se acaba de manifestar. Ciertamente, no estaría mal que hubiera en algún momento un psiquiatra o un antipsiquiatra comprometido con la verdad, entre la concurrencia de personas por construirse con ella. Pero uno que no actúe como parapeto de una estructura de matones a sueldo, como hizo y continúa haciendo en Colombia un ex alto comisionado gubernamental, el psiquiatra Luis Carlos Restrepo, para tergiversar y encubrir crímenes del régimen que encabezó Álvaro Uribe Vélez. Gerencia de *inmunes* desde la cual se ha desarrollado una inteligente estrategia autoritaria, establecida con base en el *negacionismo* acuñado por el jefe de propaganda fascista de Uribe, José Obdulio Gaviria, enlace mafioso y paramilitar. En oposición a este género de esbirros, el llamado a alguien profesional y decente no es más que otra ironía. Lo que se demanda son seres que sean consecuentes con la verdad que llevan y enseñan.

El filósofo Santiago Alba Rico reconstruye al comienzo de uno de sus libros (*Capitalismo y Nihilismo*) lo que fue el mayor naufragio en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, en 1996, y cómo apenas un pescador de un poblado italiano se atrevió a romper el silencio, el miedo y la indiferencia reinantes y normales, ayudando a un periodista a investigar esta tragedia de la que habían sido víctimas 282 personas inmigrantes venidas de países muy lejanos. Subraya Santiago que la de aquel pescador fue una acción moral «*en una sociedad de agnosia recompensada*», sociedad que veía como natural o normal echar tierra sobre el naufragio. «*Devolver cadáveres al mar era un gesto sano y rutinario mientras que tratar de salvar al me-*

nos su memoria era, en cambio, un atentado enfermizo contra la paz social». Ricardo Ferrer y Nelson Restrepo hacen acá algo equivalente a lo que hizo ese singular pescador siciliano que se negaba a volver a tirar al mar los restos de identidad de las víctimas.

III. La mediación y la lucidez del testimonio contra el negacionismo

La estrategia estatal en Colombia ha sido instituida en sucesivas y articuladas negaciones, entre las cuales están la negación del conflicto político-militar y sus causas; la negación del contendiente insurgente; la negación de las víctimas en serie; la negación del derecho internacional; la negación del usufructo político y económico de miles de asesinatos, masacres, desapariciones y del desplazamiento de población como limpieza territorial y política. Empresarios neoliberales, terratenientes, transnacionales, narcotraficantes, paramilitares y castas de políticos del *statu quo*, todos a una, en defensa de sus intereses de rapiña y hegemonía, aclaman la victoria contraguerrillera, manipulando expertamente a gran parte de la sociedad que danza ebria con ellos y que reelige su política, mientras se ocultan flotantes restos de verdad, restos de cadáveres indóciles.

Tomando claro partido por los de abajo, Ricardo y Nelson son un buen ejemplo de quienes saben que la historia de tanta ignominia no está culminada y, preocupados, hacen lo posible por removerla con lucidez en su quehacer y lugar. Sujetos inquietos, que comunican para intentar sanar con la conciencia, personal y colectiva, estando todos gravemente enfermos. Por eso su aporte no es sólo valioso y valiente, sino, más que oportuno, urgente. En la medida en que se les discierne y no simplemente se les oye. Si eso pasa, como debería ser con este libro, mejor nos atendemos y advertimos entre todos y todas, desde lo que somos y padecemos.

Nos podemos sanar cuando traspasamos la rutina de la denuncia sobre la muerte que decae en asunto banal; cuando se va más allá de una narración lineal al interpelar *el afuera del declarante*, cuya transparencia impulsa a comprender también *los adentros del testigo* que vive la indignación existencial por la impunidad; cuando nos reconocemos como él: con nuestro nudo en las manos y la garganta, mascullando palabras que no sabemos si tragar o devolver.

Ahora, en este texto, están convertidas en lanzas escritas, no ya por invocación del derecho a la memoria, sino por *la obligación de la memoria*, que en este caso es una sólida obligación poliédrica: profesional, ética y militante, que va de las circunstancias de sobrevivientes, entre las eventualidades y fatalidades de amenazas, a la opción que asumen como *testigos por convicción*, siendo ambos además leales a sus deberes de defensores de derechos humanos y, en el caso de Ricardo, de periodista, con el cometido de responder a las labores en las que ni la justicia es una fábula ni la memoria un ornamento, para que la paz que se construya tenga futuro.

Sobre esto último, es el momento de señalar cómo lo que Ricardo Ferrer vivió en 1997 y 1998 fue luego experimentado por otros mediadores por la paz o la regulación del conflicto armado, no ligados con las argucias de un Estado secuestrado por élites depravadas, sino facilitadores resueltos a cumplir un papel de efectiva e imparcial aproximación con las organizaciones rebeldes. Un ejercicio que ha costado la vida, la cárcel, la persecución, el exilio, la desaparición forzada o el permanente hostigamiento a mujeres y hombres, nacionales o extranjeros. Valga mencionar el enorme coraje de dos mujeres comprometidas con esa perspectiva de paz y justicia social, Piedad Córdoba Ruiz y Remedios García Albert, que enfrentan hoy la saña del Estado colombiano y las consecuencias de una sincronía política y judicial operada por cuerpos de seguridad o agencias represivas de Colombia y España, respectivamente.

Una referencia me resulta imprescindible. Es sobre el proceso conducido por Piedad Córdoba y quienes la acompañan en la búsqueda de verdad recabada en cárceles de Estados Unidos, donde jefes paramilitares ya han indicado una parte de la responsabilidad directa de Uribe Vélez y sus camarillas en la ejecución de crímenes atroces. Ella dejó constancia ante altos cargos del gobierno español, en junio de 2009, frente a algunos de nosotros, de lo que significa respaldar no a un gobierno de derecha por serlo, sino a un grupo de asesinos con esa franquicia política, con cuyo capo se sientan figuras que pregonan los derechos humanos, la defensa del derecho internacional y la alianza de civilizaciones. En sus escritorios están informes que, en otro tiempo, con otros políticos y con otros jueces, habrían llevado al menos a una distancia por razones de cálculo penal, por el futuro deseado de una quimera: que a una Corte vayan no sólo los autores sino quienes fueron copatrocinadores y beneficiarios, en sus variadas formas, del hecho criminal que nos avergüenza como humanidad. Los altos dignatarios de la política exterior española deberían saberlo.

Por eso el Estado colombiano ha buscado arrasar no sólo la mediación política —para hacer sentir su imperio sobre los otros, sin arbitraje o intervención que suponga algún diálogo y homologación de los insurgentes—, sino que ha perseguido con asombroso poderío los vestigios de verdad para destruirlos, amenazando a cientos de personas por la mediación de auténticos testimonios y acorralando la inmediatez de revelaciones temibles, suprimiendo la vida de varias *claves*, de *declarantes* tan directos como *peligrosos*. Un ejemplo fue el ex paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, quien atestiguó contra Uribe en 2008, señalando, entre otros hechos, la responsabilidad del entonces Gobernador de Antioquia en la masacre de El Aro, cometida contra campesinos de Ituango, entre el 22 y el 30 de octubre de 1997. Villalba fue asesinado el 23 de abril de 2009, cinco días antes de que Uribe recibiera en Madrid el premio Cortes de Cádiz a la Libertad y fuera agasajado por el empresariado español y los partidos de Rodrí-

guez Zapatero y José María Aznar —quien debería estar ya acusado formalmente como criminal de guerra, al menos por la bomba de barbarie que lanzó en Iraq—, partidos que aprobaron en 2009 el cercenamiento de la jurisdicción universal, protegiendo así a pares israelíes y colombianos, entre otros.

IV. La verdadera solidaridad sin fronteras, la dignidad posible

La estampa de un psiquiatra o de un antipsiquiatra es simple simulación. Se busca al ser humano que pueda comprender los puentes del alma aquejada y lúcida de otros seres, y la propia, en revuelta moral frente a lo que nos rodea, mirando el cuerpo de un sufrimiento en la mente del cuerpo sufriente por violencias explícitas o sigilosas. Alguien que nos ayude a explicar qué diablos nos ocurre, desde un diagnóstico potable de la realidad impotable, compartiendo la no renuncia, la no venta, como lo hacen los autores de este libro, quienes comienzan y terminan indagando sin declinar, haciendo bien sin una remuneración. Alguien que nos esclarezca qué pesadilla nos duerme y nos pudre; que nos ilustre para examinar lo que nos pasa como sociedad cuando tanta muerte inmundada es tan altamente recompensada. Cualquiera puede arrimar el hombro para cargar estos cántaros de memoria; cualquiera que la tenga o la quiera producir como emancipación frente a leyes, sentencias judiciales y políticas, incluso refutando memorias justificadas cuando devienen en insolidarias.

Las memorias del pasado no pueden constituirse en canteras de dignificación y humanidad, si con ellas no se sostienen resistencias del presente y solidaridades con quienes se levantan contra la humillación y la injusticia en cualquier parte del planeta. Eso es ser hombre o mujer *de su tiempo*. Cara al mundo histórico y ético donde somos, no *cara al sol*, como reza el himno falangista, ni provechosamente *mirando para otro lado*, como el juez Garzón, ni *con la cabeza baja*. Ninguno de esos ha sido el rumbo de los defensores

de derechos humanos comprometidos contra la servidumbre actual. Lo ha hecho Ricardo Ferrer, quien inició este libro antes que nada como artesano de la memoria, vigorizada y agudizada en su caso con nuevas agitaciones, con la alteridad de otros dolores asumidos con su correspondiente convulsión espiritual e intelectual. Por eso habla de la responsabilidad criminal de Israel, tanto por la barbarie a la que somete al pueblo palestino, como por lo que pasa en Colombia. Pues el precio de tener que estar allí en la primera etapa de su exilio, Ricardo lo convirtió en posibilidad al conocer el nexo entre los homicidas de allí y los de allá, con el mérito de querer comunicarlo, indicando la exigencia de ahondar en ese tema, que él nos deja enunciado para futuras pero urgentes investigaciones sobre la intensidad y actualidad de esa alianza entre estructuras y doctrinas criminales, alentadas en un punto medio: España.

El objetivo que Ricardo y Nelson persiguen, implicados activamente en las tareas de reparación de la esperanza, es que hombres y mujeres, desde la solidaridad despierta, nos puedan echar una mano para entender y combatir el hecho de que presidentes de gobiernos, que se estiman decentes, y amplias capas de sociedades cómplices, que alardean con los derechos humanos y las virtudes civilizatorias, abrazen y rodeen en nombre de sus naciones, con pleno respaldo, a un mafioso como Uribe, sobre el cual abundan pruebas de crímenes y corrupción.

Los autores buscan que haya personas que nos acompañen cuando se pregunta y grita por qué a Uribe Vélez se le premia en España como defensor de la democracia y las libertades, cuando cientos y miles de madres, víctimas de la política uribista, lloran a hijos ejecutados, a hijas desaparecidas; cuando subsiste en la miseria material y en la sumisión una nueva generación que apenas recuerda los descuartizamientos de los suyos, las mutilaciones con motosierras; mientras se evapora la reciente confesión de que los paramilitares, socios de hecho de Uribe, usaron —entre otros métodos— hornos crematorios, por orientación de los

mandos militares, para borrar huellas de cientos de víctimas o se encubre otra práctica también sistemática: el asesinato de centenares de muchachos pobres que fueron presentados como *guerrilleros dados de baja*, fenómeno que se conoce como «*falsos positivos*», para que miembros del Ejército, implicados en tal eficacia y resultados, pudieran obtener así recompensas de diferente orden: días libres, ascensos, dinero...

Por esas y muchas más razones, lo que se requiere ante la estrategia de un terrorismo de Estado que continúa y se moderniza —con el reemplazo inteligente de Uribe por nuevos agentes de tal política uribista de *negacionismo* e impunidad—, no es sólo ni tanto una lectura psiquiátrica sobre sus patologías ni una revisión de sus cuentas y haciendas, lo cual no vendría mal. Lo que se requiere es acompañar un poder material, social y político que proceda de la rebelión con límites contra la opresión; emplazar límites a quienes se lucran con la muerte; combatir tanta devastación probada. Como este libro lo demuestra: no todo está acabado, ni tiene porqué permanecer impotente o en silencio.

V. La violencia de un sistema

Cumplen los autores una importante labor con este texto, como otros pocos armadores de memoria han hecho estos años, documentando sobre el macabro régimen mafioso de Uribe, aproximándose en sus investigaciones al prontuario de un personaje que ha sido reseñado como importante eslabón del paramilitarismo y del narcotráfico, pese a lo cual se mantiene la imagen fijada por la propaganda que circula en la gran industria de los dominantes medios de comunicación, que nunca enseñan las pruebas que apuntan a aquel como un soberbio y avieso victimario. Pero este trabajo no nace sólo de un hacer periodístico acerca de la genealogía de la criminalidad que se alojó en cada vez más aparatos del Estado y el particular *establishment neoliberal y neoseñorial*.

Se trata de un testimonio directo, al haber presenciado el rostro y el rastro de masacres ejecutadas contra comunidades inermes, por unas fuerzas militares y paramilitares adecuadamente coordinadas, cuando Uribe Vélez gobernó un gran trozo de Colombia en el ensayo de lo que es hoy un completo y complejo proyecto nacional y transfronterizo. Ricardo nos cuenta lo que vivió, lo que murió, lo que fue aniquilado y lo que resiste. Lo que escuchó y no puede callar. Nos lo viene narrando hace años.

Ahora ese relato nos lo ofrecen por escrito, en un sólo texto, trece años después de aquellas masacres, asesinatos y amenazas. No significa que sea tardío su aporte. Al contrario. Nos anticipa que el tiempo de luchar por la verdad, contra la impunidad de crímenes de lesa humanidad, no acabará pronto, y que será muy difícil su itinerario; que saber andar en ese proceso depende, en primer lugar, del hecho de *no olvidar* y de *cuidar la indignación* frente a lo perpetrado; que de ello nace nuestra dignificación; que hay iniciativas de las víctimas para no dejar que la violación lo irradie todo. Así, respondiendo a su modo todas esas demandas, este trabajo alimenta un expediente, que no es sólo contra Uribe Vélez. Con su sentido se subraya la cuestión de fondo: la podredumbre de un sistema.

Al contrario de lo que pasa en algunas experiencias de países con auge de investigaciones de la memoria histórica en la última década, envasadas algunas más para contemplaciones y apaciguamientos que para regenerar la batalla por la justicia, la cosecha que puede obtenerse de este esfuerzo de Ferrer y Restrepo junto a otros trabajos de documentación debe servirnos para enfrentar en este terreno las nuevas pretensiones de consolidación del régimen neofascista colombiano y, en nuestro ámbito, a sus valedores europeos. En oposición a una lógica de quietismo e inmunidad que ofrece una cierta memoria de adorno, investigaciones vivientes como ésta, que van más allá de un reporte de derechos humanos o de un ensayo historiográfico, nos deben animar a develar diversas complicidades, muchas agazapadas en caca-

reados nichos *progresistas*. Por ejemplo en el Estado español, donde de forma resuelta y cínica diarios como *El País* difunden mentiras o callan verdades, al igual que lo hacen *formadores de opinión* y algunos académicos liberales que enarbolan la *cultura* de la *pacificación* usando palabras como *paz* y *seguridad* a modo de disuasivos y disolventes, con los que hostigan en pos de la renuncia de diferentes rebeldías, para que cesen contra un sistema de opresión y sus mecanismos de reproducción, para que se acepte un orden de cosas radicalmente injusto.

Por eso es contundente este trabajo: porque su peso y su modestia contribuyen a que se abra –y no se cierre– una investigación contra Uribe Vélez, contra escuadrones de la muerte, contra unidades de las fuerzas armadas, contra grupos económicos depredadores. Una investigación que se realiza desde hace años por nodos de organizaciones y personas perseverantes en tremenda desventaja ante el poder del silencio, que trabajan por documentar las responsabilidades de la larga y honda *guerra sucia* en Colombia.

Nace así un proyecto de respuesta con propuestas serias, como la necesidad de una Comisión Ética, que se forja entre otras herramientas del MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado). Todavía disperso, en ciernes, se cualifica para arrojar luz, ya en instancias internacionales, y mejor si fuera para procesos nacionales desde perspectivas de justicia de ruptura. Sin transacciones y transiciones funcionales a ese sistema de muerte, sino para la recomposición todavía lejana de un país y su cultura política. Que será superadora de paradigmas como el de la transición española, sólo si se logra conocer cómo y quiénes ordenaron desaparecer y matar a miles de personas; quiénes se hicieron con ello más ricos y poderosos; quiénes extirparon organizaciones sociales y políticas contestatarias; cómo se enmascaró una maquinaria de exterminio desde las direcciones empresariales de los medios de comunicación, que son los que hacen posible que la muerte de otros *no sea noticia*; que sólo reseñan lo que les interesa,

como hacen con el alardeo de cifras del secuestro, cuya engañosa o falsa estadística ha quedado al descubierto, siguiendo la lógica de abultar para propagar una versión, para conquistar adhesiones a los planes de fuerza y ceguera contrainsurgentes.

VI. Contra la buena conciencia

Los autores de este libro y sus editores han sido tercos. Y a fuerza de su buena tozudez afectan la insensibilidad reinante: complican nuestra indolencia y acostumbamiento, para hacer incómoda la *buena conciencia* frente a los crímenes de los que somos más que espectadores. Al contar con este acreditado documento, que debería tener también una repercusión judicial si cayera en manos de algún fiscal o juez honrado, tiene que ratificarse lo dicho otras veces sobre personas de nuestro tiempo que son como aquellos hombres que Albert Camus describió en *La Peste*, en la aturrida elaboración de una indocilidad ante el pláceme de la muerte. Y evidentemente la impunidad que reproduce el crimen de los poderosos es muerte. Sin más. Por eso quienes acá documentan no se fugan de su deber. Escogen ser dueños de su testimonio y no esclavos de sus silencios.

En 1963 se publicó el libro *La banalidad del mal* de la filósofa judía Hannah Arendt. En él se refirió ella a Eichmann, aquel nazi responsable de miles de asesinatos dentro de la maquinaria genocida en la que era apenas un burócrata. Con la descripción de este funcionario, ella relató no sólo una cierta psicología del matón de buena conciencia, sino la lógica de su trabajo en la industria de la muerte. La banalización del mal significa así varias cosas: que el mal es común y una rutina; que al convivir con lo perverso no lo distinguimos de lo ordinario; que carece de toda importancia y novedad.

Después, muchas reflexiones jurídicas, pedagógicas, filosóficas y sociológicas, plasmadas en publicaciones, o producciones

de cine y teatro, han reivindicado o recordado, del otro lado, la denominada *banalidad del bien*, en cuya cadena se supone están los que no matan, los que tienen interiorizada la bondad, a los que les es connatural ser benignos, a los que les es familiar y habitual *hacer el bien*. Por ejemplo, quienes sienten que cuando van a su oficina en un banco, una ONG, una agencia de cooperación o ayuda humanitaria, una universidad, una iglesia o una dependencia estatal desempeñan una función no perjudicial, asumida como útil y equitativa, desde la que se postula y cumple la *normalización* de un modelo que lubricamos y mantenemos con presunción u orgullo, como si no asesinara y expoliara o como si no contara para ello con nuestro permiso o colusión.

De ahí que la inmensa mayoría de los periodistas, políticos o empresarios gocen de *buena y tranquila conciencia*. Y también las capas de súbditos de esa lógica a la que estamos enganchados. Una tibia racionalidad que no se ve asaltada, salvo cuando libros como el presente tocan a la puerta, pero sólo de ciertas sensibilidades, para hacernos mirar, preguntando qué hemos hecho y qué haremos ante esta miseria humana. No para injertar la culpa, sino para sembrar la resistencia. El libro aludido de Alba Rico lo hace señalando que debemos hacer sentir que *las cosas ocurren realmente*, localizando los focos de *construcción de la realidad*; y éste, el que tenemos en las manos, concreta un esfuerzo de memoria no decorativa o estética, impugnando la lógica que oculta lo sucedido, la que hace que el crimen elocuente no sea noticia.

Que maten a otros y no sea noticia y, si llegara a ser noticia, que permanezcamos en nuestro confortable sillón, tiene que ver no sólo con dimensiones epistemológicas y psicosociales, sino con las consecuencias éticas y políticas de un sistema destructivo. Dos pensadores cercanos trabajan con suma claridad y rotundidad esa reflexión para nuestro despertar, dos compañeros del ámbito cultural, político e intelectual español, Santiago Alba Rico y Carlos Fernández Liria (de ambos es el reciente libro *El naufragio del hombre*). El profesor Fernández Liria nos ha dicho: «no

cabe duda de que el papel de los medios de comunicación respecto del nihilismo contemporáneo es mucho más importante que el de la Iglesia. Los periodistas y los intelectuales mediáticos son los nuevos sacerdotes y obispos de este mundo secularizado en el que se ha vuelto imposible distinguir el bien del mal». Cita a Günther Anders, pareja de Arendt, quien, refiriéndose al colapso moral que representó que todo un pueblo como el alemán acompañara la aventura nazi, denunció la continuidad de esa complicidad entre nosotros, en la conciencia occidental en general. *«Lo que le preocupaba era que nos habíamos vuelto analfabetos emocionales y que eso nos abocaba a un abismo moral en el que todos nos hacíamos cómplices de un holocausto cotidiano e ininterrumpido».* Alba Rico nos viene exponiendo coherentemente, y con ello nos revoluciona, sobre cómo el capitalismo perpetra el *nihilismo normalizado*, sin que reaccionemos a la *selección de vidas*, al *cálculo* que mata, al ordenado precio de la vida de otros y el desprecio por su muerte. Esto es lo que explica que los empresarios y políticos españoles, o los editores de *El País*, se deleiten con el sicariato eficaz de Uribe Vélez, laureado por su colosal seguridad para los negocios, pues ha podido brindar y blindar resguardos para la continuidad del saqueo económico y el enajenamiento. Como lo hacen en relación a Palestina, Afganistán o Iraq. Ellos mercantilizan para que unas matanzas lejanas, en la geografía y en el tiempo, sean un dato más del que podemos prescindir, tanto como del postre.

Mientras miles y miles realizaban sus compras de año nuevo, una fría noche de enero de 2009 en Madrid, estaba Ricardo Ferrer con otros latinoamericanos defensores de derechos humanos e inmigrantes. Entre no más de un centenar de personas en un grito común, vencidas pero no rendidas, coincidentes, con la justa indignación y esa dignidad evocada que surge de estar al lado de las víctimas de un sistema, no del otro lado. Sin más banderas que la lucha por la verdad, como si ella fuera suficiente. Protestaban por la masacre que gran parte del mundo, no sólo Israel, estaba cometiendo contra el pueblo de Gaza, sobre

la cual semanas después pasaron página los grandes diarios y los círculos políticos dominantes, como sucede año tras año, mes a mes, ante los crímenes y la impunidad institucionalizada en Colombia. Es la *limpieza mediática* que sigue a la *limpieza étnica o política-social* del enemigo, de *los otros*.

No siempre va a ser así. Hay límites. Hay rebeliones que ya deambulan de la mano y con la palabra de derrotados y derrotadas, en insumisión, que saben que lo son y que permanecerán en tal revuelta moral, porque repudian el triunfo del entorno, el de los crímenes que nos rodean y sus gestores. Testigos no protegidos sino expuestos, que dan cara entre el fandango de tanta mentira y frente a la incitación de tanto olvido.

Contra la estructural banalidad del mal y sus equivalencias prácticas, como lo es el *bien*, banal o no, predicado en un sistema de mercado capitalista que monopoliza sus *buenas* violencias.

Contra la *buen*a conciencia que paga en diferido y en especie a los asesinos a sueldo, y contra la *tranquila* conciencia y el *bien* estar que comparte renta y dividendos de miles de asesinatos ordenados desde arriba.

Contra el *bien* que hace viable el éxito histórico, no de los que ayer activaron la motosierra, sino de *ilustrados civiles, políticos, jueces, empresarios y propietarios filántropos* que la prestaron para encumbrar a Uribe Vélez como presidente y regidor, y a sus sucesores.

Contra el *bien* de los jueces que absuelven a victimarios en Madrid o Bogotá, mientras persiguen a víctimas y testigos; y contra el *bien* que los maquilla en medios de comunicación, desde España o Colombia.

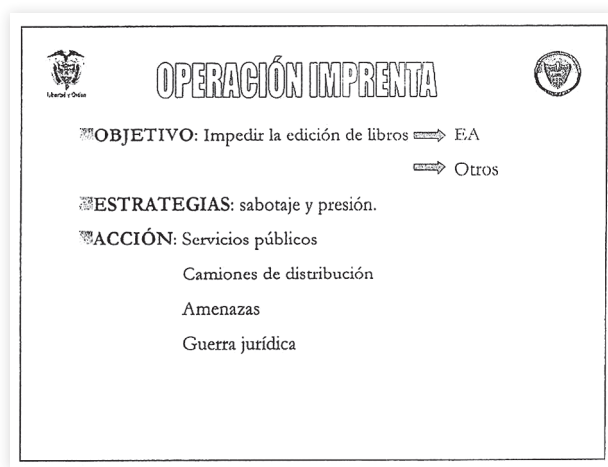
Contra el *bien* que oficia como condición de posibilidad de la impunidad y como *condición sine qua non* de las violaciones por venir. El *bien* de los que deciden, desde sus emporios, que matar y morir lejos y pobremente no es noticia.

No siempre va a ser así. Nos lo pone de presente la afirmación ética y esperanzadora de este libro que Ricardo Ferrer y Nelson Restrepo nos entregan, con la labor editorial de Cambalache y Soldepaz Pachakuti. A todos ellos, gracias.

Carlos Alberto Ruiz Socha
Abogado e investigador social
18 de abril de 2010

*A doce años del asesinato, ejecutado por el Estado colombiano,
del Compañero y Maestro Eduardo Umaña Mendoza*





Esta imagen reproduce uno de los ciento treinta y cinco documentos que la Fiscalía General del Estado colombiano ha decomisado en un registro a las oficinas del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, dependiente del presidente Alvaro Uribe). Los documentos describen planes contra la Corte Constitucional, los partidos de oposición, ONGs, líderes políticos y el exilio colombiano. En cada uno de ellos se especifican las acciones a realizar, que incluyen campañas de desinformación, desprestigio, montajes y creación de falsos vínculos con la guerrilla.

Destacamos este documento en concreto porque su objetivo es impedir la edición de libros como *Nos matan y no es noticia*, textos que denuncia la parapolítica del gobierno colombiano.



Nos matan y no es noticia

Parapolítica de Estado en Colombia



Introducción

Desde agosto de 1996 hasta el 30 de mayo de 1997 se desencadenaron una serie de acontecimientos en el conflicto colombiano de los cuales yo creía ser un mero espectador. Los hechos, aparentemente tan lejanos, tocaron a mi puerta y cambiaron mi vida cotidiana hasta el punto de tener que optar por el exilio. Exilio, que no equivale a silencio.

Desde 1996, la comandancia del Ejército de Colombia manejaba, a su modo, serios problemas legales: el coronel Carlos Velásquez había solicitado investigar a su jefe inmediato, el general Rito Alejo del Río Rojas, Comandante de la Brigada XVII, por nexos con los grupos paramilitares, escuadrones de la muerte manejados por el narcotraficante Fidel Castaño.

Las investigaciones del coronel Velásquez demostraron la profunda relación de las élites colombianas con el narcotráfico. Sus operaciones contra el cartel de Cali fueron fundamentales para dismantelar la red de blanqueo de dólares. Sin embargo, Velásquez fue destituido del cargo con el peregrino argumento de haber sido desleal con su jefe. Al archivar las acusaciones, el general Manuel José Bonett Locarno solo siguió la tradición militar de ocultar los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia contra la población civil.

El 30 de agosto de 2006 las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) atacaron la base del Ejército en el sitio de Las Delicias, departamento de Caquetá, con un saldo de veintisiete soldados muertos y sesenta soldados retenidos.

El 25 de abril de 2007, en el sur del país, Monseñor Luis Augusto Castro interviene como mediador para facilitar la liberación de

los soldados. La guerrilla le entregó las pruebas de supervivencia de los sesenta militares. El CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) emprendió los preparativos para liberar a los uniformados.

El 16 de enero de 1997, en el municipio de Juradó, departamento de El Chocó, las FARC atacaron a una patrulla de infantes de Marina y retuvieron como prisioneros de guerra a diez de los once supervivientes. Tras su captura, el Frente de las FARC movió a sus cautivos hasta las cercanías de Murindó, en el departamento de Antioquia, en el noroeste colombiano, a donde llegaron en mayo de 1997.

El campamento provisional de las FARC fue buscado en la región por el Ejército de Colombia, que hizo un cerco conjunto con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), que por esas fechas se identificaban también como ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá). Las comunidades del Medio Atrato rechazaban la sigla de Autodefensas Campesinas, pues los verdaderos campesinos del lugar nunca habían conformado grupos de Autodefensas ni los habían llamado. Durante la búsqueda del campamento hubo agresiones graves contra la población civil de los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó, además de los poblados vecinos en el Chocó.

El 22 de mayo de 1997 el escuadrón de la muerte de las ACCU irrumpió en el municipio de Vigía del Fuerte. Más de cien hombres armados con fusiles y ametralladoras ingresaron en seis panchas (lanchas rápidas) por el río Atrato. Reunieron a casi todos los habitantes para advertirles que en adelante el poblado quedaba bajo su control. El primer día mataron a 22 personas civiles en Vigía del Fuerte, Murri y poblados cercanos. Ninguna autoridad intervino para proteger a la población civil.

El 23 de mayo se repitió la misma acción contra el municipio de Murindó, unos kilómetros más al norte, aguas abajo en el río Atrato. Los paramilitares no respetaron las propiedades de los vecinos ni aún los bienes del hospital, pues se llevaron la lancha-ambulancia y equipo médico quirúrgico. En adelante, desde mayo de 1997, numerosos cadáveres, cuya cifra aún no se ha calculado oficialmente, fueron arrojados a las aguas del río Atrato.

El escuadrón de las ACCU prohibió recoger los cuerpos, que fueron devorados por las aves y los peces. La orden de no recoger los cadáveres fue acatada por todas las autoridades locales. Los pobladores de la región fueron desplazados masivamente hacia otros sitios del país y no cuentan con verdadera protección del Estado.

El viernes 30 de mayo de 1997 fui llamado a mediar por la vida de los diez infantes de Marina que las FARC tenían cautivos en la misma región donde estaban ocurriendo estas matanzas, entre el departamento de El Chocó y el departamento de Antioquia. Acepté hacer la mediación.

Hasta esta fecha, ninguna de las noticias tenía relación con mi vida cotidiana.

Cercados, los guerrilleros y los infantes de Marina cautivos se enfrentaban al aniquilamiento directo o al agotamiento por hambre. Por eso era necesaria la mediación del Comité de la Cruz Roja. Era urgente hacer llegar al CICR las pruebas de supervivencia de los prisioneros. Las FARC necesitaban un mediador que estuviera en posibilidad de entrar en la región del Atrato, sacar las pruebas de supervivencia y cumplir el acuerdo humanitario.

Durante mi viaje a Vigía del Fuerte escuché testimonios contra el Ejército de Colombia, que venía cometiendo masacres contra la población civil residente en la cuenca del río Atrato. Denuncié ante la justicia las acciones del Ejército y sus escuadrones de la muerte. Posteriormente, con más información, amplié la denuncia y colaboré frecuentemente con el equipo judicial hasta mi exilio, el 15 de febrero de 1998. A la fecha de publicar este libro, las masacres y asesinatos selectivos no han cesado en la región. Peor aún, tales prácticas, y a gran escala, se han extendido a toda Colombia y amenazan a los países vecinos.

Presento este documento a modo de demanda para ayudar a romper el silencio, esclarecer la verdad y reclamar justicia. Sobre todo, justicia para los habitantes de la cuenca del río Atrato.

La obligación de la memoria*

Mediadores en la guerra

La mediación humanitaria de los funcionarios de la de salud en medio de la guerra está referenciada en el libro *Recuerdo de Solferino*, escrito por Henry Dunant, en 1862. La pregunta de Dunant es histórica: ¿no se podrían fundar sociedades voluntarias de socorro cuya finalidad sea prestar o hacer que se preste, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos? Las ideas de Dunant sentaron las bases del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y los Convenios de Ginebra. Desde entonces, la mediación humanitaria de los servidores de la salud en todo el mundo es social e institucionalmente aceptada. Los funcionarios de la salud han ganado a pulso un status de neutralidad ante los combatientes del entorno. *Recuerdo de Solferino* es un libro que debería leer cada soldado y cada guerrillero de Colombia.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ofrece, en todo el mundo, su legitimidad como organismo mediador. Lo avalan razones históricas, políticas y una ética humanitaria. En Colombia, los funcionarios de la salud y la Seguridad Social jugamos un papel especial porque la guerra, en términos de nuestro trabajo, se refleja en las estadísticas epidemiológicas de morbilidad y mortalidad. Las palabras pueden sonar muy técnicas pero, en la práctica, la guerra se traduce en muertos, enfermos, heridos, inválidos, pacientes con síndrome de estrés post traumático y enfermos mentales. La tensión bélica en la vida cotidiana de Colombia se ve y se siente en los servicios de salud.

Como funcionario de la salud podía ver esto a diario, porque las sedes asistenciales de nuestra red se convierten de un momento

*Tomamos «prestado» el título de una idea muy sugerente del prólogo de C.A. Ruiz Socha.

a otro en hospitales de guerra. Participé en simulacros de evacuación hospitalaria, simulacros de atención masiva de heridos y atentados reales, guerra de bandas de narcotraficantes, ataques de milicias urbanas o riñas callejeras. Yo era un mediador reconocido en algunos de esos conflictos. En METROSALUD (que entonces no se había separado de la Secretaría o Dirección Local de Salud de Medellín) los funcionarios, en cumplimiento de su misión diaria, promovían, y lo siguen haciendo, la igualdad entre los pacientes. Los atienden con igual dignidad sin diferenciar entre guerrilleros heridos, pasajeros y peatones lesionados por accidentes de tráfico, miembros de bandas delincuenciales, niños marginados, escuadrones de la derecha, madres en parto o funcionarios del Gobierno. Todos son tratados con respeto. Es la neutralidad de la institución a la que yo servía. Y a la que sigo queriendo.

En muchas ocasiones se suspendió el servicio en algunos hospitales y centros de salud por tiroteos entre bandas y se hizo imposible el ingreso o salida de las sedes asistenciales. En ese momento fueron necesarias las mediaciones. Llevábamos este mensaje para que respetaran la neutralidad de nuestros servicios de salud, se abstuvieran de hurtar el equipo médico o de asaltar las taquillas de pago. Cada habitante del barrio debía entender que el instrumental, el equipo y el personal médico asistencial tienen como único fin preservar la vida de todos. Por eso promovíamos las mediaciones, al compartir tiempos y espacios de entendimiento con la comunidad de usuarios. Entonces nos comprometimos colectivamente en grandes campañas, donde aporté como comunicador social, periodista y funcionario público.

Existe una paradoja: mientras el Estado apoya abiertamente a los escuadrones de la muerte, los funcionarios de la salud promueven buenas relaciones de vecindad. Ante cada barrio las enfermeras, los promotores de salud, los médicos y los voluntarios, son ami-

gos. En medio de la crisis los hospitales son islas de respeto dentro de la violencia que vivimos en Colombia.

Nuestros compañeros promueven la solución pacífica de conflictos. Por la vida activamos mediaciones desde la salud pública, la comunicación social, las relaciones públicas, la comunicación organizacional y la publicidad. Quisimos llegar a cada individuo, familia y barrio. De ahí las frecuentes campañas comunitarias y las intervenciones sociales. Era de público conocimiento que mi oficina eventualmente manejaba tensiones con la guerrilla en los barrios. Tales relaciones eran la cotidianidad de mi trabajo para facilitar la gestión pública y social de nuestra red.

Una de esas mediaciones nos permitió culminar el censo del Sistema de Información y Selección de Beneficiarios de Subsidios de Salud (SISBEN), obstaculizado por los milicianos (guerrilleros urbanos). Se trataba de un censo de población para brindar servicios de salud, pero los milicianos pensaban que la información de las encuestas sería usada por el Estado para agredir a la comunidad. Iniciamos la mediación. Convocamos eventos comunitarios, con música y conciertos, donde los funcionarios explicaban sus campañas de salud y el propósito de las encuestas del SISBEN. Conseguimos el apoyo de líderes comunitarios, equipos deportivos, grupos juveniles, asociaciones culturales y sacerdotes. Ellos nos abrieron sus iglesias y parroquias a cualquier hora del día o de la noche para reunirnos con los vecinos. Sabíamos que entre el auditorio estaba siempre la guerrilla para escuchar nuestro mensaje. Como resultado, los milicianos y guerrilleros nos permitieron entrar a los barrios para realizar las encuestas del SISBEN. Las mediaciones comunitarias eran y son herramientas fundamentales en las relaciones públicas de la administración en sitios tan conflictivos como Medellín.

Para hacer las mediaciones, social y legalmente, me ampara mi secreto profesional. Actué como jefe de prensa del gabinete de comunicaciones de la salud de Medellín. Mi secreto profesional es tan sagrado como aquel que obliga al sacerdote, al médico o al abogado. En Colombia no se puede olvidar que vivimos un conflicto interno; el guerrillero, el miliciano, el sicario, el militar, el jefe de las Autodefensas o el narcotraficante es nuestro hermano, amigo, novia, amante, vecino, profesor, compañero de estudio o de trabajo, o nuestro jefe.

Por las frecuentes balaceras que ocurrían cerca de nuestros hospitales, quisimos acuñar este concepto: *Los hospitales y centros de salud son territorios de paz*. Fue la última campaña que diseñé para METROSALUD, pero no la pude ejecutar. Así es la vida «rutinaria» de los funcionarios de la salud en Colombia. Heroica.

La mediación

En la mañana del viernes 30 de mayo de 1997 entró un mensajero de las FARC a mi oficina. La comandancia de la guerrilla necesitaba un mediador entre ésta y el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja). Según la comandancia de las FARC, yo podía ser ese mediador. El guerrillero pertenecía al Bloque José María Córdoba de las FARC, que actúa en el noroccidente de Colombia, zona vecina a Panamá. La mediación serviría para entregar a diez cautivos, infantes de Marina, en poder del Frente 57.

Por mediaciones anteriores en las que yo había participado, el guerrillero ya me conocía. Explicó que su organización tenía un problema muy grave en el Atrato*. Según el mensajero, los militares habían ubicado el sitio aproximado donde la guerrilla retenía a los infantes, cerca de Murindó, en las selvas de El Chocó y Antioquia. Guerrilleros y cautivos estaban bajo cerco unificado de

*Consultar el mapa de la página 187.

paramilitares y tropas del Ejército Nacional. El combate estaba a punto de iniciarse y se podía producir una matanza. Las FARC tenían verdadera urgencia de entregar los cautivos al CICR y cumplir el acuerdo humanitario que se había logrado desde 1996 con el gobierno de Ernesto Samper Pizano.

A petición de su comandancia, el guerrillero me solicitó participar en las gestiones necesarias para liberar a los diez prisioneros. Pensaban que yo podía hacer una mediación más, como en los conflictos de los barrios en Medellín. Pero esta vez no se trataba de hacer una mediación administrativa. Tampoco de proteger a un hospital o nuestro derecho de transitar por un barrio. Me proponían hacer una mediación humanitaria a otro nivel, fuera de mi jurisdicción, pero absolutamente válida en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Dado que en el DIH los actores en conflicto, interno o externo, reconocen a los servicios de salud como entes neutrales, la guerrilla decidió solicitar mi mediación o *buenos oficios*. En rigor, mi mediación facilitaba dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Tercero común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, sobre Derecho Internacional Humanitario. Especialmente se consideraba la necesidad de proteger a «personas puestas fuera de combate por detención». Dicho de otro modo, prisioneros de guerra: combatientes que deponen sus armas en medio del combate. Los infantes de Marina capturados por la guerrilla en El Chocó se encontraban exactamente en esa situación.

A su vez, la guerrilla tenía una seria responsabilidad, porque debía responder por la vida e integridad de los cautivos. Según el pacto públicamente conocido entre el Gobierno y la guerrilla, el Estado despejaría militarmente una región de Colombia (la zona del Caguán) y la guerrilla se comprometía a devolver allí a los setenta cautivos el 15 de junio de 1997, fecha que estaba muy próxi-

ma. La guerrilla se había comprometido a entregar pruebas indudables de supervivencia de los militares prisioneros, que debían ser canalizadas hacia el CICR. Los documentos tenían que llegar a tiempo o quedaría en entredicho toda la negociación entre el Gobierno y la guerrilla.

El procedimiento normal es que el CICR analiza la autenticidad de los documentos, fotos y cartas de los cautivos que el grupo armado envía. Sólo entonces, con plena certidumbre sobre las pruebas, inicia el operativo de recepción. Tal verificación es necesaria para no exponer recursos humanos y técnicos ante impostores. En este caso el Gobierno facilitaría la actividad del CICR mediante la expedición de una Directiva Presidencial que ordenaba a las Fuerzas Armadas abstenerse de atacar aeronaves en un espacio geográfico definido del territorio nacional, durante unas fechas concretas. Hecho el despeje militar, la guerrilla llevaría hasta la zona a los setenta militares cautivos. En la zona despejada el CICR procedería a la recepción de los prisioneros y haría la verificación del estado físico y mental de cada combatiente. Finalmente el CICR haría la entrega formal de los militares liberados a las autoridades colombianas. La secuencia obedece a procedimientos y protocolos normalizados por el Comité Internacional de la Cruz Roja para activar la liberación de combatientes y militares. Así se ha hecho, en todo el mundo, durante años de intensa labor.

Dado que la guerrilla necesitaba con carácter urgente esa mediación o buenos oficios, mi misión consistiría en ir a la región del Atrato y recibir el sobre con las pruebas de supervivencia de los diez militares. A continuación remitiría estos documentos al CICR, que culminaría el operativo de liberación. Luego de hacer este trámite, yo volvería a hacer mi vida normal.

Ante el DIH yo no tenía impedimentos para ser mediador, y tampoco los tenía a la luz de la legislación colombiana.¹ Colombia ha suscrito diferentes tratados, protocolos y normas generales sobre respeto al Derecho Internacional Humanitario y gran parte de ellos han sido ratificados por el Congreso de la República. Frente al Derecho Internacional Humanitario fue y es legítima mi mediación. Otro apoyo a la mediación que la guerrilla me solicitaba nacía de la coyuntura política, con oportunidades para la paz y la distensión militar.

Finalmente, siempre que he hecho una mediación apelo a mi conciencia, motivado por una frase del Deuteronomio, 30:19, *«...escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia.»*

Se trataba, pues, de gestionar la liberación de diez militares ya fuera de combate, diez personas cuyas vidas estaban en peligro inminente. Soldados cautivos. Uniformados, gente humilde que presta su servicio militar para sobrevivir en un medio que no ofrece oportunidades. Para entrar al mercado laboral en Colombia se requiere obtener la libreta militar, que cuesta con frecuencia la vida misma. De nuevo, la opción por la vida.

Hice la balanza de conciencia: los soldados cautivos merecían una oportunidad para vivir. Si eso estaba en mis manos, debía hacerlo. Siempre es preferible la captura y posterior liberación de

¹ En Colombia las mediaciones por motivos humanitarios tienen amparo legal en varios artículos de la Constitución Nacional de 1991. Artículo 22: «La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento». Artículo 67: «... la educación formará a los colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia». Artículo: «... son deberes de la persona y el ciudadano propender al logro y al mantenimiento de la paz».

soldados, a que los uniformados sobrevivientes sean muertos en combates sin cuartel.

Otra cara, menos conocida del conflicto, es la situación de los guerrilleros y los acusados de rebelión, ya que son presos que carecen de garantías procesales. Las familias son presionadas y los abogados no tienen toda la información acerca de el proceso acusatorio. Sobre los miles de colombianos desaparecidos nunca se ha hecho una investigación seria desde la Administración de Justicia.

Para realizar la mediación yo debía cumplir un itinerario. Al día siguiente, sábado 31 de mayo, iría a los hangares del aeropuerto Olaya Herrera para tomar un vuelo chárter que salía semanalmente desde Medellín hasta el municipio de Vigía del Fuerte.

Del aeropuerto de Vigía del Fuerte tenía que ir directo al río y alquilar una lancha que me llevara al municipio de Murindó, cuatro horas río abajo en el Atrato. En Vigía del Fuerte no debía hablar con nadie, salvo con los lancheros. En Murindó saldría del bote directo a alojarme en una residencia. En algún sitio de Murindó podía ocurrir que una persona civil o algún guerrillero me abordara directamente para entregarme un sobre con las pruebas de supervivencia.

Si no ocurría el encuentro durante el sábado 31 de mayo, debía salir a visitar algunas entidades públicas, como la alcaldía, el hospital, la escuela o el despacho parroquial. Tendría que estar siempre visible y así, en algún sitio del recorrido, alguien me abordaría para entregarme el sobre. Me podía abordar un grupo de la guerrilla con sus armas abiertamente en porte o simplemente una persona civil. Desde el principio, yo no sabía quién me iba a entregar las pruebas de supervivencia. Una vez recibido el paquete debía guardarlo de todo control militar, policial o de las Autodefensas.

Si todo se cumplía al pie de la letra yo volvería a Medellín inmediatamente, el 2 o el 3 de junio, y entregaría su contenido al Comité Internacional de la Cruz Roja y diferentes entidades, según una serie de instrucciones.

Los paramilitares controlan toda la región

Ese mismo viernes, 30 de mayo, hice la llamada a uno de los hangares del aeropuerto Olaya Herrera y reservé una plaza en el vuelo semanal entre Medellín y Vigía. Anotaron mi nombre y el teléfono de mi casa. Me explicaron que, por costumbre, si la empresa operadora de los vuelos completa el cupo del avión antes de tiempo, el empleado llama a los pasajeros por teléfono y se puede volar más temprano. En vez de salir a las once de la mañana, podíamos despegar a las 5:40 de la madrugada. Pensé que esas horas de ventaja me permitirían llegar de día a Murindó.

Sábado 31 de mayo 1997. Temprano, en la mañana, tomé un taxi y fui directo al aeropuerto. Llegamos al puesto de control militar en el acceso a la sección de aviones privados. El soldado que tenía el control de la entrada hizo parar el taxi, me preguntó a qué hangar me dirigía y a qué pueblo pensaba volar. El Ejército controla así a cada persona que entra a las llamadas «zonas rojas» o de orden público. Mostré mi carné de funcionario y pude seguir.

En el hangar 31, según me habían indicado, el piloto Diego Zapata maneja un grupo de aviadores dedicados a los vuelos charter. Desde este hangar, salen vuelos hacia regiones remotas de Antioquia, El Chocó, el Magdalena Medio o el sur del Departamento de Córdoba. Pregunté por Diego Zapata y me respondieron que estaba volando, posiblemente a Ituango. Viajaríamos con otro piloto. El empleado que me atendió tenía anotados los nombres y los teléfonos de cada uno de los pasajeros en un simple

cuaderno. Me recibió el dinero del viaje pero no me dio recibo ni tarjeta de embarque.

Un hombre negro entró a la oficina, apoyó sus manos fuertemente sobre mi hombro y me avisó que necesitaba dialogar conmigo. No le conocía. Pensé que era algún agente de la seguridad aeroportuaria, de la Inteligencia del Ejército (E-2 y B-2) o un agente rural del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), pero me equivoqué. Para mi sorpresa se identificó como *Guillermo Paredes*.² No me conocía, pero preguntó sin rodeos el motivo de mi visita a Vigía del Fuerte.

Me hizo un interrogatorio riguroso. ¿A dónde viajaba? ¿A quién iba a ver? ¿Cuánto me iba a demorar? ¿Cómo iba a volver a Medellín? No estaba en mis previsiones ese interrogatorio. Esperaba enfrentar algo así llegando a Murindó, ante los paramilitares, pero no en Medellín.

Le respondí que los Hospitales Públicos estábamos organizando un seminario nacional y queríamos contar con los alcaldes de la zona del Atrato, lo que era cierto. Al parecer, *Guillermo Paredes* aceptó mis explicaciones, pero me advirtió, sin saber quién era yo, que el viaje a Vigía del Fuerte podía ser muy peligroso. A esa hora, ninguno de mis amigos, familiares o compañeros de trabajo sabía que iba a viajar a cientos de kilómetros de Medellín. Si me pasaba algo, no tendría ayuda.

Tengo algo de miedo a volar. Siempre rezo en los aviones. Al despegar, me va bien un padrenuestro. Sobre todo en los aviones pequeños cuando hay turbulencia. Tras remontar algunas monta-

²En el relato se han cambiado algunos nombres propios con el objeto de proteger su identidad. Los que aparecen en cursiva en el texto son nombres supuestos.

ñas, apareció la selva. Vi a lo lejos dos o tres tormentas distintas, azotando la selva verde, oscura, monótona, invencible. Afortunadamente el viaje fue normal y no dediqué mucho tiempo a las plegarias. Vigía del Fuerte es un poblado pequeño. En esa época, de unos cuatro mil habitantes. En la mitad del pueblo está la pista aérea. Una vez a la semana llegaba el vuelo chárter desde Medellín. Cuando el avión aterrizó y se detuvo, vi que se acercaron docenas de personas. Pensé que, en un pueblo habituado a la rutina de los vuelos semanales, tantos curiosos en la pista señalaban que allí estaba ocurriendo algo fuera de lo normal. La gente que era muy diferente a mi fenotipo, soy un hombre de piel blanca, casi rosada, con poca estatura y cabello lacio. En contraste, todos en la pista eran negros e indígenas.

Tan pronto me vieron de cabello corto, anteojos, camisa de manga larga, corbata y maletín ejecutivo en la mano, los niños decidieron llamarme «doctor». Tenía la imagen de un funcionario público normal en Medellín, pero en aquel humedal mi aspecto rompía la costumbre impuesta por el clima severo de tierra caliente. Los lugareños vestían apropiadamente para el calor y la humedad de la selva. Los niños se veían muy delgados y desnutridos. Querían llevar mi maletín a cambio de unas monedas, pero no acepté.

Por costumbre de la gente del lugar, las aeronaves no son identificadas por las marcas de los aviones o sus nombres comerciales, sino que se habla de aviones de 4, 8, 16 ó 24 plazas. Recordé que habíamos llegado en un avión de 16 sillas. Hubo tumulto de los siguientes pasajeros por conseguir silla en el avión que despegó inmediatamente, con cupo completo, de vuelta a Medellín. Según el itinerario fijado, mi siguiente paso era ir al embarcadero para conseguir una lancha que me llevara a Murindó, cuatro horas río abajo en el Atrato.

En el embarcadero, en la orilla oriental del río, vi a un lanchero y le dije que quería ir a Murindó. Era un hombre muy anciano. Con voz casi inaudible me indicó que ese día ellos no estaban bajando a Murindó. Supuse que había otros lancheros en el embarcadero dispuestos a hacer el viaje. Recorrí la orilla mirando botes y lanchas pero ningún motorista me quiso explicar por qué ese día nadie aceptaba viajar a Murindó. Pensé que los lancheros querían ganar más dinero por el viaje y yo estaba listo para regatear. «*En-tiéndanos, 'doctor'. Es que no están bajando lanchas hacia Murindó*», me dijeron en grupo. Me repitieron la respuesta aun cuando les propuse hacer el viaje por más dinero. Otra señal de que algo estaba fuera de la rutina.

Tenía una instrucción clara de no hablar con nadie en Vigía del Fuerte, salvo los lancheros. Pero en ese momento ya no era posible viajar a Murindó y, por tanto, no iba a poder recibir las pruebas de supervivencia. Había que pensar en otras opciones. Decidí entonces ir a la alcaldía. Vi indígenas con sus vestidos tradicionales; negros en bermudas y sin camisa; ancianos, mujeres y niños harapientos que deambulaban por todos los rincones de la administración municipal. Me presenté ante el alcalde, Wilson Chaverra (período 1995-1997). Alrededor de su mesa había cuatro personas. El hombre estaba atendiendo su despacho en camisilla y sudaba mares. Le informé que en Medellín preparábamos el Segundo Seminario Nacional de las Empresas Sociales del Estado. Le hice saber que de ese evento dependía el futuro de los hospitales locales y la recuperación presupuestal de la salud pública en todo el país. Todo era cierto: el evento, las fechas y los participantes. El alcalde y quienes le acompañaban se miraban una y otra vez. Entregué los textos educativos de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad que habíamos elaborado los empleados de METROSALUD y un libro sobre prevención y atención de desastres.

Se notaba mucha tensión entre el alcalde y quienes le acompañaban. Los funcionarios de la alcaldía me recibieron las cartillas, los plegables y los libros y procedieron a mecanografiar una nota de recibo oficial con membrete de la alcaldía. Igualmente tramitaron una constancia de mi visita, que se acostumbra dar a los funcionarios públicos cuando viajan en comisión a otra región. Pregunté si era posible conseguir cupo en una lancha hacia Murindó en caso de que salieran comisiones de funcionarios. No obtuve respuesta. Mientras mecanografiaban el recibo del material educativo y elaboraban el certificado de visita —el cumplido, en la jerga administrativa— me dirigí al urinario de la alcaldía.

Darío Rincón me siguió. Tan pronto como quedamos solos en el urinario me dijo en voz baja y sin mirarme: *«usted está en serio peligro de muerte. Aquí están pasando muchas cosas. Tiene que buscar el modo de irse lo más pronto posible. Yo sé por qué le digo. Es mejor que usted no baje a Murindó porque al contrario, toda la gente se está viniendo de allá»*. No dijo nada más. Darío Rincón salió a mezclarse entre el personal de la alcaldía y no volvió a dirigirme la palabra. Cuando volví del urinario al despacho del alcalde me dediqué entonces a mirar las caras, a observar el ambiente que había en las oficinas.

Posteriormente la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz comprobó que, el 1 de junio de 1997, integrantes de las ACCU que controlaban la población de Vigía del Fuerte, retuvieron a David Osorno Valencia, de 27 años, motorista del Hospital del Bojayá, y lo asesinaron de varios disparos.

Mientras, yo llegaba a Vigía, sin saber del asesinato. Por eso Darío Rincón me avisó que estaba en serio peligro de muerte y que debía salir del pueblo. Por eso estaban tan tensos los funcionarios de los servicios de salud cuando llegué a visitarlos.

Hasta donde me había contado el mensajero de las FARC en Medellín, la región estaba en disputa entre guerrilla y paramilitares. Por lo que me dijo *Rincón* comprendí que los guerrilleros ya habían abandonado la zona.

Los paramilitares tenían todo el control del casco urbano en Vigía del Fuerte y posiblemente en Murindó. De manera que ya estaban en el pueblo y en la misma alcaldía. Eran paramilitares los hombres que estaban dialogando con el alcalde Wilson Chaverra cuando yo entré a la oficina sin previo aviso; había cometido un error muy grave al ir allí. El alcalde y sus amigos eran el motivo por el cual el guerrillero me había dado la instrucción de no hablar con nadie en Vigía del Fuerte. Seguramente los guerrilleros ya sabían que Wilson Chaverra trabajaba con los escuadrones de la muerte, pero aquel omitió decírmelo. Yo había desobedecido las instrucciones, muy claras, de no hablar con nadie, salvo los lan- cheros y, sin saberlo, me había metido en la cueva del lobo.

La relación de Chaverra con los escuadrones de la muerte se confirmó meses después cuando éste pasó a la clandestinidad. Entre el 21 de abril y el 11 de mayo de 2002 hubo acciones de los paramilitares en Vigía y el ex alcalde fue visto entre los agresores, con uniforme de las AUC y armado hasta los dientes.

Al salir de la alcaldía noté que algo estaba fuera de orden. En teoría el Ejército tiene una presencia rutinaria a lo largo del río Atrato. Pero ese día no había tropa a la vista. Escuche que varias personas me decían cosas, muy rápidamente, en voz baja, pero no les entendí o no les quise escuchar lo que me decían en ese momento. Por otra parte su acento era muy diferente al mío, pues yo soy "paisa", habitante de los Andes, y ellos pertenecen a la cultura más raizal del Pacífico. En medio de todo esto, sólo tenía oídos para las palabras *embarcadero*, *lancha*, *gasolina* y *viaje a*

Murindó. Tenía miedo, ganas de orinar otra vez y hambre, pero no podía delatarme. Me sentía vulnerable y en la piel se me notaba el susto. Ya no tenía medios para volver, pues el avión había despegado a los pocos minutos de haber aterrizado. Oré de nuevo por mi pellejo. A esa hora yo quería salir de Vigía del Fuerte, pero no había más vuelos a Medellín y ninguna lancha podía salir a Quibdó. Estaba atrapado en un pueblo dominado por los *mochacabezas*.

Los paramilitares no respetaron los hospitales

Me dirigí al hospital municipal de Vigía. Noté que en el embarcadero y en toda la orilla del río había silencio y muy poca gente en la calle. Lo normal en este tipo de pueblos de tierra caliente es que las zonas vecinas al embarcadero estén llenas de gente, de ventas callejeras, de humo de fritangas y sobre todo de música. Tampoco pude ver a los pescadores o niños chapoteando en el agua. En un día de calor pegajoso, con más de treinta y cinco grados de temperatura media y humedad extrema, el río estaba solo.

En cuanto llegué al hospital, pregunté por el director médico o el administrador. Creí estar a salvo allí, y confié en que no me ocurriera nada. Pero la sensación de seguridad se fue al suelo al dialogar con el médico de turno, porque él no conocía a los médicos de la Red Hospitalaria de Medellín, ni a mi jefe, ni a mis compañeros de trabajo, casi todos egresados de la Universidad de Antioquia. Aquel médico era egresado de otra facultad de la Costa Atlántica. En caso real de peligro, él no podría ayudarme con solo decir: «sí, yo le conozco, es el jefe de comunicaciones de METROSALUD».

El director médico no estaba y unas adolescentes, voluntarias (Vigías de la Salud), me mostraron la oficina del administrador hospitalario. Estaban allí de paso, acompañando a los funcionarios que venían en misión oficial desde Murindó. Quería preguntarles

por qué razón llegaba tanta gente de Murindó, pero omití hablar en ese momento. En cambio les pregunté si podía unirme a ellas de retorno, si tenían espacio en las lanchas. Me respondieron que había espacio suficiente en la lancha pero estaban solucionando primero un problema. Otro miembro del voluntariado del hospital me respondió que ellos aún se demoraban un poco en Vigía del Fuerte. Les ofrecí dinero para que me incluyeran en el viaje de retorno. Ofrecí pagar el costo de la gasolina y no aceptaron. Una joven negra me dijo, de manera muy franca, que si yo quería bajar a Murindó debía presentarme ante el comandante de las Autodefensas y pedirle permiso para hacer el recorrido. Según ella, si el comandante aprobaba, entonces la comisión hospitalaria podía incluirme en el viaje. Al ver mi perplejidad, otra joven negra fue más directa: si yo me unía a la comisión sin permiso del jefe de las Autodefensas, morirían todos.

Ella me explicó que, cuando los salubristas se disponían a salir de Murindó, el jefe de las Autodefensas les controló la partida. Anotaron el nombre de todos y cada uno. Anotaron cada cosa que los funcionarios de la salud empacaron en la lancha, especialmente comida, medicinas y ropa. Los paramilitares les preguntaron cuánto tiempo se demorarían en hacer sus diligencias en Vigía del Fuerte y la identidad de cada uno de los funcionarios con quienes se tenían que entrevistar. Igualmente, les obligaron a dar la lista de compras e insumos hospitalarios que traerían de vuelta. Otra joven relató que antes de salir su grupo los paramilitares les hicieron una advertencia: debían ir y volver las mismas personas que estaban anotadas. Tenían que presentarse ante el comandante de las Autodefensas en Vigía para que éste avisara por radio al jefe de las Autodefensas en Murindó si había cambios.

Les amenazaron. Si llegaba a Murindó la lancha del hospital con algún desconocido, le matarían y lanzarían al río inmediatamente. Me dijeron que algo así ya les había sucedido a personas que

llegaban con más alimentos de los autorizados por los paramilitares. Estaban controlando sobre todo la sal y la gasolina. El grupo de las Autodefensas en Murindó les controlaba también la cantidad de gasolina que podían tanquear en la lancha-ambulancia del hospital. Los funcionarios contaron que llegaron a Vigía con la gasolina justa, antes de que el motor se apagara. Para volver a Murindó debían repostar de nuevo la lancha del hospital en presencia de los paramilitares. Cada gota de combustible en la región estaba controlada por los sicarios. El panorama había cambiado por completo.

El guerrillero que me visitó en Medellín me previno que posiblemente me iba a encontrar un retén de las Autodefensas en medio del río, llegando a Murindó. Un solo retén. Pero por lo que contaron en el hospital, la situación era peor, ya que cada poblado tenía por lo menos dos retenes dedicados a controlar todo lo que se moviera aguas abajo y arriba. Además, había patrullaje permanente de lanchas a lo largo y ancho de todo el río. También había miembros de las Autodefensas en el casco urbano de los poblados y los funcionarios municipales se sometían a su mandato. El pueblo estaba bajo el control total de los paramilitares.

Pude dialogar con el administrador, joven y con ganas de sacar el hospital adelante. Recapituló que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Departamental les habían transferido toda la responsabilidad como servicio municipal de salud, sin ninguna transición, y el hospital estaba en quiebra. Los médicos, enfermeras y personal asistencial llevaban cuatro meses sin sueldo. Luego me dijo que debía tener mucho cuidado al salir y me sugirió que anduviera siempre acompañado. Le hablé del II Seminario Nacional sobre Empresas Sociales del Estado que planeábamos realizar en Medellín. El funcionario me confió que los hospitales de la cuenca del Atrato, incluido el de Quibdó, estaban en igual situación de quiebra. El personal estaba mal pagado, no había

suministros suficientes y la atención a los usuarios había decaído a extremos de nivel primario. En medio de esa crisis en los servicios de salud, el hospital de Vigía del Fuerte no tenía los medios necesarios y suficientes para atender a la población propia y a quienes llegaban huyendo de Murindó. Apenas se podían brindar los primeros y únicos auxilios. En caso de gravedad, los pacientes debían ser remitidos en avión hacia Medellín o en lancha hacia Quibdó, la capital de El Chocó. Es decir, cinco o seis horas en bote contra la corriente del río.

Nunca antes en la historia colombiana los hospitales públicos habían vivido una crisis tan grande. La crisis del sector salud era y es real porque, en virtud de la política neoliberal, los hospitales públicos son sometidos, sin ninguna transición, a la competencia en la oferta de servicios, lo que ha llevado a la quiebra de la sanidad pública. Los recursos destinados a ella siempre fueron una vergüenza dentro del presupuesto nacional. En contraste, hay un presupuesto generoso para la guerra.

Cada alcalde de Colombia y cada jefe de salud municipal tenían interés en el tema, ya que el Estado abandonó su responsabilidad directa sobre la gestión hospitalaria y la transfirió de golpe a la autoridad local. La iniciativa pudo ser muy positiva, pero no en esas condiciones de celeridad, normativa cambiante, reglas de juego poco claras, competencia desleal del sector privado –con una visión mercantilista de la salud– y funcionarios inexpertos.

Estuve unos minutos a solas. Una adolescente se presentó y me dijo que era voluntaria del hospital de Murindó. Que hacía parte del grupo de Vigías de la Salud. Yo no recordaba haberla visto antes con las otras jóvenes. Me sugirió salir del hospital para ir directamente hacia el sitio donde estaba el comandante de las Autodefensas. Me dijo *«el comandante es un hombre muy querido, todo un*

amor. Él le ayuda a la gente». Se ofreció a acompañarme, diciéndome que si le hablaba en buenos términos «el comandante» posiblemente me daría el permiso para ir a Murindó. Le hablé a la jovencita de otros temas pero no le di respuesta. No quería ver al sicario. Le pregunté por un hotel o una residencia en el pueblo, los horarios de las lanchas que salen de Vigía hacia Quibdó, los hoteles de Quibdó, el día en que debía aterrizar el próximo vuelo en Vigía y los horarios de los vuelos entre Quibdó y Medellín. Ella me respondió todo lo que le pregunté. Tenía que ir primero a Quibdó, y me sugirió el nombre de un hotel, el más cercano al embarcadero.

Por fin llegó el médico, que venía acompañado por una enfermera. Me presenté y dije que quería ir a Murindó y, si no podía, directamente a Quibdó. Este me explicó que si iba a Murindó simplemente no tendría con quien hablar. El pueblo se estaba quedando solo. No había alcalde ni funcionarios, y el director administrativo del hospital, el doctor Mario Flórez,³ se había ido en el mismo avión en el que yo había llegado. Lo habían amenazado.

El director médico me dijo que podía contratar un viaje en lancha. El hospital tenía pendiente una salida hacia allí con un grupo de mujeres embarazadas, cuyos partos estaban muy próximos. Los trabajadores podían salir a comprarme un boleto y, si tenía suerte, podía ir con ellos. Pregunté por un buen sitio para ir a almorzar y la enfermera me recomendó el restaurante en donde comía siempre la gente del hospital. Antes de ir me alojé en una residencia cercana. La atendía un anciano que hacía todas las tareas. El anciano me explicó que esa tarde yo era el único huésped, pero que

³ El doctor Flórez —a cuya memoria dedico este libro— fue torturado y asesinado, posiblemente por las Autodefensas, en junio de 2003 en Caldas, cerca de Medellín. Era uno de los testigos que más información tenía sobre las masacres del río Atrato.

pocos días antes el sitio tuvo cupo completo. Ahora todos se habían ido. La residencia era el sitio donde habitualmente se alojaban enfermeras, profesores, funcionarios públicos y contratistas temporales. Todos se habían marchado. Casi todos los funcionarios eludieron asumir su responsabilidad.

Pagué una noche y salí a almorzar. Quería estar entre la gente porque tenía miedo. Era un extraño en el sitio y por lo tanto vulnerable. Pensé que mientras más gente me viera, sobre todo si eran funcionarios públicos, menos riesgo tenía de que pasara algo. Algo como desaparecer sin dejar rastro. Llegué al restaurante que me recomendó la gente del hospital. Los clientes habituales eran funcionarios públicos y contratistas que visitaban el pueblo por temporadas. El sábado 31 de mayo el comedor se encontraba medio vacío porque los comensales de siempre habían escapado en los últimos vuelos. Tras de mí llegaron una adolescente con un niño y dos mujeres, una más anciana. Otra joven servía los alimentos, y así ayudaba a su madre. Yo permanecía en silencio, sin llamar la atención, sólo pensando en el modo de salir de Vigía del Fuerte.

Una anciana que almorzaba sola, en la mesa ubicada a mi espalda, dijo discreta y nítidamente, *«señor, usted tiene que hacer algo para que se sepa lo que está ocurriendo aquí.»* Empezó a relatarme que, desde hacía diez días (22 de mayo), se había iniciado allí una matanza. La gente comenzó a hablarme en voz baja, pero sin mirarme a la cara, contándome lo que estaba pasando en el pueblo, con muchos detalles. Hablaban con suficiente voz para que pudiera entenderles. Lo hacían con disimulo, con miedo de ser escuchados desde afuera.

La imagen era absurda: de haber entrado alguien al comedor hubiera sorprendido a los comensales hablando solos ante sus platos. Ellos ya se habían enterado que no había querido pre-

sentarme ante el sicario de las Autodefensas y eso me hacía diferente a la mayoría de los funcionarios municipales. Posiblemente por ese motivo habían decidido confiar en mí. Les conté de la conversación con la mujer que me pidió ir a ver a «el comandante». Los comensales me preguntaron con quién más había hablado. Me decían que yo debía hacer algo por ellos. Que debía salir y denunciar lo que estaba pasando en la región. Tenían rabia porque les habían matado a varios amigos del pueblo y en la radio no salía ninguna noticia. *«Nos están matando y en la radio no dicen nada»*. Los vecinos mencionaban nombres de las víctimas. Nombres sueltos. Inicialmente nadie había elaborado una lista completa que permitiera saber realmente a cuanta gente mataron durante la primera semana.

Me contaron además lo que pasaba alrededor de los vuelos. Cuando se iniciaron las matanzas, el aeropuerto pasó de recibir un vuelo semanal a programar numerosos vuelos diarios. Los pasajeros eran gente que escapaba de Vigía, Bellavista y Murindó. Me confirmaron que el pueblo era como una cárcel y que hasta mayo de 1997 nunca habían salido tantos vuelos⁴ desde Vigía al aeropuerto Olaya Herrera en Medellín, todos con el pasaje completo. Pero para el sábado 31 de mayo ya no salían más vuelos. Y por eso me preguntaron cómo pensaba volver. Tenía miedo que los descubrieran contándome los detalles de una matanza, justo cuando los asesinos estaban controlando todo el poblado. La anciana relató la muerte de un familiar. Precisamente el que la ayudaba para el sustento. *«Alguien tiene que hacer algo»*, me dijo. Luego una joven habló, estaba furiosa porque los paramilitares habían matado a su amigo. Alzó la voz y dijo: *«está bien que ellos maten a los*

⁴ En un futuro proceso judicial podrán verificarse, en los registros compilados por la torre de control del aeropuerto Olaya Herrero, los vuelos realizados a Vigía del Fuerte entre el 21 y el 31 de mayo.

degenerados, a los viciosos, a los guerrilleros y a los vagos, pero Ramiro no tenía problemas. Ellos no tenían ningún motivo para matarlo. Son unos hijueputas».

Durante el almuerzo la gente me solicitó que saliera a denunciar las barbaridades que ellos presenciaron a lo largo de los últimos diez días. Los testimonios coincidían en un dato fundamental: el 22 de mayo llegaron los paramilitares portando armas automáticas.⁵

Llegaron en pangas, disparando a las orillas. Luego, en las pequeñas comunidades empezaron a matar a varias personas civiles acusándolas de colaborar con las guerrillas. Los días siguientes hicieron la llamada «limpieza social», asesinatos que justificaron diciendo que se trataba de supuestos ladrones, indigentes y consumidores de drogas. La mayor parte de los cadáveres fueron arrojados al río.

«Ayer vino una patrulla del ejército aquí y los soldados no les pusieron problemas a los 'paracos'». Los comensales decían que los militares no vieron, no quisieron ver, los cadáveres en el río. Vino más gente. Entró al restaurante un empleado que ya había visto en el hospital. Me saludó. Los del restaurante dejaron de hablar en susurros. El empleado, el único que se sentó en mi mesa, me dio más detalles de los relatos. Abiertamente confirmó que efectivos del Ejército Nacional habían estado en Vigía del Fuerte a los dos días de la ofensiva paramilitar, pero se habían abstenido de intervenir en favor de la población civil, protegerla o confrontar a los escuadrones de la muerte. «Ellos se vieron, se trataron como viejos conocidos y los

⁵ Los paramilitares llegaron el 22 de mayo de 1997 y se quedaron hasta el 26 de marzo del 2000, cuando fueron desalojados por las FARC. Durante esos años mantuvieron, a la vista de todos, un retén en el embarcadero, a pocos metros de la Alcaldía.

soldados los dejaron instalados aquí en el pueblo», dijo otro comensal, un hombre viejo. La voz se le quebró. Fue lo único que le oí decir; miraba al suelo y estaba llorando. «Lo primero que hicieron fue llevar a la gente del pueblo a la escuela», dijo un joven. «Nos obligaron a ir, aunque no queríamos. Luego empezaron una arenga: que ellos estaban en lucha contra la guerrilla, que iban a matar a todos los colaboradores de la guerrilla...».

Días más tarde, durante una entrevista que hice en Medellín, un alumno de la escuela me confirmó que casi todos los habitantes de Vigía habían sido obligados a oír la arenga. Cada uno de los alumnos y todos los profesores de las unidades escolares vieron a los paramilitares. Son testigos. Los únicos que no se dieron cuenta fueron el alcalde y el comandante de la policía, que eludieron actuar. Todos acusaban a la policía de Vigía por omisión. En un poblado pequeño, las autoridades no oyeron los disparos y no vieron que centenares de ciudadanos fueron «arriados» hasta la escuela.

En aquel restaurante escuché lo que me contaban, pero a nadie le pregunté el nombre o apellido. Ellos tenían confianza en mí y yo pensé que no podía ponerlos en peligro. Cuando les pregunté si habían hecho alguna denuncia, me contestaron que no había ninguna autoridad ante quien ponerla, y que ya no creían en la justicia. Por eso insistían tanto en que había que hacer una denuncia pública fuera de los límites del pueblo.

Por el aislamiento del río Atrato, en medio de la selva, las masacres no fueron noticia en el resto del país. La gente me explicaba que los pueblos «en estas lejanías» son verdaderas trampas. Existen tramos cortos de vías, pero nada parecido a una red de carreteras que los enlace con el resto del país. En toda la población hay una sola estación de teléfonos y por esos días estaba fuera de servicio. Las pocas veces que funcionaba, la controlaban los paramilitares. La pista aérea y el río son las únicas alternativas

para los viajeros o habitantes de la selva. Los paramilitares se dedicaron a controlar todo. *«No se mueve nadie sin permiso de ellos. Deciden si hay permiso o no para ir a Quibdó o a Murindó. Si uno sale con mercado, ellos anotan lo que se lleva cada familia. Avisan por radio al otro lado. Si el mercado no corresponde a lo que ellos anotan, entonces matan a la gente ahí mismo en el río»*. Escuché este testimonio varias veces y a personas diferentes. *«La gasolina está controlada. Todas las pangas deben tanquear en la bomba.⁶ Hay una sola bomba de gasolina y está controlada por los paramilitares. Apenas dan la gasolina para llegar al otro pueblo»*.

Todo el sufrimiento de los habitantes de los poblados vecinos a Murindó y Vigía tenía una explicación que verificaron los periodistas del diario *El Colombiano*: se trataba de una retaliación⁷ del Ejército Nacional a las poblaciones vecinas que podían saber dónde estaba la unidad de combate del Frente 57 de las FARC, que había emboscado a los militares en Juradó (Chocó) y los había acercado al río Atrato.

Ya en Medellín el mensajero de las FARC me había advertido que *«los militares habían ubicado el sitio exacto donde la guerrilla retenía a los diez infantes de Marina, cerca a Murindó, en las selvas de El Chocó»*.

Es una conducta repetitiva del Ejército colombiano el infligir castigos colectivos a la población civil, a la que acusa sistemáticamente de colaborar con la oposición armada. Por ese motivo se montaron los cercos a los poblados, donde nadie salía ni entraba sin permiso de los escuadrones de la muerte. Si el Ejército sabía que había una columna guerrillera con diez cautivos, debió suponer que tenían que ser un grupo, por lo menos, de treinta o cua-

⁶ Estación de servicio.

⁷ Represalia.

renta personas a quienes pensaban agotar por falta de suministros. De ahí el control de la gasolina y el extremado rigor con cada libra de sal. Tantos cuerpos en el agua y en las orillas, con señales de tortura, podían ser el fruto de interrogatorio que se hacían con hacha en mano. ¿Dónde está la guerrilla? Ante la ausencia de respuestas, un hachazo. Esta hipótesis explicaría la función de los «picaderos», sitios donde eran descuartizados los vecinos que capturaba el Ejército de Colombia o las Autodefensas.

La otra razón de tanta muerte, como se comprobó más tarde, es que en los territorios de donde fue expulsada la población civil se cultivó masivamente palma aceitera. Las empresas que usurparon los predios exhibían escrituras debidamente «legalizadas» y todos los permisos oficiales para su actividad.⁸ Más aún, las empresas de la palma aceitera habían iniciado sus labores con créditos públicos. Era imposible que las administraciones municipales y departamentales ignorasen la presencia paramilitar y su control sobre alimentos, gasolina y el uso del único teléfono. Y lo evidente, los cuerpos flotando en el río. Algunos habitantes tomaron fotografías de esos cuerpos, escondiéndolas posteriormente.⁹

Siempre les avisaban de la Gobernación de Antioquia

Volví a la residencia cerca del hospital. Me puse a leer un libro (*Bel Amí*, escrito por Guy de Maupassant) que me había regalado mi hermano mayor el día de mi graduación como periodista. Era de noche y estaba solo en mi habitación. No quedaba nadie en la residencia, ni siquiera el administrador. Tocaron a mi puerta violentamente, abrí y vi una pareja. Él empuñaba una pistola y la

⁸Para más información consultar el capítulo *Negocios y masacres en el río Atrato*.

⁹Existe una colección de fotografías y posiblemente un álbum sobre cadáveres en el Atrato que ya está fuera de Colombia, en manos de un refugiado político.

apuntaba hacia mí. Retrocedí hasta el fondo de la habitación y le mostré mis manos vacías.

Pensé que ya me iban a matar. Pero lo que ocurrió fue que el hombre de la pistola se me acercó y emprendió una requisa minuciosa. Me revisó camisa, pantalón y calcetines. Él era un joven negro, bien parecido, muy fornido. Ella, adolescente, casi una niña. Le pregunté al hombre si era agente del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) o del B-2 (Inteligencia Militar). Me respondió con voz alta, como si estuviera delante de mucha gente: *«nosotros somos las Autodefensas de Córdoba y Urabá y estamos en guerra a muerte con la guerrilla. Y vamos a matar a cada uno de los simpatizantes de la guerrilla, a todos los colaboradores. A la basura»*.

Era el comandante paramilitar a quien yo no había querido ver durante la mañana. Y no era tan amable como lo había descrito la joven del hospital. Revisó debajo de mi cama, alzó el colchón y revisó la almohada. Hizo muchas preguntas y anotó mis datos personales y mis números de teléfono. Se fijó en el libro que estaba leyendo. Miró la dedicatoria que había escrito mi hermano en la primera hoja. Entonces se puso a gritarme. Cada vez estaba más enojado y me preguntaba de qué tema trataba el libro. Tuve que explicarle que el autor era un novelista francés del siglo XIX, que nada tenía que ver con las cosas de Colombia. Por supuesto no parecía entender lo que le dije de los novelistas de Francia y el siglo XIX. Comprendí que «el comandante» apenas sabía leer. Examinó mi identificación de funcionario. La mujer que lo acompañaba continuó con la revisión de mi ropa, minuciosamente, hasta el último calcetín. Afortunadamente no vieron mi tarjeta de periodista, que llevaba en un bolsillo lateral del maletín. Luego miraron los folios y unas fotocopias. Les mostré las cartillas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y les hablé del problema de financiación de los servicios de salud. No entendió ni la mitad de lo que le relaté.

El paramilitar me dijo entonces que no coincidían varias cosas que le habían dicho sobre mí. Después me preguntó detalles sobre temas que yo había abordado únicamente con *Darío Rincón* y el alcalde Wilson Chaverra. Precisamente sobre las relaciones entre las direcciones de Salud Departamental de Antioquia y Salud Municipal de Medellín. El paramilitar dijo que nadie les avisó que yo vendría. E insistía: «¿por qué no les habían avisado?» Explicó que lo normal era que de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y de la Gobernación de Antioquia les avisaran a "ellos" por teléfono antes de enviar a la región a un funcionario departamental. Respondí que las Empresas Sociales del Estado como METROSALUD ya tenían autonomía en su gestión y aclaré que no dependían siempre del Gobierno Departamental.

Durante mi viaje yo había hablado del reordenamiento de la Seguridad Social con *Guillermo Paredes* y con Wilson Chaverra en su despacho de Vigía. También con la gente del hospital. Con ellos había dialogado sobre el nuevo régimen de las Empresas Sociales del Estado como METROSALUD. Estaba claro que fue el alcalde quien informó al jefe paramilitar los detalles de la conversación que habíamos sostenido y lo había enviado a intimidarme. Tenían la misma duda sobre las jurisdicciones y, durante el interrogatorio, el paramilitar buscaba esa respuesta.

«¿Por qué no les habían avisado?» La pregunta obsesiva del sicario delataba una estrecha relación entre los altos funcionarios de la Gobernación de Antioquia y los escuadrones de la muerte que mandaban en la región. El gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe Vélez.

Yo seguía con miedo. «El comandante» mantenía su pistola a la vista y continuaba furioso conmigo. La mujer que le acompañaba iba sin armas, pero me miraba con mucha ira. No dijo una palabra, pero revisaba todas mis cosas, muy despacio. En un mo-

mento sentí más temor por ella que por el criminal que actuaba como su jefe.

Le expliqué al jefe de las Autodefensas el recorrido que pensaba hacer desde Vigía hasta Murindó para promover el encuentro sobre la Seguridad Social, pero él me prohibió cumplir el itinerario a Murindó y demás sitios del Atrato. Y me advirtió claramente que si yo tenía relación alguna con la guerrilla pagaría con mi vida. Me preguntó entonces qué pensaba hacer. Respondí que no había vuelos directos a Medellín y que a la mañana siguiente quería pagar una plaza o alquilar una panga hasta Quibdó. Es decir, cuatro o cinco horas en lancha río arriba. Antes de irse, el hombre insistió en que «algo no cuadraba» con la información que le habían dado de mí. Finalmente guardó su pistola y se fue. Se veía muy molesto pero, por suerte, no me agredió físicamente.

Esa noche yo iba a ser un cadáver más en el río Atrato

No sabía si era prudente salir de la habitación. Me daba miedo que me detuvieran los paramilitares si me veían andar por el pueblo. Reaccioné. No era posible que estuviera asimilando tan rápido la lógica de los habitantes del pueblo, cautivos en su propia tierra. ¡Estaba aceptando la autoridad de un criminal al mando de un campo de concentración!

Realmente tenía una sola prohibición expresa: no podía ir hacia Murindó. Estaba molesto porque habían violado mi derecho constitucional al libre tránsito; pero en contraste no me habían ejecutado. ¿Lo harían luego, cuando llegara la noche? A pocos metros, el río profundo y ominoso, ancho y lleno de vida. Dos disparos, hombre al agua y mi cuerpo no se volvería a ver. La residencia está a solo veinte metros del río. Según lo que había oído ese día, me podían hacer pedazos y arrojar al agua. Mi hambre derrotó al miedo y me fui a cenar al mismo sitio donde había almorzado.

Todos sabían sobre la visita que había recibido antes. Para ajustar mi estado de ánimo, la gente siguió contándome sobre los cuerpos que flotaban en el río y que estaba prohibido recoger. Decían que de vez en cuando los pescadores encontraban en las orillas del Atrato restos de personas despedazadas. Y no podían hacer nada. Dejaban esos cuerpos a merced de los carroñeros.

Esa noche no había luz en el pueblo. La planta de energía la controlaban los paramilitares. Se hablaba en voz baja y a la luz de las velas. Los funcionarios del hospital me preguntaron más detalles sobre el interrogatorio que me hizo «el comandante». La anciana que había hablado conmigo durante la mañana se acercó de nuevo, con más confianza, y repitió el mismo relato.

Cuando volví a la residencia y me disponía a dormir, advertí que se había alojado una mujer. Según me dijo, era la funcionaria que promovía los programas de vivienda en esa región de Antioquia. A esa hora ella también sabía que los paramilitares me habían visitado en la habitación.

Mientras conversaba con esta funcionaria, descubrí que, por coincidencia, ella conocía a Gerard Maissa, un periodista francés a quien yo había orientado para conseguir unas entrevistas en Medellín relacionadas con el mundo del narcotráfico.

Para suerte del francés, había acumulado datos del entorno de Pablo Escobar Gaviria, porque él había asesinado a mi tía, la magistrada Mariela Espinosa Arango. La asesinó porque fue la primera funcionaria que lo había procesado por narcotráfico. Mariela murió acribillada en noviembre de 1989, en Medellín, tras quince años de amenazas.

En 1991 llevé a Maissa a la emisora donde trabajaba, para que conociera a mi jefe, el periodista Miguel Zapata Restrepo. Por vía de Miguel, Maissa contactó al abogado y a la madre de

Escobar y finalmente a Roberto, «el Oso», su hermano. Hecha su amistad con Roberto, mantuvo varias visitas personales autorizadas a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde el mafioso estaba preso. Al final del año 1991 Maissa consiguió una entrevista con Pablo Escobar. Leí los originales, escritos a máquina y firmados. Junto a la firma, la huella digital, verificada al final del cuestionario. Observé que el estilo de redacción de Escobar al responder el cuestionario era asombrosamente parecido al de mi jefe, Miguel Zapata Restrepo. Los mismos giros, las mismas expresiones. La entrevista se publicó en la edición asiática de *Play Boy* y Maissa me mostró el facsímil que le envió la revista. A su modo, Gerard Maissa ya había conseguido su entrevista con Pablo Escobar y quería hacer otras con los paramilitares. Hasta ese momento lo consideraba buen periodista.

Fue luego cuando me dijo que quería grabar o fotografiar una masacre, ¡en directo! Esa grabación sería útil, según él, para hacer la denuncia sobre violaciones a los Derechos Humanos en Colombia, lo que es absurdo. Le dije que eso era una canallada, que era periodismo mercenario. Afirmé que lo más periodístico sería evitar la masacre con denuncias y alertas. No tenía mérito hacerse famoso a costa de sangre inocente. Me aparté de Gerard Maissa luego de ofrecerme trabajo con sus amigos de Control Risk.¹⁰

Una de las últimas veces que hablé con él, me regaló una cámara fotográfica con sus teleobjetivos. Y me confió que tenía una amiga en Urabá, muy relacionada con los paramilitares, que le estaba ayudando a conseguir sus entrevistas. Mi temor era que el periodista francés fuera hasta el final y consiguiera que los militares hicieran alguna ejecución de manera

¹⁰ Esta empresa inglesa había diseñado esquemas de seguridad para la Gobernación de Antioquia. Y, por encargo de Álvaro Uribe, había saboteado la mediación de Werner Mauss en la liberación de una compatriota alemana.

que él pudiera fotografiarla. Su amiga trabajaba como promotora de urbanismo de la Gobernación de Antioquia. Igual que la funcionaria que estaba conmigo en la residencia. Una funcionaria que no había escapado de los paramilitares.

Por esa coincidencia, real o equívoca, yo temblaba de miedo. ¿Se trataba de la misma mujer? Hablamos hasta media noche. Luego me fui a dormir. Hacía un calor pegajoso, de altísima humedad. Durante la noche me asediaron los zancudos.¹¹ Intenté dormir. Cada ruido me despertaba. ¿Ya venían por mí? Si venían a ejecutarme, esperaba, deseaba una muerte rápida. Con mi miedo, a cada momento sentía necesidad de orinar.

Primero oí un golpe seco. Me paré sobre la cama. No tenía nada con qué defenderme. Otro y otro golpe. Ahora en el tejado. Eran goterones de agua. Se largó un aguacero denso con algunos rayos. El aguacero más copioso que he visto en mi vida. Si venían por mí en medio del aguacero, ¿quién me escucharía? El río crecía, el agua estaría más turbia. Mi cadáver se esfumaría hacia el fondo, o aguas abajo durante toda la noche. Pero a lo mejor, con el río tan crecido y en esa borrasca, no se podían mover los paramilitares en sus lanchas. Tal vez la borrasca me salvó la vida aquella noche.

Oré. Di gracias a Dios por darme otro día. Al amanecer amainó la lluvia. No había rastro de la funcionaria de urbanismo y no la escuché cuando salió de la residencia.

Domingo 1 de junio de 1997. A las ocho de la mañana fui hacia el embarcadero. No vi lanchas. Un funcionario del hospital se cruzó conmigo; también quería preguntar qué pasaba. Él tenía unos cupos reservados desde la noche anterior en la primera lancha de la

¹¹ Mosquitos transmisores de enfermedades como la malaria y el dengue.

mañana, porque debía salir la comisión del hospital hacia Quibdó. Durante años la rutina del embarcadero fue invariable: a las ocho partían las lanchas hacia Murindó, Río Sucio, Bellavista, Bojayá, Quibdó y otros destinos. Pero ese domingo algo andaba mal.

Vino hacia mí un anciano. Era el comensal que la tarde anterior escuché hablar, abatido, en el comedor. Estaba de mejor ánimo. Venía con un niño, pero lo dejó rezagado, a unos cincuenta metros, frente al río. El viejo se acercó a hablar conmigo abiertamente. Era más corto en estatura que yo, que soy bajito. Su piel, curtida por el sol y muy arrugada. Alzó su rostro y hurgó en mis ojos. Los suyos no mentían. Me miraba a mí y luego al niño que vigilaba el río. Una y otra vez relataba que patrullas del Ejército se encontraban frente a frente con los escuadrones paramilitares, con armas a la vista. Y los soldados de Colombia no los detenían, no les quitaban las armas y nunca tenían combates con las Autodefensas. Insistía en la complicidad entre Ejército y paramilitares. Según me dijo, la gente de Vigía y Murindó podía ver el patrullaje conjunto de militares y Autodefensas en vehículos y embarcaciones, sin disimular ante los vecinos de la región. En ese tiempo, «lo normal» en Vigía del Fuerte era que el Ejército Nacional patrullara conjuntamente con los *mochacabezas*.

El anciano me narró algo nuevo, que no se había dicho en el comedor: que la gente seguía una ruta de escape desde Murindó. Luego de cruzar el río Murindó, escapaban por una trocha¹² que sale a la Vía Panamericana. Por esa trocha intentaron huir centenares de personas de la región, pero el Ejército y los paramilitares ya estaban esperándoles. Tenían un sistema de retenes intercalados. Al inicio de la trocha había controles del Ejército. Los militares impedían que la gente diese la vuelta, imponiendo la ruta

¹²Camino angosto abierto en la maleza que puede servir de atajo.

de salida. Ni siquiera en su huida las víctimas tenían libertad para elegir su rumbo. Luego había otro retén paramilitar que recibía a los desplazados y decidía quién moría y quién podía seguir su camino. Había comunicación entre ambos controles. La diferencia era que en los retenes militares no mataban a nadie mientras que en los paramilitares cortaban cabezas. El anciano me informó que junto a estos últimos, entre el monte, quedaron muchos muertos. *«Los dejan ahí tirados, como si fueran perros»*, dijo.

Entre tanto un vecino saludó al anciano. Éste lo introdujo en nuestro diálogo, y el recién llegado confirmó haber presenciado más de una vez el trato directo entre hombres con brazaletes de los grupos paramilitares y uniformados del Ejército Nacional. Confirmó los retenes conjuntos donde detenían y mataban a los sospechosos de colaborar con la guerrilla. El anciano y su amigo me explicaron que cerca de Vigía y muy cerca de Murindó había picaderos. Los presos podían ser despedazados a hachazos. Los restos eran arrojados al agua. Eso explica por qué los pescadores veían una cabeza, un brazo o una pierna que la corriente arrojaba en las orillas. Nadie recogía esos restos humanos que terminaban como alimento de los animales del monte, los peces o las aves de rapiña.¹³

El niño hizo una señal al viejo y éste se despidió apresuradamente. Observé entonces a los paramilitares, que patrullaban el río y todo el frente del pueblo en varias lanchas. Temí verme de nuevo encarando al «comandante» paramilitar. Le vi pasar en una de las primeras lanchas; me miró, pero siguió su camino río arriba, hacia el embarcadero del pueblo. Alguien que venía del hospital se

¹³En el año 2008 los paramilitares se dedicaron a colgar vídeos en Youtube con las grabaciones de brutales interrogatorios, torturas, amputaciones de manos y descuartizamientos.

acercó para contarme que las bandas estaban asesinando a docenas de campesinos en los poblados a orillas del Atrato, en el lado chocoano y en el antioqueño.

Todos los relatos que me contaban coincidían en sus partes fundamentales. Una y otra vez oí versiones similares, dadas por diferentes personas no relacionadas entre sí. Una parte del río Atrato está en la jurisdicción de la Brigada XVII del Ejército. Es imposible que el comandante de la región militar, el General Rito Alejo del Río Rojas, no tuviera noticias de los cadáveres que a diario flotaban en el agua, más aún cuando el patrullaje de las lanchas del Ejército se cumplía casi a diario. Otra parte del río corresponde a la IV Brigada. La Infantería de Marina también interviene en la zona. Todos los responsables de las jurisdicciones omitieron sus deberes constitucionales.

A las doce del día ni una sola lancha de pasajeros había salido de Vigía del Fuerte, lo que era muy anormal. Vi muy poca gente en el embarcadero. No había grupos, nadie se juntaba con nadie, como si estuvieran prohibidas las reuniones. No había corrillos o personas en actitud de estar hablando sobre cualquier cosa, pero sí personas solas, mirando hipnotizadas al río. Era un domingo sin música, lo que resultaba profundamente extraño en aquellas tierras cálidas. De pronto apareció Darío Rincón, quien el día anterior, en la alcaldía, me había advertido del peligro que corría. Me explicó que los paramilitares habían ordenado impedir toda salida o entrada al pueblo. Desde la madrugada los campesinos esperaban en el embarcadero de Bellavista y tampoco habían salido lanchas. Entonces me dijo, *«el asunto es con usted. Ellos quieren dejarlo retenido aquí hasta el martes. Si usted no es quien dice ser, entonces lo van a matar. Tal como va la cosa, no van a dejar salir ni una sola lancha hoy»*.

Recordé que los paramilitares habían apuntado mis números de teléfono y que podrían llamar a METROSALUD para verificar mis

datos. Vi al médico, que venía del hospital con cuatro o cinco pacientes con embarazos realmente muy avanzados. Me dijo que él no podía viajar con ellas y entonces me solicitó que las acompañara hasta Quibdó. El personal del hospital por fin había conseguido lanchas en el pueblo, con las que llegaron las mujeres embarazadas desde diferentes poblados. Ahora harían horas de un viaje muy incómodo. Cuando ya estaba en el bote, listo para salir, los paramilitares reaparecieron en diferentes lanchas, contra la corriente, vestidos de civil, algunos con brazalete verde de las AUC en el brazo y con sus armas a la vista. Entre ellos «el comandante». Pasó cerca de la orilla y siguió en su lancha río arriba. Otros paramilitares se quedaron con nosotros, en sus pangas. En ese momento el médico repitió que había una plaza para mí. Regresó al hospital para buscar una bolsa de suero. Decidí acompañarle. Logramos hablar cerca de un minuto. Le entregué, por fin, la tarjeta de Dominique Caron, la funcionaria del Comité Internacional de la Cruz Roja a quien yo debía entregar las pruebas de supervivencia. Pude decirle que si algo me ocurría debía comunicarse inmediatamente con ella. Aunque no le expliqué el motivo real de mi visita a Vigía, me escuchó con mucha naturalidad. En cuanto encontró el suero volvimos al embarcadero. Se despidió de las señoras, que se acomodaron en dos lanchas. Le dio a una enfermera las últimas indicaciones para el viaje.

Las lanchas de los paramilitares estaban siempre al lado de nosotros, en el embarcadero del hospital. El médico me habló como si fuéramos viejos conocidos. *Darío Rincón* se unió al grupo de mujeres. Se subieron luego cinco o seis hombres a las lanchas del hospital. Portando fusiles, se mezclaron con las mujeres. Cuando el motor de la lancha rugió, el médico se quedó en tierra y me despidió gritando a todo pulmón: «Adios, 'doctor'. ¡Y vuelva!».

Hicimos un trecho corto hasta el embarcadero del pueblo. Los paramilitares se unieron a nuestro grupo. Cambiamos de bote. Por un momento bajaron los fusiles y los escondieron en el piso, debajo del timón. Eran fusiles AK 47 muy oxidados, que cubrieron con costales de fique.¹⁴ Otras lanchas con paramilitares nos acompañaron río arriba. Hubo otro acomodo y cambio de lanchas. Delante de todos, *Darío Rincón* me indicó que me trasladara a otro bote. Unos salieron, otros subieron. *Rincón* salió del bote y se quedó en el embarcadero del pueblo, a pocos metros de la alcaldía. Nosotros salimos aguas arriba, hacia Quibdó, en dos botes. En una de las lanchas íbamos mujeres embarazadas y personal del hospital, mezclados con paramilitares. En la otra sólo paramilitares. Cuando nos alejamos del pueblo, el hombre que estaba sentado frente a mí volvió a sacar el fusil que había escondido debajo del asiento. Acomodó la culata en el piso, inclinando el arma. El cañón apuntaba a mi rostro y, cuando el bote se balanceaba, intentaba inclinar mi cara en otra dirección. Durante varias horas de aquel viaje tuve ese fusil ante mi rostro. Durante cada minuto pensé que me iban a matar. Hasta el día de hoy, sueño con ese fusil frente a mi cara.

Pensaba, sin lógica, que en caso de problemas me podía lanzar al agua, pero no soy buen nadador. Son cientos de kilómetros de río rodeados de selva. El lanchero debía esquivar troncos que venían flotando medio sumergidos. Pero luego hubo algo diferente. Seguramente todos vieron un cuerpo flotando en el agua. Los rostros se crisparon. Una mujer se llevó las manos a la cara. Ni una sola palabra. Primero todos miraron a un mismo lugar. Luego las miradas se perdieron en el vacío. Vi labios apretados y ojos desorbitados. Quise mirar con disimulo pero tenía siempre ante mi

¹⁴ Yute.

rostro el cañón de ese fusil que se balanceaba frente a mí. Y no quería perderlo de vista.

Nos cruzamos con otra lancha que salió de un afluente del Atrato, en la orilla de Antioquia. En ella venían varios paramilitares portando armas y brazaletes. Una auxiliar de enfermería que acompañaba a un paciente al que transbordamos. Un atado de maderos y sábanas hacía las veces de hamaca o camilla. Era un indígena con piel muy bronceada por el sol. Estaba inconsciente, pero totalmente rígido. Tenía la quijada muy apretada y, para separarle los dientes, le habían puesto un pedazo de madera envuelta en un pañuelo. La lengua estaba muy mordida y sangraba. El bote paró a los pocos minutos en el embarcadero de un pueblito desierto, en la orilla chocoana del río. Nos bajamos y la enfermera abrió un pequeño cuarto dispensario de donde sacó unas medicinas. Bombearon gasolina y cambiamos de lancha. El lanchero decía que con la cantidad de combustible que nos dieron los paramilitares no era suficiente para llegar a Quibdó. Cuando continuamos el viaje la enfermera me explicó que el paciente había contraído la malaria. Los paramilitares habían dispuesto la cabeza del paciente a popa. Por lo que he aprendido de primeros auxilios, recordé que, si había vómito, el hombre se podía ahogar. Le sugerí entonces a la enfermera que le diéramos vuelta, de modo que la cabeza quedara alta, dirigida a proa. Ella sonrió con picardía y dijo: «¡sí, 'doctor'!». Me habrían hecho falta muchos años de estudio para ser un médico, pero en esa selva, con el indígena en coma y hablando con la enfermera sobre el *plasmodium falciparum* (la peor cepa de la malaria), para los paramilitares yo era «el doctor». Esa costumbre colombiana de tratar de «doctor» a cualquiera, me salvó la vida.

En adelante cuidé la cabeza de aquel indígena para evitarle los golpes cuando oscilaba el bote. Lo siguiente era separar aquellos dientes violentos para reducir el daño que sufría la lengua. Lo mejor era que ya no tenía el fusil frente a mi cara. Luego hubo

un nuevo transbordo y, por fin, los paramilitares salieron de nuestra lancha. Aunque nos acompañaron algunos kilómetros más. Se separaron de nosotros poco antes de llegar a Quibdó, 228 kilómetros al sur de Vigía del Fuerte. Seguimos el viaje, ya muy apretados, en una sola lancha. Al quedar tan pesado y con poca gasolina, el bote se detuvo al menos tres veces. El lanchero debía menear el barril para aprovechar hasta la última gota de combustible. A punto estuvimos de quedarnos varados en medio del río, con cinco mujeres para dar a luz. Cuando llegamos a Quibdó estaba anocheciendo. El lanchero atracó el bote en el embarcadero del hospital y entregó a las mujeres embarazadas y al paciente con malaria a las enfermeras de turno. Fuimos luego a cenar y, por primera vez en todo el día, el lanchero y yo pudimos hablar. Se opuso a la idea de alojarnos en el hotel que me había recomendado la mujer que conversó conmigo en el hospital de Vigía. *«El hotel está frente al río. Todas las lenguas de Vigía saben a qué hotel viene el doctor. Y pa' que sepa, usted aún no está a salvo»*.¹⁵

Nos internamos en Quibdó, lejos de la orilla del río, hasta llegar a otro hotel. Quise llamar por teléfono a Medellín, pero el sistema Telecom estaba fuera de servicio. Quibdó, toda una capital de Departamento, estaba aislada, como Vigía o Murindó. Sin teléfonos en todo el Atrato, ninguna noticia llegaba a Medellín. Nada salía en la prensa nacional. Luego de un baño quise salir al balcón, a respirar un poco en esa noche tan calurosa y húmeda. Pero el lanchero me sugirió que dejara el balcón, que era mejor que no me vieran. Entonces nos fuimos a dormir.

¹⁵ Confirmé posteriormente que se trataba del Hotel Malecón, donde se hospedaban al mismo tiempo los mandos de los escuadrones de la muerte y los agentes del Departamento Administrativo de Seguridad.

Lunes 2 de junio de 1997. Día festivo en el calendario nacional de Colombia. Despertamos muy temprano. El lanchero averiguó en la administración del hotel la hora de los vuelos hacia Medellín. Había dos vuelos programados para aquel día. Pero tuvo una sospecha respecto al primero, de forma que realizó una reserva para el segundo. Tomó un taxi, me recogió en el hotel y me llevó directo al aeropuerto. Aquel hombre, que salvó mi vida, se quedó conmigo hasta que llamaron a abordar. Muerto de risa me gritó: «Adiooos, 'doctor'. ¡Y vuelva!». Nunca supe su nombre y él sólo preguntó el mío para la reserva del hotel y para comprar el billete de avión.

Tomé el vuelo 193 de Sociedad Aeronáutica de Medellín (SAM).¹⁶ Un joven trigueño, con cabello cortado casi al ras, pasó todos los controles sin ser detenido y se subió al avión. Iba sin equipaje. Se sentó a mi izquierda. Me daba curiosidad saber quién era el que se podía mover así por el aeropuerto. En Medellín el civil se bajó del avión, pasó sin someterse a ninguno de los controles y saludó muy amistosamente, sin protocolo, a los tres agentes de policía que estaban en el muelle de pasajeros. Salí al pasillo y me encontré de casualidad con uno de los fotógrafos del diario *El Colombiano* y lo saludé. El pasajero estaba otra vez detrás de mí. Se inclinó y miró despacio, sin disimulo, la escarapela del fotógrafo. Fui a llamar por teléfono y el hombre estaba otra vez detrás de mí, en la fila.

Tomé entonces un taxi. Cuando recorría de nuevo las calles de Medellín me embargaban pensamientos y emociones ambiguas. Ira con el que derrama la sangre de los inocentes. De otro lado, la emoción de estar vivo, el clima primaveral, y el gusto de ver la ciudad limpia. De nuevo, la sensación de fracaso.

¹⁶Cosa rara, tenía anotado el vuelo 191 en la tarjeta de embarque.

Los diez militares cautivos seguían en peligro. La guerrilla no pudo entregarme las pruebas de supervivencia que necesitaba el CICR para hacer su gestión humanitaria. Sin ellas no se podía iniciar el procedimiento de recepción oficial de los cautivos. Peor aún, ante toda la opinión pública ya se había anunciado públicamente que el 15 de junio de 1997 se debía hacer la entrega de los setenta militares. En desarrollo de los acuerdos gobierno-guerrilla, la entrega se haría en las selvas del Caguán, al sur del país. ¿Qué pasaría entonces cuando la guerrilla entregara diez hombres menos? El primer efecto sería que se vendría abajo el proceso de paz, que supuestamente se debía iniciar luego de la liberación de los soldados.

En resumen, yo había ido al Atrato, no había podido obtener las pruebas de supervivencia de los infantes, pero a cambio me había encontrado con una masacre, de la cual me había pedido la gente que hiciera una denuncia pública. Sobre todo me dolía que la nueva serie de matanzas no generara titulares en los medios de difusión. Además del cerco paramilitar, el control de alimentos y las masacres, los habitantes del Atrato sufrían un cerrojo informativo. Ni siquiera tenían el derecho a denunciar sobre su exterminio. Debía hacerlo yo; contar lo que había visto, ante la justicia, ante la prensa, ante organismos públicos y privados, para conseguir que se pararan las masacres. Posteriormente visité a los redactores de la Sección Antioquia de *El Colombiano* y les puse al tanto de la información que tenía.

Martes 3 de junio de 1997. Volví a mi oficina. No dije nada a mis compañeros de trabajo; solamente a mi jefe le comenté sobre mi viaje al Atrato para hacer promoción del II Seminario Nacional de Empresas Sociales del Estado. Le impresionó saber sobre la quiebra de los hospitales y la caída en la calidad de la prestación de los servicios.

A mediodía el mensajero de la guerrilla volvió a mi oficina. Mientras almorzábamos le conté los detalles de la gestión y reconocí mi error al haber ido a la oficina del alcalde. De momento la relación con las FARC quedaba congelada. Seguiría en los términos verticales de siempre: ellos podían acceder a mí, pero yo no tendría canales abiertos hacia ellos. Esa es la costumbre cuando se participa en mediaciones.

Decidí entonces escribir lo que había vivido durante los últimos días e inicié el dossier sobre las masacres del Atrato. Para completar datos mi punto de partida era la frase del sicario de las Auto-defensas que, con un arma en la mano, me preguntaba *«¿por qué la Gobernación de Antioquia no nos avisó que usted iba a venir?»* Mi primera búsqueda se centró en las dependencias de la propia Gobernación y en los Institutos Descentralizados, que tenían funcionarios en la región, testigos de los asesinatos, y que habían sido evacuados a Medellín.

Recorté notas de prensa, hice entrevistas a testigos, visité centros de documentación, hice búsquedas por internet y seguí tomando notas personales. En los descansos de mi trabajo y a cada salida al Centro Administrativo La Alpujarra, en el centro de Medellín, sostuve una serie de entrevistas con algunos de los funcionarios públicos que salieron de la región a causa de la escalada paramilitar. Me aportaron su versión del tema. Completé datos, nombres de los líderes y promotores del paramilitarismo en la región.

En la búsqueda de información y respuestas, casi todas las personas que entrevisté señalaron hacia la red paramilitar que Álvaro Uribe Vélez y su secretario, Pedro Juan Moreno Villa, habían construido dentro de la Gobernación de Antioquia. La administración pública regional se había convertido en el apoyo principal de los escuadrones de la muerte. Funcionarios de carrera vinculados a la Gobernación me indicaron quienes eran los pro-

motores del paramilitarismo en la administración regional. Las Secretarías de Gobierno (a cargo de Moreno Villa) y de Desarrollo Comunitario de la Gobernación eran la tapadera de actividades paramilitares, especialmente en Urabá, el Atrato, Magdalena Medio y el norte de Antioquia.

Las CONVIVIR y las listas negras

«Mientras el Secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa, promovía las compañías de vigilancia privada, bautizadas como CONVIVIR, la Secretaría de Desarrollo Comunitario identificaba las comunidades reacias o favorables al proyecto paramilitar». Tal afirmación era unánime entre los funcionarios que entrevisté.

La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Antioquia elaboraba listas de todos los líderes de la comunidad y los clasificaba entre amigos y enemigos. Los «enemigos» quedaban en listas negras. Personas que tenían que matar. La otra lista era de gente que les podía ayudar en la expansión paramilitar. Esas personas afines ingresaban en el grupo de las Cooperativas de Vigilancia Privada, CONVIVIR. Se comprobó luego la relación directa de las CONVIVIR con los escuadrones de la muerte.

Esa semana conseguí otra entrevista en Medellín con ayuda de funcionarios honestos de la Gobernación de Antioquia.¹⁷ Me pre-

¹⁷ Los incansables y curiosos funcionarios ya habían reconstruido, nombre por nombre, la lista central de los promotores del paramilitarismo en la Gobernación de Antioquia y sus de pendencias más cooptadas. Actualmente mantengo relación con esas personas. Un día aportarán su información y testimonio. Por ahora no es prudente que se expongan ante el Sistema Judicial colombiano, dado que no ofrece garantías a los testigos. Otro grupo de funcionarios guarda información detallada sobre las masacres de Ituango, cuya denuncia le costó la vida a Jesús María Valle Jaramillo.

sentaron a otro alumno que presenció la llegada de los paramilitares a su escuela. Describió lo que ocurrió en el patio de la concentración escolar y el discurso de los paramilitares.

La entrevista fue en un bar cercano al centro administrativo La Alpujarra, que comparten la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Con los funcionarios y el alumno confirmé que la fuerza pública, en este caso la policía, no actuó para defender a la población civil. En la arenga paramilitar se lanzaron amenazas contra la guerrilla y contra los sospechosos de colaborar con ella y, por tal sospecha, fueron asesinadas varias personas en el pueblo, entre ellas simpatizantes de la Unión Patriótica.¹⁸

La incursión de los paramilitares tuvo un testigo colectivo. Insisto en este punto. Cada habitante de Vigía del Fuerte sufrió directa o indirectamente los hechos de ese día. Los únicos que no oyeron ni vieron nada fueron el alcalde y el comandante de la policía. Posteriormente, el comandante afirmó que sus subordinados se plegaron a las órdenes militares.

Otra funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Comunitario me confirmó que, desde la llegada de los sicarios, hubo días en que los pescadores del Atrato llegaron a contar hasta veinticuatro cuerpos flotando en el agua. Semanas después, funcionarios de justicia me avisaron que la jueza de Murindó, Beatriz Idárraga, había renunciado a su cargo. Médicos, enfermeras, profesores, concejales, personeros¹⁹ municipales o alcaldes, siguieron igual

¹⁸Partido de la izquierda colombiana. Más de cinco mil militantes de esta agrupación política fueron asesinados o desaparecidos.

¹⁹Representantes de la comunidad encargados de velar por los intereses ciudadanos y los derechos humanos.

camino, huyendo del Atrato y Urabá. Unos, amenazados por los paramilitares, y otros, por la guerrilla.

Hay un caso notable, el de un inspector de policía que llevó información clave de los hechos a la Gobernación de Antioquia: *«también es preocupante la situación de la zona rural de Murindó. Desde hace un mes nadie sabe de la suerte de mil setecientas personas.»* Ante el obligado encierro, los habitantes de Murindó enteraron a las autoridades departamentales de lo sucedido a través de una carta que trajo este inspector, quien pudo salir gracias a una labor humanitaria de la Cruz Roja. *«Hasta ahora siguen incomunicados y con la constante zozobra de que, en cualquier momento, regresen los grupos armados para tomar la ley por su propia mano»*. Estas declaraciones fueron publicadas en el diario *El Colombiano* el 5 de julio de 1997.

Queda así confirmado que, durante los primeros días de junio de 1997, un inspector de policía de Murindó y el CICR llevaron información sobre los hechos a la Gobernación de Antioquia, que omitió actuar y proteger a la población civil.

Pruebas de supervivencia

Durante la primera semana de junio de 1997, la guerrilla logró sacar el sobre con las pruebas de supervivencia desde el río Atrato hasta Dabeiba, un pueblito al noroeste del departamento de Antioquia.

Viernes 6 de junio de 1997. El mensajero de la guerrilla entró de nuevo en mi oficina. Me pidió ir hasta Dabeiba para recoger las pruebas. No tenía que volver al Atrato, pero había otros riesgos. Dabeiba era un territorio sometido a permanente disputa entre la guerrilla y los escuadrones de la muerte. Estaba en juego un co-

redor estratégico de los paramilitares: la ruta del Nudo de Paramillo hasta la Carretera Panamericana.²⁰

Para comienzos de 1997 las ACCU empezaron una dinámica de ascenso hacia el Nudo de Paramillo desde las partes bajas de los ríos San Jorge y Sinú. El resultado fueron las masacres y los desplazamientos. Las ACCU controlaron los municipios vecinos (principalmente Dabeiba), sus zonas rurales y la vía a Urabá de la Carretera Panamericana. En acción simultánea, los escuadrones de la muerte coparon toda la zona bananera y Riosucio, expandieron su violencia a las zonas del gran Urabá, a la parte montañosa del departamento de Córdoba, y consolidaron su retaguardia de narcotráfico en el Nudo de Paramillo.

Domingo 8 de junio de 1997. Salimos hacia Dabeiba de madrugada. Esta vez tenía vehículo y conductor. Un veterano acostumbrado a trochas infernales, caminos de pantano y piedra que destrozaron el bajo del automóvil. El conductor tenía la confianza de la Comandancia del Bloque José María Córdoba de las FARC. Al llegar vimos al sacerdote del pueblo, el anciano Padre Gabriel, que conocía a mi familia. Le expuse claramente mi misión y él nos ayudó. ¿Cómo iba a negarse, cuando los jerarcas de la Iglesia Católica habían obtenido las pruebas de supervivencia de los sesenta soldados en el sur de Colombia?

Llegamos a un corregimiento²¹ de Dabeiba. Con ayuda de vecinos pudimos ir hasta el sitio de encuentro, un pequeño caserío donde no se veía un alma. Apareció un grupo de personas con fusiles y ametralladoras. Por un momento dudé de que fueran los gue-

²⁰Para más información consultar el capítulo: *Negocios y masacres en el río Atrato*.

²¹División territorial que no alcanza el carácter de municipio, estando su jurisdicción supeditada a un municipio o a un departamento.

rrilleros. Saludé con la frase que me había indicado el guerrillero de Medellín y ellos me contestaron con la frase correspondiente. Respiré tranquilo y recibí las pruebas de supervivencia. El jefe de esa unidad guerrillera soltó algunas frases sobre la importancia de lo que estábamos haciendo y lo que estaba en juego. Compartimos los dulces y galletas que yo había comprado en el camino. Vi que había guerrilleros muy jóvenes y, sin duda, varios menores de edad entre ellos.

El reclutamiento de menores está rechazado frontalmente en todos los documentos que se refieren a la regulación mínima de conflictos. Posteriormente, supe en Medellín que algunos de aquellos menores de edad se habían incorporado a la guerrilla tras perder a sus familias durante las masacres de 1996 y 1997 en el río Atrato. Para ellos, tristemente, era una cuestión de supervivencia. Uno de ellos le relató a una funcionaria de la Gobernación de Antioquia que, cuando regresaba del río, encontró la cabeza de su padre estacada en la palizada de la casa y a su familia muerta. Pudo ver a los paramilitares arriando las reses que les habían robado y cómo las subían a un lanchón.²²

²²El dato del expolio de ganado a las familias masacradas pude comprobarlo con otras dos fuentes: los redactores de las páginas económicas me confirmaron que el precio del ganado vacuno registraba un evidente bajón en la feria ganadera de Urabá. La razón era que a la plaza de Turbo estaban llegando miles de reses y quienes las ofrecían las querían vender inmediatamente, sin regatear el precio. Me explicaron el origen de las reses que llegaban a Urabá: eran fruto del despojo a los campesinos. Otro periodista de la sección de orden público ratificó que era común, durante las masacres del Atrato, que los sobrevivientes vieran a los paramilitares arriando ganado hacia los lanchones, y camiones para luego venderlos en las ferias de cada región, a la vista de todo el mundo. Ninguna autoridad hizo preguntas ni cotejos sobre tantas reses que venían marcadas con diferentes hierros.

Volvimos a Dabeiba con el sobre que contenía las pruebas. Pensábamos cenar allí, pero el sacerdote Gabriel nos avisó que los paramilitares ya estaban patrullando el pueblo esa noche. Me pidió que diera un gran saludo a mi hermano y nos apremió para dejar el pueblo. A las seis de la tarde, sin cenar, salimos hacia Medellín. Vimos gente armada, vestidos de civil, en el camino, antes de pasar por Santa Fe de Antioquia. Llegamos al Valle de Aburrá a media noche.

En mi casa, antes de dormir, evalué de nuevo toda la situación. El sobre estaba intacto, pero se veía idéntico a un alijo de droga; era una bolsa plástica impermeabilizada con vueltas y vueltas de cinta adhesiva de color marrón, para protegerla de la humedad extrema de la selva. No debía salir a la calle con ese paquete tan llamativo en mi maletín. No podía correr el riesgo de encontrarme con un control militar, tan comunes en Medellín. En el sobre estaban las coordenadas exactas del sitio donde la unidad guerrillera tenía a sus cautivos. Si esa información caía en manos del Ejército, ocurriría una matanza. Abrí el paquete y reorganicé todo en sobres comerciales, según los distintos destinatarios. El material debía llegar a la sede del CICR en Medellín. Todo quedó finalmente en un sobre de manila. Y no llamaría la atención en mi maletín, usualmente lleno con folletos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Cada vez que un vigilante revisaba mis objetos en la portería de un edificio público, yo le dejaba una cartilla sobre cáncer de piel, lactancia materna, nutrición, prevención de desastres, salud mental, diálogo intra familiar, prevención de fármaco dependencia o enfermedades de transmisión sexual. Por eso siempre tenía puertas abiertas y nadie iba a revisar a fondo el contenido del maletín.

Martes 10 de junio de 1997. Hice una jornada de trabajo normal. Recordaba cada minuto que en el maletín estaba la noticia que esperaban las diez familias de los infantes de Marina. De nuevo apa-

reció en mi oficina el mensajero de la guerrilla. Se alegró del éxito final en la diligencia. Pensé que iba a recibirme el sobre para llevarlo directamente a la sede del CICR, pero me pidió un esfuerzo final: que entregara las pruebas a cada destinatario, sin más dilación. Me explicó las precauciones que debía tener en el trámite. Me propuse ir con especial cuidado y no cometer más errores.

El sobre contenía una carta para el Presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, remitida por el Bloque José María Córdoba de las FARC. Otra para el Ministerio del Interior. Varias cartas de los soldados a sus familias, unas en formato Cruz Roja y otras en formato comercial. Contenía también fotografías «polaroid» de cada uno de los soldados, así como comunicados de la guerrilla a la prensa y a la opinión pública, y otras comunicaciones.

El siguiente paso fue enviar cada uno de los documentos a sus destinatarios. Por una parte, el CICR comprobó la supervivencia de los diez infantes e inició el operativo para recibirlos formalmente en el norte de El Chocó. Por parte del Gobierno, los documentos fueron recibidos y analizados por los Asesores Presidenciales en temas de paz, José Noé Ríos y Daniel García Peña. En cuanto a la prensa, el diario *El Colombiano*, la red *Colprensa*, la emisora *Radionet* y el tele noticiero CM& hicieron difusión pública sobre la existencia de las pruebas y la proximidad de la entrega de los retenidos. Sobre todo, la entrega oportuna, cuyo cumplimiento ya estaba en duda. La noticia circuló profusamente entre el 10 y el 11 de junio de 1997 y fue retomada por los demás medios de difusión en Colombia y el mundo, dada su trascendencia.

Al ser difundidas en prensa las pruebas de supervivencia, el presidente Ernesto Samper expidió la Directiva Presidencial que facilitaba el vuelo de aeronaves, un helicóptero de la Cruz Roja y otros dos con guerrilleros y los soldados cautivos.

11 de junio de 1997. Entró una llamada telefónica a mi oficina. La secretaria de recepción me dijo: «Ricardo, tiene una llamada de la Base Naval de Turbo». Cuando respondí, alguien se identificó rápidamente como Capitán Ríos. Me solicitó orientación para conseguir unos «remedios». Le dicté los tres números de teléfono de entidades públicas que podían proveer los medicamentos para los soldados. Al colgar me di cuenta de lo extraño de aquella llamada. Los militares tienen sus propias líneas de suministros, logística e intendencia. Múltiples opciones para conseguir medicinas. Estando en Urabá, a centenares de kilómetros de Medellín, un mando militar buscaría apoyo en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, el Seguro Social, la Cruz Roja o comercializadores farmacéuticos presentes en la región, o directamente con el Ministerio de Salud. Por otra parte, los trámites que implican relaciones de instituciones tan diferentes se gestionan habitualmente de jefe a jefe. Comprobé que al director de METROSALUD no le habían llamado. Además, la red de suministros farmacéuticos es muy local, sólo para Medellín. Entonces, ¿por qué acudían a mí? También recordé que el militar utilizó la palabra «remedios» en vez de medicinas o medicamentos. Algo inusual entre quienes trabajan a diario con suministros farmacéuticos. Los términos son muy estrictos al nombrar los insumos en un trabajo que implica una gran responsabilidad con los pacientes. Luego estaba la procedencia de la llamada. Normalmente las llamadas a mi oficina provenían de Medellín y del Valle de Aburrá.

Era demasiada coincidencia que, en casi cuatro años de trabajo con METROSALUD, sólo hubiera recibido una llamada de Turbo, lugar cercano a la sede de la Brigada XVII del Ejército y el mando militar que tiene jurisdicción sobre el río Atrato y los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó. La ciudad de Turbo es sede de grandes guarniciones militares, pero al mismo tiempo es el

territorio donde los paramilitares patrullan y asesinan más impunemente.²³

Luego de colgar el teléfono hablé con la secretaria que recibió la llamada. Me confirmó que el oficial del Ejército preguntó directamente por mí. ¿Quién le había dado mi nombre a ese oficial en Urabá, si mi única relación con la zona había sido la visita a Vigía? La única explicación posible era el vínculo entre los paramilitares y la Brigada XVII del Ejército. Estaba claro que los paramilitares habían iniciado una verificación sobre mi nombre, cargo, identidad y funciones. Los únicos que tenían anotados mis datos personales en el occidente de Antioquia y Vigía del Fuerte eran el alcalde y el jefe paramilitar que me amenazó. En Medellín, mis datos de contacto estaban anotados en la agenda del hangar del piloto Diego Zapata, el organizador de los vuelos a Vigía. Pero no les había dado el teléfono de mi oficina.

Esa misma semana una periodista me repitió una extraña conversación que tuvo con mandos militares en Bogotá. Luego de cubrir una rueda de prensa durante la cual el Ejército presentó partes de guerra, periodistas y militares se dedicaron a dialogar informalmente, sin cámaras ni grabadoras, en el casino de oficiales. La periodista relató alarmada que el generalato colombiano se refería a los diez infantes de Marina como «diez negritos» y los calificaba de cobardes. Diferentes fuentes me confirmaron esa semana que el general Rito Alejo del Río Rojas, comandante entonces de la Brigada XVII del Ejército Nacional, estaba en contra del procedimiento de entrega pacífica de los infantes al CICR. La prueba de esta conducta fue la puesta en marcha de la operación de rescate violento en las selvas de Murindó, donde se presumía esta-

²³Según un informe del IPC Medellín, publicado en 1998, en Turbo hubo ochenta y una personas desaparecidas durante 1997.

ban los retenidos. En los parámetros del operativo diseñado por la Brigada XVII no se valoró el riesgo de bajas entre los diez infantes. El calificativo «los diez negritos» ya los diferenciaba de sus compañeros de armas y preparaba el terreno del lenguaje para justificar el sacrificio de aquellos hombres. En los casinos militares los mandos calificaban de cobardes a los cautivos por haberse «rendido» durante un combate. Según ellos, «los diez negritos» tendrían que haber resistido el ataque de la guerrilla hasta morir. Los periodistas que escucharon tales expresiones verificaron en directo el desprecio de los mandos militares a sus propios subordinados y la omisión del Derecho Internacional Humanitario.²⁴

Según los colegas, otros mandos militares expresaron su deseo de someter a los soldados a Consejos de Guerra por «cobardía». Como me explicaron, a las Fuerzas Armadas sólo les interesaba que en el operativo de rescate murieran todos los guerrilleros, sin importar la suerte de los cautivos. Lo central era *«dañar el espectáculo que quería montar la guerrilla»*, desprestigiarla porque incumpliría su promesa de entregar con vida a los setenta retenidos.

La denuncia penal

Jueves 12 de junio de 1997. Contesté una llamada telefónica a mi oficina. Alguien que se identificó como «Orlando Palomeque» me dijo que necesitaba hablar conmigo de manera urgente, fuera de la oficina. Le advertí que no estaba dispuesto a salir de mi sitio de trabajo para verme con un desconocido. Me contestó entonces que tenía una información muy importante, y que sabía que estaba buscando datos sobre el río Atrato. Le insistí en que si quería que hablásemos, debía venir a mi oficina. El tono de quien ha-

²⁴Gran parte de los periodistas colombianos hemos recibido cursos y conferencias del CICR sobre el Derecho que se aplica en caso de guerra y sus límites.

blaba era demasiado perentorio, de alguien acostumbrado a dar órdenes y, en ese tono, me instaba a cumplir la cita. Me conminó a ir inmediatamente a una cafetería frente al Servicio Nacional de Aprendizaje, en la Avenida del Ferrocarril. Para mi suerte, yo sabía que en ese sector de la ciudad habían cumplido su última cita dirigentes sindicales y comunitarios que luego desaparecieron. En una ciudad como Medellín, llamadas como esa son verdadero motivo de alarma. En los relatos que escuché tantas veces a los familiares de personas desaparecidas se cumplía la rutina de atender una llamada, acudir una cita y luego, la Noche y la Niebla. No se volvía a saber de la persona. Asumí la llamada como una amenaza, que me tomé muy en serio.

«Orlando Palomeque» hablaba con el acento de los habitantes de la zona costeña del norte de Colombia, la misma región en donde nacieron las Autodefensas de Córdoba y Urabá. El habla típica de estas regiones es un español similar al de Andalucía o Extremadura en España, pero con un tono más agudo y rápido. Con gran deformación de las palabras (principalmente al no pronunciar la s final) y el uso estrictamente local de palabras retomadas de idiomas indígenas o africanos. El acento de la persona que me llamó era motivo suficiente de alarma porque en mi entorno familiar, profesional y social no tengo relación directa con gente de Córdoba o Urabá.

Nada dije a mis compañeros de trabajo ni a mi jefe. Hice un día aparentemente normal, pero sentía miedo. Llamé a un periodista que cubría información sobre orden público y me confirmó que también había recibido llamadas de «Orlando Palomeque». La misma invitación para hablar urgentemente, fuera de las instalaciones del periódico. «Palomeque» le dijo que era corresponsal de RCN (Radio Cadena Nacional) en El Chocó y también le

ofreció aportar información sobre lo que ocurría en el Atrato. El periodista había apelado a sus colegas de RCN-Medellín, que a su vez comprobaron con su gente en El Chocó. En Quibdó nadie conocía a «Orlando Palomeque». Era un fantasma.

Cuando terminó la jornada de trabajo, a las cinco de la tarde, tuve temor de salir directamente de la oficina a mi casa. METROSALUD en esos días tenía su sede en La Alpujarra, edificio donde funcionan la Alcaldía de Medellín y sus dependencias. Contra mi costumbre, evité salir por la puerta principal a la plaza dominada por la escultura de Rodrigo Arenas Betancur. Llamé por teléfono a otro colega del diario *El Colombiano*. Le expliqué la llamada amenazante y el motivo de la misma. Esperé a que anocheciera, tomé un ascensor y me dirigí al sótano donde están los parqueaderos de los vehículos oficiales. Subí por la rampa norte que sale hacia la garita de seguridad, frente a la Avenida San Juan. Me sentía más tranquilo allí porque siempre hay personal de guardia con todos los procedimientos necesarios para actuar ante ataques terroristas. Por causa de la violencia crónica que vivimos en Medellín y Antioquia, todo el edificio de la Alcaldía está diseñado como un bunker. El periodista me recogió a las ocho de la noche. Salimos directamente hacia la Carrera El Palo, donde funcionan algunas dependencias de la Fiscalía.

Desde las nueve de la noche de ese jueves hasta las tres y media de la madrugada del viernes 13 de junio de 1997, sustenté mi denuncia contra el Ejército de Colombia y las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Recuerdo la primera pregunta que me hizo la Fiscal: *«¿está seguro de lo que va a hacer? Su denuncia es muy grave y en adelante su vida no volverá a ser igual»*. Le respondí que ya había cruzado el punto de no retorno. Expuse toda mi mediación, lo que vi en Vigía del Fuerte, lo que me contaron los habitantes de Murindó, las

amenazas en mi contra y los datos que me dieron los funcionarios de la Gobernación de Antioquia.²⁵

Al final de la diligencia los funcionarios judiciales me preguntaron cuántas personas podían haber sido asesinadas en la región. Es decir, además de Vigía y Murindó. Opiné que las víctimas, además de los muertos, podían ser cientos o miles.

Posteriormente, en 2007 y 2008 estos datos pudieron verificarse. Las confesiones de los mandos paramilitares apuntan a la existencia de un subregistro de las bajas en la población civil. Un solo mando reconoció haber matado a mil quinientas personas en la región. Tal vez nunca se sepa la magnitud del desastre. Se puede confirmar que cientos de familias vivían a orillas del río Atrato y fueron arrasadas. Vivían de la tierra, de la pesca en el río, sin saber que sus tierras eran codiciadas por empresarios que ya tenían proyectos productivos para los terrenos usurpados. Terreno para puertos en el futuro canal interoceánico y para cultivos de palma. Adicionalmente, hay grandes proyectos de empresas mineras, dado que el territorio está justo sobre el Batolito Mandé, una formación geológica rica en oro, cobre, molibdeno, uranio y otros minerales estratégicos,²⁶ según un informe de la organización Justicia y Paz del 2009. El problema con las cifras de desplazados es que muchas veces se presume que la gente ha logrado escapar a otra región y luego no hay más datos, las familias simplemente no aparecen. Demasiados casos en que nunca llegaron al sitio a donde se dirigían con

²⁵De esta denuncia queda constancia en un documento oficial número 18.690, del 13 de junio de 1997, firmado por la fiscal Cristina Bustos Gómez.

²⁶Para más información consultar el capítulo: *Negocios y masacres en el río Atrato*.

los demás. Y mucho tiempo después se toma conciencia de su desaparición.

Si mi denuncia hubiera tenido curso adecuado, debieran haber respondido, por acción u omisión, el presidente Ernesto Samper, los comandantes de las Brigadas del Ejército con jurisdicción sobre el río Atrato, los gobernadores de Antioquia y Chocó, los comandantes de policía de Antioquia y El Chocó, los alcaldes de Vigía del Fuerte y Murindó, los personeros y las autoridades con responsabilidad de velar por los derechos de la población civil. En síntesis, debía responder el Estado colombiano. Los gobiernos posteriores de Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez continuaron la omisión criminal en el deber de proteger a la población civil del río Atrato. En el caso de Uribe, su participación fue más activa, pues protegió legalmente a los agresores, como el general Rito Alejo del Río.

Seguí buscando en Medellín a personas recién venidas del Atrato. Al tiempo que recogía información debía pensar en mi seguridad personal y la de mi esposa. En adelante ya no viviríamos tranquilos en Medellín o en Colombia. En una de mis reuniones con los investigadores de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, me explicaron francamente que no me podían garantizar seguridad dentro del Programa de Protección a Testigos. Ni siquiera estaba garantizada la vida de los funcionarios investigadores, que cumplían su trabajo en condiciones precarias, claramente insuficientes para llevar a cabo el proceso que implicaba la instrucción de los sumarios.

Según me explicaron los funcionarios, el programa de protección a víctimas y a testigos de la violencia política en Colombia, era (y es) una ficción. Entre los pocos testigos que sobreviven no todos quieren hablar. Y entre los que quieren hablar, pocos confían en la justicia. Según se verificó más tarde, los hechos

que documento ocurrieron no sólo en Vigía y Murindó sino en todo el norte de El Chocó, Urabá, Suroeste Antioqueño y Urabá chocoano. En cientos de kilómetros cuadrados se movilizaron miles de sicarios que produjeron centenares, o tal vez miles, de muertos, heridos, amenazados y desplazados. Pero el registro de estas matanzas en los medios de difusión fue minúsculo en proporción a la magnitud del desastre. La Brigada XVII del Ejército y otras autoridades militares con jurisdicción en Antioquia y El Chocó toleraron los crímenes de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Durante 1997 otras cinco Brigadas del Ejército Nacional fueron acusadas por relaciones con bandas armadas ilegales. Algunos de los batallones que actuaban en común con los escuadrones de la muerte fueron dispersados. La tropa fue enviada a otras guarniciones militares, pero los mandos prosiguieron las acciones ilegales en sus nuevos destinos.

A finales de 1997 e inicios de 1998 creció la intimidación a defensores de derechos humanos en todo el país. Se evidenció la unidad de mando y de criterios entre la alta oficialidad del Ejército y el escuadrón de la muerte comandado por Carlos Castaño.

Viernes 13 de junio de 1997. Durante la reunión ordinaria del comité de redacción del diario *El Colombiano*, el periodista Juan Gonzalo Betancur presentaba la información de mi denuncia. Aunque la redacción contaba con un panorama muy completo de los sucesos de la región, mi relato debía ser confirmado, ya que sólo era el recuento de lo que yo escuché a otros. El comité de redacción del periódico aprobó iniciar las verificaciones con los organismos, especialmente con la Defensoría del Pueblo. Mi información podía parecer tendenciosa, porque sólo señalaba las agresiones de las Autodefensas a la población civil y no mencionaba la violencia guerrillera. De haber tenido información en ese sentido la habría incluido, pero en mayo y junio de 1997 ninguno de los testigos me manifestó haber sufrido por violencia de las FARC o de otro grupo

guerrillero. Pero persistía la duda sobre la cantidad de muertos. Se comprobaría el relato con dos enviados especiales a la zona, Javier Arboleda y el fotógrafo Fredy Amariles.

Domingo 15 de junio de 1997. En las selvas del Caguán, Departamento del Caquetá, al sur de Colombia, la guerrilla liberó a setenta militares que tenía en su poder. Entre ellos, los diez infantes de Marina apresados por la guerrilla en El Chocó.

Leí la *Revista Semana*. Ésta reseñó que durante el proceso de liberación jugaron un papel muy importante los delegados internacionales, entre ellos los embajadores de Noruega y Suecia, quienes venían cuestionando el manejo de los derechos humanos en Colombia.²⁷ Mientras el país celebraba la vida y la libertad de los setenta soldados, los sectores más radicales de la derecha se quejaban por el «número de circo» que le dio gran despliegue a la guerrilla. «El circo de la guerrilla» es la misma frase que había escuchado la periodista a los mandos militares cuando hablaron despectivamente de «los diez negritos».

Nunca antes la guerrilla había devuelto con vida a tantos soldados retenidos. Era un buen augurio para cimentar la paz. La prensa, la radio y la televisión hicieron un cubrimiento riguroso, minuto a minuto de lo ocurrido en el día y así se llegó a un «momento de la verdad». Todo el país opinó sobre lo que estaba ocurriendo, pero otros profundizaron sobre las consecuencias en el Derecho a corto plazo. La costumbre en nuestro conflicto había sido la «guerra sin cuartel», el remate de heridos, la tortura y ejecución

²⁷Son países que anteriormente brindaron refugio a miles de exiliados del cono sur latinoamericano. En tiempos recientes ha crecido el número de expatriados colombianos que optan por Europa, donde han tenido acogida en los medios académicos, universitarios y artísticos. Otros sobrevivimos en trabajos precarios.

sumaria de los sobrevivientes. Tal costumbre fue asumida por militares, escuadrones de la muerte y por algunos grupos guerrilleros. Es la omisión total de los protocolos internacionales que regulan las acciones de guerra.

En el macabro «arte» de la guerra las costumbres evolucionan, pero el aspecto humanitario es crítico y es el que merece nuestra atención. Sobre todo la relación entre combatientes y población civil. En Colombia, los actores del conflicto apenas están asimilando la idea de que los civiles no deben ser sujetos de ataque. En la conducta más típica del Ejército y sus escuadrones paramilitares, las acciones van desde el ataque sistemático a los defensores de Derechos Humanos, ya sea desde la prensa, interceptando teléfonos, realizando seguimientos, allanando sedes y centros de documentación, hasta las detenciones arbitrarias, torturas o ejecuciones sumarias.

Colombia lleva el record de masacres cometidas en Latinoamérica durante los últimos diez años. Existe extenso acopio sobre esta forma del terrorismo de Estado, pero tales investigaciones circulan fuera del país. Algo tan simple como acumular información, libros o documentos sobre el panorama real de los Derechos Humanos es un riesgo serio para la propia vida.

A su vez, en la práctica común ante la población civil, la guerrilla eventualmente recibe entre sus combatientes a menores de edad e igualmente hace cautivos a civiles como medio de financiación. Ante la prensa, en ese período, la guerrilla argumentaba que retenía solamente a los promotores de la guerra. Pero al mismo tiempo se incorporó la práctica indiscriminada de retener en las carreteras a numerosos civiles que no hacían parte de las hostilidades. La libertad de civiles a cambio de dinero. Con tal práctica, las FARC vieron mermar su credibilidad y su valor político. La aberración en las costumbres de la guerra convirtió de hecho a los

ciudadanos del común en víctimas de la «pesca milagrosa» en las carreteras. Si la idea de las FARC era ganar legitimidad en su beligerancia, la retención de civiles no combatientes fue el error más catastrófico en la historia de la oposición armada.

Según los medios de difusión, la entrega de los setenta militares en julio de 1997 dejó varias enseñanzas para los militares y guerrilleros de Colombia.

Se referían, en primer lugar, al *Principio de diferenciación*: los civiles no pueden ser «prisioneros de guerra». En este caso, nos referimos a los *civiles no combatientes*. La aclaración es necesaria porque en guerras como la de Colombia, hay personas que van siempre vestidas de civil, pero ordenan secuestros, tortura, desplazamiento forzado, masacres y asesinatos selectivos. Cuando son capturados, difícilmente pueden pedir que se les trate y respete como a civiles.

Dado ese marco, más realista, tenemos en Colombia prisioneros de guerra. Contrarios capturados en medio del combate de fuerzas abiertamente enfrentadas y diferenciadas de la población civil. Recientemente la guerrilla se ha acostumbrado a estar uniformada (pero diferenciada del Ejército Nacional), y eso representa una garantía para la población civil, para que se aplique el principio de diferenciación. Si hay enfrentamientos, el uniforme permite a los combatientes excluir como blancos a los civiles.

Por otra parte, los soldados cautivos por la guerrilla deben ser tratados dignamente. Y, por último, el Ejército tiene que aprender a dar un tratamiento legal a los guerrilleros cuando los captura en combate. Debe someterlos a un estatuto, a un orden de manejo. Observamos que las noticias hablan de guerrilleros muertos y muy pocas veces de guerrilleros detenidos. En la costumbre militar colombiana el vencido queda en manos del más fuerte y so-

metido a su arbitrio. En términos de Derecho Internacional implica que estamos viviendo una mentalidad anterior a la Conferencia de Paz de la Haya realizada en 1899.²⁸ Normalmente en las refriegas del Ejército no hay capturas. Casi todos los guerrilleros que aumentan la población carcelaria de Colombia fueron capturados mientras adelantaban actividades relacionadas con su vida clandestina, pero pocas veces relatan haber sido capturados en el curso de un combate. También está el hecho de que, con la captura de supuestos guerrilleros, las autoridades incluyen a opositores políticos que no hacen parte de la oposición armada.

Tampoco ha cambiado el Estado colombiano su manejo legal del preso político o del guerrillero detenido. Lo común es extremar las penas impuestas a miembros de la oposición armada. Las irregularidades en los procesos son otro tema de estudio. El actual sistema judicial de Colombia viola a diario el derecho al debido proceso, desde la calidad de la defensa hasta la posibilidad de verificar la identidad e intencionalidad de los testigos.²⁹ Con la política de delatores, inventar una acusación contra un vecino sale muy rentable, porque el Estado paga recompensas a quienes delaten a los guerrilleros. Aún los abogados de guerrilleros y presos políticos carecen de garantías, pues las intimidaciones son comunes. Las presiones motivan la renuncia a seguir atendiendo a sus defendidos.

²⁸No es casual el hecho de que Colombia haya firmado tardíamente su adhesión a los convenios de Ginebra redactados en 1949, pero especialmente en lo relativo al Artículo III común que hace referencia a los conflictos armados que no sean de índole internacional.

²⁹Tema aparte son las pruebas: una amiga cercana y su padre estuvieron cuatro años en la cárcel, con pruebas que al final fueron desechadas. Ya libres, nadie les indemnizará por el tiempo perdido ni el daño emocional que sufrieron este abuelo, su hija y sus nietos.

Otro mensaje positivo que los medios difundieron ese día se refiere al hecho de que, al eliminar la práctica de la perfidia³⁰ en la guerra, se protegen la vida y la integridad de los cautivos.

Acoger el DIH es una señal de que las hostilidades pueden llegar a tener un cauce; que «hasta la guerra tiene límites»; que es posible llegar primero a entendimientos, a aceptar acuerdos mínimos. Es una idea que podría encontrar terreno abonado. Una idea que los bandos pueden difundir entre sus efectivos. Y luego, en los hechos se puede llegar a crear la costumbre de respetar al vencido. Y redescubrir al ser humano en el opositor vencido. Y entonces, se abrirán paso la tolerancia, el perdón y la reconciliación. Despertando de mis sueños, volví al mundo donde los hechos son tercos. El augurio de paz, que nacía con la entrega de los soldados, pronto se vendría a pique.

16 de junio de 1997. Recibí en mi oficina la visita de alguien que se identificó como Roberto Henao. Me mostró un carné que lo acreditaba como agente investigador de conflictos sociales en la Po-

³⁰El DIH prohíbe el recurso a la perfidia, con el fin de matar, herir o capturar a un adversario. Constituyen perfidia los actos que apelan a la buena fe del adversario, con la intención de engañarlo, haciéndole creer que tiene derecho u obligación de conceder la protección que estipulan las normas del DIH. Ejemplos de perfidia son los siguientes: a) simular la intención de negociar, so capa de la protección del pabellón parlamentario; b) simular la rendición; c) simular una incapacidad debida a heridas o a enfermedad; d) simular tener el estatuto de civil o de no combatiente; e) simular tener un estatuto protegido mediante la utilización de signos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas, de Estados neutrales o de otros Estados no partes en el conflicto; f) utilizar indebidamente el emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja (Cf. El Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales -Protocolo I de 1977- artículos 37-39, 44). Fuente: Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Pietro Verri. Comité Internacional de la Cruz Roja y Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1998, pág. 82.

licía Nacional. Dijo que le interesaba el conflicto laboral de METROSALUD y quería tener un panorama de la negociación que estaba en curso. La excusa de la visita no era creíble y, de ser cierta, muy grave dada la costumbre de las autoridades colombianas de asesinar a los sindicalistas. Le expliqué que la negociación laboral se realizaba en un ambiente de cordialidad. La dirección reconocía que los sueldos estaban desnivelados en comparación con otros servicios de salud regionales y nacionales. La diferencia en la negociación se centraba en los porcentajes de incrementos y en el plazo para nivelarlos con los servicios de salud similares. Sobre la movilización de los empleados, no pasaba de mítines en los pasillos, pancartas, pitos, pero ni un solo hecho violento. La visita no tenía sentido ni justificación. El policía observaba mi oficina, miraba los documentos que tenía a mano. Pero lo más grave es que intentó ampliar información sobre mis actividades laborales, algo totalmente ajeno al motivo declarado de su visita. El agente me interrogaba justo al día siguiente de la entrega de los setenta soldados. A nuestro lado, un piquete de sindicalistas gritaba pidiendo mejora salarial. Sin violencia.

A fines de junio de 1997 recibí la primera llamada de amenaza nocturna a mi casa. Desde entonces, me llamaban a las once de la noche y a las tres de la madrugada. Todos los días, con puntualidad militar. Las intimidaciones se sucedieron hasta que salí de Colombia con mi esposa el 15 de febrero de 1998. Las amenazas eran una retaliación por haber mediado en el conflicto.

8 de julio de 1997. Almudena Mazarrasa, la Comisionada de la ONU para la Protección de los Derechos Humanos en Colombia, expresa su rechazo a las amenazas que hay contra los dirigentes políticos que esperan participar en las elecciones del año en curso.

15 al 20 de julio de 1997. La alianza entre el Ejército de los Estados Unidos, el Ejército de Colombia y los escuadrones de la muerte

se hace cada vez más evidente. Al mes de la entrega de los soldados ocurrió la masacre de Mapiripán, a poca distancia de Cartagena de Chairá, en el Caguán, con apoyo directo del 7º Grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Así fue verificado por Fiscalía y otros funcionarios judiciales, que se cruzaron con ellos en San José del Guaviare, cuando viajaban a Mapiripán para atender a los sobrevivientes de la masacre.³¹ Otra fuente, esta vez militar, bien documentada me hizo este comentario: *«hoy en día está cada vez más claro que la masacre de Mapiripán fue la retaliación de los paramilitares por la entrega de soldados en Cartagena del Chairá. No es simple coincidencia que se haya establecido que los paramilitares salieron de Urabá, en las narices de las tropas militares y de policía que controlaban los aeropuertos»*. Es una conducta reiterada, la retaliación contra Mapiripán fue igual a la que hizo el Ejército contra Vigía y Murindó.

El *Colombiano* publicaba en su edición del viernes 4 de julio de 1997 un artículo titulado «Hay un pueblo amenazado». Este es un fragmento del mismo:

«El pasado 15 de junio, el mundo presenció la entrega de los setenta soldados retenidos por la guerrilla. Ese día se convirtió en la peor pesadilla para un pequeño caserío, Bartolo, una vereda de Murindó, donde casualmente viven setenta personas. Por algunas conjeturas, los grupos paramilitares tienen información según la cual en esa zona el Frente 57 de las FARC mantenía retenidos a los diez infantes de Marina, capturados en una emboscada del grupo insurgente a una patrulla naval en jurisdicción de Juradó, costa pacífica chocoana.

Las Autodefensas consideran que los moradores de la vereda debieron saber que por allí estaban los militares cautivos, y debieron informar del hecho a las autoridades, aunque nunca se ven por la región. Una de las pocas personas que pudo salir de Bartolo, quien pidió no

³¹ Ver cita cronológica del 27 de febrero de 2000 en la página 150 del libro.

ser identificada, aseguró que sus vecinos desconocían por completo la información: 'hemos visto muy pocas veces a las autoridades y a los guerrilleros con alguna frecuencia, pero esto no significa que los apoyemos'. 'Atrapados en su propio terruño, dijo, los habitantes de Bartolo han visto cómo sus días se vuelven interminables y las noches, una tortura constante, a tal punto que prefieren dormir en la selva'. Y no han podido salir no porque no quieran. El caserío tiene una sola entrada, la cual está controlada por los paramilitares. Ninguna autoridad civil, militar o de Policía se ha interesado por ir hasta allá y contar lo que ocurre.»

Los hechos relatados por este diario confirman que la lógica de las retaliaciones es idéntica en diferentes regiones y conflictos. En el primer caso, la entrega de los soldados se realizó en el Caguán el 15 de junio de 1997 y un mes después, del 15 al 20 de julio, ocurre una masacre en Mapiripán, a pocos kilómetros del sitio de la entrega. En el caso de los infantes de Marina, que supuestamente estuvieron retenidos cerca de Murindó, el mismo día de la entrega, el 15 de junio de 1997, hubo un castigo colectivo a la Vereda Bartolo, a pocos kilómetros del lugar donde fueron recogidos los infantes. Y, por último, mi intervención en la región como mediador para obtener las pruebas de supervivencia. Al día siguiente de la liberación, recibo la visita del investigador de la Policía.

Posteriormente, el 8 de marzo del 2005, Colombia aceptó públicamente que agentes del Estado participaron en la masacre de Mapiripán. La declaración fue hecha en San José de Costa Rica, al inicio de la audiencia pública convocada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

«La masacre de Mapiripán fue planeada tras reuniones sostenidas por la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se llevaron a cabo a principios del año de 1997, donde participó, según testimonios recabados en el proceso, Salvatore Mancuso. La operación

contra la población de Mapiripán fue auspiciada por miembros de la fuerza pública colombiana, quienes posibilitaron la entrada de más de doscientos paramilitares al mencionado lugar.

Durante seis días, miembros de las AUC impidieron la libre circulación de los habitantes del pueblo y detuvieron, torturaron, ejecutaron y arrojaron al río Guaviare parte de los cuerpos de, por lo menos, cuarenta y nueve personas. La participación de agentes del Estado en la masacre no se limitó a facilitar el ingreso de las AUC a la región, sino que también hicieron caso omiso de los llamados de auxilio de la población civil durante la incursión.

La masacre de Mapiripán es un caso paradigmático que refleja la cooperación entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad en Colombia, la barbarie con que operan y el manto oscuro de la impunidad que las rodea. Los representantes de las víctimas esperan que la Corte emita una sentencia que declare, en estos términos, la responsabilidad del Estado colombiano por las violaciones a las que fue sometida esta población».

18 de julio de 1997. Almudena Mazarrasa pide al Gobierno de Samper que considere la posibilidad de acabar con las asociaciones comunitarias CONVIVIR.

22 de julio de 1997. El Comité de Víctimas de la Guerrilla solicita a Naciones Unidas que Almudena Mazarrasa sea retirada de su cargo, por su pronunciamiento en contra de las CONVIVIR. Fue su cuarto pronunciamiento en el mismo sentido. Ese mismo día, la funcionaria deplora la masacre de campesinos en Mapiripán, cometida por los paramilitares.

Lo más sorprendente es que los escuadrones de la muerte, las CONVIVIR de Álvaro Uribe, y el Gobierno de Ernesto Samper se unen contra Almudena Mazarrasa y consiguen que la ONU la retire de Colombia. Hay aspectos discutibles en la gestión de la abogada y diplomática española, pero lo cierto es que compiló du-

rante sus primeros ciento dieciséis días de gestión, más de cien quejas que radicó en su despacho. Mazarrasa se pronunció en contra de todos los actores del conflicto, el Gobierno y sus CONVIVIR, las Fuerzas Armadas y escuadrones de la muerte. Sobre la oposición armada dijo que *«existen signos alentadores en algunos sectores de la guerrilla pero sus acciones bélicas contradicen sus mensajes»*. Cumpliendo con su deber se había convertido en una persona incómoda para todos los actores armados en Colombia. Se fue Almudena Mazarrasa y la población civil siguió recibiendo plomo. Vendrían luego otros funcionarios de la ONU menos activos frente al Estado colombiano.

El día que iban a asesinar a Almudena Mazarrasa

A principios de junio de 1997, Mazarrasa había presentado su primer informe de actividades. El documento central señaló la paramilitarización de las cooperativas CONVIVIR en todo el país. Las CONVIVIR eran el proyecto bandera de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia.

La acusación describía la política de exterminio contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en cada zona donde actúan estas asociaciones de civiles armados. El informe mostraba que entre las zonas de expansión paramilitar estaban los departamentos de Antioquia y El Chocó. Una información reunida por la ONU incluye fotografías de los miembros de las Autodefensas vistiendo uniformes del Ejército de Colombia. Otro apartado confirma que en Urabá actuaban, combinados, retenes de los grupos paramilitares a muy corta distancia de los retenes del Ejército.

La Comisionada de la ONU denunció la intención manifiesta de la guerrilla de sabotear el proceso electoral en curso. Infortunadamente, las FARC cumplieron su amenaza matando a alcaldes,

concejales, diputados y parlamentarios activos, al igual que a candidatos a diferentes alcaldías y corporaciones públicas. De nuevo la población civil como sujeto de ataque, en contradicción con las normas del Derecho Internacional Humanitario.

A finales de junio de 1997, en misión peligrosa, una comisión de la Defensoría del Pueblo y un par de redactores de *El Colombiano* (Javier Arboleda y Fredy Amariles), se trasladaron a la cuenca del río Atrato para comprobar, entre otras cosas, la veracidad de mis acusaciones. El alto riesgo de la investigación periodística que cumplieron en el río Atrato se ve en las cifras: veinte prominentes defensores de derechos humanos cayeron asesinados durante 1997. De los sobrevivientes, unos cuantos lograron niveles de protección efectivos. El resto debió optar por el silencio, el desplazamiento interno o el exilio. El recorrido de los periodistas de *El Colombiano* en las selvas del Atrato dio origen a la serie de cuatro reportajes que ampliaron y ratificaron lo que yo había denunciado ante la justicia.³²

Al analizar el contenido de la serie de denuncias hechas por los periodistas, podemos concluir que hubo suficiente información para que las autoridades de Colombia actuaran de oficio. El diario *El Colombiano* es el segundo en circulación a nivel nacional. Este solo documento sería suficiente para señalar la omisión criminal de las Fuerzas Armadas de Colombia y su comandante, el Presidente de la República en aquel momento, Ernesto Samper Piza-

³² «El Atrato, cementerio de una guerra» (04/07/1997), «Murindó, sitiado por los violentos» (05/07/1997), «¿Dónde están los desaparecidos de Vigía del Fuerte? (07/07/1997) y "Un pueblo de viejos se muere de hambre» (14/07/1997). El análisis de contenido y síntesis sobre la serie informativa de *El Colombiano* queda disponible en los anexos del dossier «Negocios y masacres en el río Atrato» y en PDFs descargables por internet.

no. He anexado algunos de estos reportajes a las denuncias que he hecho ante ACNUR y otros organismos. La investigación de *El Colombiano* y la Defensoría del Pueblo permitió deducir que las atrocidades sufridas por la población civil en las selvas del Atrato fueron más graves de lo que yo había denunciado en un principio.

Las ejecuciones masivas se cometieron en múltiples poblados a lo largo de centenares de kilómetros en la cuenca del río, desde Carmen del Atrato hasta Bocas del Atrato. Los enviados especiales del diario documentaron igualmente los abusos cometidos por la guerrilla, concretamente el asesinato de civiles que supuestamente colaboraban con los escuadrones de la muerte. Fuera de *El Colombiano*, pocos medios reseñaron la información.

Lo normal es que denuncias tan graves como las que presentó este diario produjeran la destitución de ministros, la caída del Presidente, la rotación de gobiernos y cambios radicales en las cúpulas militares y los organismos de seguridad. Sin embargo, las muertes se asumieron dentro de la rutina y «normalidad democrática» de Colombia.

21 *de julio de 1997*. Ratifiqué y amplié mi declaración ante la Dirección Regional de Fiscalía en Medellín.³³ En esta nueva diligencia observé que la fiscal no había leído el expediente inicial ni estaba al tanto del tema. Hubo especial dificultad para intentar la descripción del hombre que me había amenazado en el hotel de Vigía del Fuerte. Aún cuando estaba dispuesto a colaborar para levantar un retrato hablado del sicario, esta diligencia no se hizo. Quedaron puntos pendientes, pero esa unidad de la Fiscalía nunca me volvió a llamar.

³³La Fiscalía General de la Nación clasificó mi nueva declaración con el número de radicado 23.675.

Al margen de la justicia, la investigación tomó ritmo propio. Lo que era un simple relato creció en pruebas y testimonios directos. Ante la Procuraduría y la Fiscalía de Colombia se acumularon más denuncias, presentadas por comunidades religiosas. Ello explica, en parte, la agresión a monjas y sacerdotes a manos de los escuadrones de la muerte. Los medios de difusión recibieron los testimonios, que pude seguir en los varios diarios y telenoticieros. Se presentaron numerosas denuncias a la prensa de El Chocó y se acumularon cartas en la Procuraduría General de la Nación.

28 de julio de 1997. En esta fecha se dirigió a la región del Atrato una comisión conformada por ocho entidades diferentes: la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, delegados de derechos humanos de España, la Consejería Presidencial, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de Urabá, el Obispo de la Diócesis de Quibdó y un grupo de periodistas. La comisión fue coordinada por Almudena Mazarrasa. En uno de los poblados, los periodistas de la comisión y otros investigadores independientes interrogaron al alcalde y al comandante de Policía. Éstos dijeron no saber nada de la presencia paramilitar en Vigía ni en otros sitios del río Atrato. En un poblado pequeño las autoridades no oyeron los disparos y no vieron a centenares de ciudadanos conducidos por la fuerza hasta una escuela.

La comisión de la ONU fue amenazada por las Autodefensas mediante una nota en la que advertían a los investigadores que si no abandonaban el poblado serían atacados con explosivos. Se hicieron múltiples denuncias ante organismos internacionales. Uno de los participantes en el grupo relató que, cuando los miembros de la comisión refirieron la amenaza ante el alcalde y el comandante, estos respondieron cínicamente que en el pueblo, durante los últimos seis meses, solamente habían muerto dos personas a

causa de riñas callejeras. Alegaron también que no habían visto a ningún paramilitar en la región.

Un militar español, acompañante de Almudena Mazarrasa se enfadó y les respondió que *«si afirmáis que no habéis visto a un solo paramilitar, venid conmigo y os presento, porque yo almorcé con el comandante de ellos. Si afirmáis que aquí no hay muertos os puedo mostrar dos fosas comunes ahora mismo»*. El militar español les siguió diciendo: *«¿qué clase de autoridades son ustedes que no oyen, no ven, no huelen?»* E insistía en que toda persona con responsabilidad militar o policial debía estar enterada de lo que ocurre en la región.

Desde el momento en que aterrizaron los helicópteros, los miembros de la comisión se dispersaron por diferentes sitios del pueblo y los paramilitares no pudieron controlar a tanta gente (unas veintidós personas). Los pobladores dieron datos, pasaron papeletos con nombres de los sicarios. Pero hubo un testigo en particular que mostró el sitio exacto de las dos fosas comunes. El funcionario judicial de la comisión, Fernando Toledo, se armó de pala, desenterró cuerpos mutilados, les hizo fotos y los volvió a cubrir. Luego de ver cuerpos mutilados, la nota de amenaza recibida por la comisión de la ONU debía ser tomada en serio.

29 de julio de 1997. El diario *El Espectador* reseñó la amenaza sufrida por la comisión y citó a manera de titular la declaración de la alta funcionaria de la ONU, «Preocupa la connivencia entre paramilitares y Ejército: Mazarrasa.» Pero en la prensa nacional no se informó sobre la existencia de las dos fosas comunes que habían visto varios miembros de la comisión, por lo que los noticieros de televisión hablaron únicamente de un papelito (las amenazas) escrito con mala letra. Una periodista de la televisión regional de Antioquia nos dijo que había reconocido a varios miembros de las AUC en el hangar del aeropuerto de Medellín, de donde había salido y vuelto la comisión judicial. *«No mataron a Almudena Mazarrasa porque*

el aeropuerto estaba lleno de periodistas y cámaras de televisión», me dijo la redactora. Por encima de las amenazas, la Comisión de la ONU compiló suficientes testimonios y pruebas sobre la violencia sufrida por los civiles.

Cabe recordar que, cuando un funcionario de la ONU o del CICR hace sus declaraciones, se somete a una gradualidad y secuencia: primero se informa internamente a las máximas autoridades sobre los hechos irregulares que se han descubierto, luego se sugieren acciones concretas y correctivos, a manera de insistencia. Y solamente al final de la secuencia se llega a hacer pronunciamientos públicos del estilo *«preocupa la connivencia entre paramilitares y Ejército»*. Dentro de la «normalidad democrática» de Colombia ningún organismo asumió que se debía inspeccionar y controlar al Ejército. El Congreso hizo un silencio tenebroso. No faltó el editorial señalando que la funcionaria de la ONU estaba pisando terrenos que no eran de su competencia.

Cuando el proceso judicial tomó ritmo, yo estaba buscando el modo de salir de Colombia. Con base en la información que compiló la comisión de la ONU se inició, con extenso material probatorio, el expediente UDH-248 /1997 de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Colombia. Sobre el sumario iniciado por la comisión, hasta la fecha sigue existiendo silencio. De lo que pude conocer del expediente, había fotografías de los hoteles en el norte de El Chocó en donde se habían instalado las comandancias paramilitares. Justo en frente de los cuarteles de policía. Vi fotografías de paramilitares del norte de El Chocó, pero no pude reconocer a ninguno. Mientras el Poder Judicial adelantaba sus diligencias, otros comunicadores y periodistas recopilábamos información sobre los motivos económicos, los indicadores de la importancia del Atrato, como método para explicar el etnocidio que sufren las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Las amenazas de cada día

Continuaban las llamadas por teléfono a mi casa. Dos veces cada noche. Con frecuencia recibí llamadas telefónicas supuestamente equivocadas, pero quienes llamaban repetían fragmentos de conversaciones que yo había hecho por teléfono a mi familia. En octubre quise descansar, salir a Coveñas, un balneario en la costa atlántica de Colombia, sólo un fin de semana. Llamé a un amigo con quien podía organizar el viaje. Cuando colgué el teléfono, entró otra llamada. Una persona con voz rápida y burlona me decía «señor, buenos días, hoy le estamos ofreciendo el mejor plan para sus vacaciones en Coveñas. Lo estaremos esperando para darle toda la atención que usted se merece». De nuevo, lo inquietante era el acento, *chilapo* (de Córdoba y Urabá), muy diferente al acento *paisa* de la región antioqueña. El teléfono del apartamento correspondía a una línea nueva, es decir, no estaba en bases de datos de empresas de mercadeo, y tampoco era esa la vía de comercialización de los paquetes turísticos en Colombia.

Una noche de septiembre de 1997 yo dialogaba por teléfono con una periodista del diario *El Tiempo* sobre la presión que sentía. «¿Qué piensas hacer?», me preguntó. Le respondí, con algo de humor, que si sentía más presión les dejaba el «charco», que tal vez me iría a otro país, antes de que me destriparan como a un sapo. Colgué el teléfono e inmediatamente entró una llamada. Al responder escuché un coro de «croaaa, croaaa, croaaa». Un concierto de sapos y ranas. ¡La voz de varias personas, hombres y mujeres, croando! Luego se reían.

Otro día, otra llamada. La voz dijo: «está comprando huevos, mantequilla y leche». Llamé a mi casa. Mi mujer no respondía. Volví a llamar y me respondió que acababa de entrar a la casa, porque estaba comprando los ingredientes necesarios para hacer una torta. Hubo situaciones similares y cada vez envié a mi mujer a que se

protegiera entre su madre y mis cuñados. A la tercera ocasión respondió que ella permanecería a mi lado, que asumía todo el riesgo de vivir conmigo. Cada vez que sonaba el teléfono, sufría un sobresalto. Reduje al máximo mis llamadas. Mis temas de conversación siempre se referían a cuestiones administrativas y laborales. Dejé de mencionar sitios o eventos a donde debía ir.

En octubre de 1997 hubo una nueva y extraña llamada a mi casa. Contestó mi esposa, que inmediatamente me llamó a la oficina. Yo estaba trabajando, aunque ya había caído la noche, porque estaba preparando una de las campañas de salud. Me preparé para salir. A los pocos minutos, mientras bajaba por las escaleras, un desconocido hizo cinco disparos de pistola a la nueva sede administrativa de METROSALUD, en el Edificio Sacatín en la Avenida San Juan. Cuando llegué a la recepción encontré al vigilante debajo de la mesa, asustado, pero ileso. A su lado, los cristales rotos de la puerta. El marco de aluminio tenía agujeros de reducido tamaño, hechos por munición de pequeño calibre. Nunca supimos el porqué de los disparos. Yo era el último funcionario administrativo que estaba en el edificio. En el quinto piso quedaba el personal operativo mínimo del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres de Medellín. Ni se dieron cuenta de lo que ocurrió en el bajo del edificio. Cada vez que salía a la puerta, de mi casa al trabajo, me preguntaba si ese sería mi último día, mi última hora.

Noviembre y diciembre de 1997. Las amenazas telefónicas se intensificaron. Siempre con un mismo patrón. Sentía miedo desde la caída del sol hasta el amanecer. No podía desconectar mi teléfono porque mi número estaba incluido en la lista de llamadas de la Red de Urgencias, Emergencias y Desastres de Medellín. Si algo grave ocurría en la ciudad, mi teléfono debía estar disponible a cualquier hora del día o de la noche.

Enero y febrero de 1998. Se sucedieron masivas amenazas a personalidades y organizaciones defensoras de Derechos Humanos en todo el país. En febrero pasaron al asesinato selectivo de líderes comunitarios y promotores de Derechos Humanos. Las amenazas y asesinatos fueron sucedidos de masacres. Lo que me estaba pasando lo sufrían miles de personas en todo el país. Las amenazas en mi contra tenían relación directa con mi mediación para obtener las pruebas de supervivencia de los infantes de Marina y su posterior liberación. Fueron siete meses y medio en medio de amenazas telefónicas. Cuando visitaba La Alpujarra tenía encuentros directos con los paramilitares de Vigía del Fuerte. Entonces recorrían tranquilamente los edificios públicos de Medellín. Incluso tenían un sitio propio en el edificio conocido como «Casa de Novias», en diagonal al Centro Administrativo Municipal y Departamental. Hombres de saco y corbata me saludaban en la plazoleta, con suma cortesía. Seguramente eran quienes acompañaban al alcalde Chaverra en Vigía, el día que llegué sin avisar. Su aspecto era muy diferente porque, en el calor de Vigía, los había visto en camisilla y sudando a mares. En Medellín, con su clima fresco, vestían saco. Muy elegantes. Me preguntaban con evidente sorna si había vuelto a visitar Vigía del Fuerte o Murindó.

A su vez, los funcionarios de la Gobernación, que sabían que yo estaba juntando datos, me avisaban sobre la presencia de reconocidos líderes paramilitares caminando tranquilos en las oficinas de la Gobernación y de la Asamblea Departamental de Antioquia a la vista de todo el mundo. Eran los últimos meses de mandato del gobernador, y más tarde Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Compré los billetes de avión para salir de Colombia. Tenía un colega, periodista en un diario israelí (JSF, de B'Air, *La Ciudad*, de Haifa), que me podía conseguir un sitio en un kibutz de Haifa o en

Galilea. Con mucha prevención cumplimos todas las diligencias ante el DAS para salir del país. Cuando entré al edificio a tramitar mi certificado de antecedentes judiciales había algunos amigos de Bogotá vigilando, por si no volvía a salir.



En el exilio

Jueves 12 de febrero de 1998. Hice mi última visita a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Entregué los últimos datos que había reunido y que señalaban la inacción de la Gobernación ante las masacres. Pero, más allá de eso, confirmé haber visto a los paramilitares andando a sus anchas por los pasillos de la Gobernación y la Asamblea Departamental de Antioquia. Recapitulé las amenazas que me hacían por teléfono. De nuevo, los funcionarios de la Fiscalía me dijeron con toda franqueza que el Programa de Protección a Testigos era una ficción. ¿Cómo me iban a proteger si no podían confiar en sus propios compañeros? Los sumarios desaparecían y un funcionario me dijo que eso podía ocurrir con todo el proceso que se inició con mis denuncias. «*La gente de Uribe puede desaparecer ese proceso*», concluyó.

La magnitud de lo que se estaba investigando quedaba clara en la relación de llamadas telefónicas que se hacían desde Vigía del Fuerte a Necoclí y otras bases paramilitares, y a otras líneas telefónicas de entidades públicas. Con frustración, esos investigadores judiciales admitieron que lo mejor para mí era salir de Colombia.

Viernes 13 de febrero. Los compañeros de trabajo me hicieron una despedida muy alegre. Al terminar la jornada salí de mi oficina como si fuera un fin de semana normal. Administrativamente había pedido una licencia no remunerada por tres meses. No he vuelto a Colombia desde entonces. Para no exponer a nadie, durante dos años omití comunicarme con los amigos y los compañeros de METROSALUD.

En febrero de 1998 llegamos a Israel. Tenía amigos allí que nos podían recibir. Los primeros días los pasamos en Haifa. Apenas

unos días después de mi salida de Colombia asesinaron, en el centro de Medellín, al abogado y defensor de los Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, con quien yo tenía buena amistad. Había presentado una denuncia muy similar a la mía: pruebas de la responsabilidad del Ejército en las matanzas que estaban ocurriendo en el municipio de Ituango, al norte de Antioquia. Esa iba a ser mi suerte si volvía a Colombia. Entonces renuncié formalmente a mi cargo en METROSALUD. Objetivamente no podía volver a Colombia pero, si no renunciaba formalmente, quedaría en mi historial laboral un expediente por abandono de cargo. Desde Israel envié la carta.

Inicié los trámites para conseguir el status de refugiado ante la ACNUR en Ginebra. Antes de cumplir la mediación para obtener las pruebas de supervivencia y denunciar al Ejército colombiano, yo gozaba de tranquilidad económica, disfrutaba haciendo mi trabajo y tenía el afecto cercano de mi familia, a la que no veo hace doce años. Tenía salud mental suficiente para llevar una existencia plena, ahora llevo un duelo, ahora busco reparación por el daño que hemos sufrido.

Mientras resolvíamos la situación personal en Israel, en Colombia diferentes grupos de investigadores sociales iniciaron la presentación de sus trabajos sobre los promotores y financiadores de los crímenes que se cometieron en las zonas del Bajo Atrato y el Urabá (especialmente Jaime Andrés Peralta). Por mi parte, también seguí acumulando información sobre el Atrato mientras veía con inmensa tristeza que la situación no mejoraba. El paramilitarismo se ha convertido en una enfermedad crónica del Estado, pero Colombia ya parece insensible frente al exterminio masivo de población, especialmente en las zonas rurales.

Después de vivir en Haifa, nos acogieron los kibutzim Bar Am (Galilea), Nir Yitzhak (el Néguev) y, finalmente, Yotvetáh, frente a Jor-

dania. En Yotvetáh, gracias a una familia de judíos argentinos, mi esposa y yo pudimos hacer un curso básico de hebreo. Durante ese tiempo trabajé en criaderos de pollos, barriendo el museo Bar Am, limpiando cultivos frutales, empaquetando manzanas, lavando platos, separando pescados en el Valle de Hula o haciendo control de plagas.

Viví con mi esposa en Israel desde el 17 de febrero de 1998 hasta el año 2000. Antes de llegar, yo creí estar bien informado sobre las relaciones entre israelíes y palestinos. En 1998 los lectores latinoamericanos pensábamos que el conflicto ya estaba solucionado en Palestina. Había terminado la Primera Intifada, en la televisión se exaltaba la negociación y todos vimos a Yasser Arafat firmando los acuerdos de paz. La prensa nos hacía creer que el litigio se había reducido a la menor escala, que las causas estaban totalmente resueltas. Pude ver luego que la información que se emite sobre Oriente Medio es intencionalmente deformada e incompleta. El conflicto sigue latente, los agresores siguen impunes, las comunidades civiles palestinas son agredidas, sin posibilidad de defensa, y criminalizadas ante la opinión pública gracias al cerrojo informativo.

He visto desde dentro el Estado de Israel con su política depredadora, y he compartido con el ciudadano común, del cual he recibido el mensaje más solidario. Este es un país sorprendente, con enormes contradicciones. Recordaré por siempre a quienes nos dieron apoyo cuando supieron de nuestros problemas en Colombia. Siempre hubo ciudadanos que nos protegieron y apoyaron sin condiciones. En esa faceta, algunos israelíes cuidaron nuestra libertad, nuestra integridad y nuestras vidas. Pero el hecho de que hoy esté libre no me impide señalar la injusticia extrema que es el Estado de Israel. Vi el último resto de algo parecido a una «izquierda democrática» israelí en los kibutz pero, a su vez, cada kibutz es una unidad militar.

10 de abril de 1998. El diario *B'Air* de Haifa publicó cinco páginas, con base en el testimonio que di a la periodista Yafa Shir-Retz, sobre las masacres del río Atrato. El diario incluyó varias fotos de Vigía del Fuerte, entre ellas la de un cuerpo flotando en el agua, y la imagen del general Rito Alejo del Río Rojas. Inmediatamente después de esto, cuando fuimos a renovar el visado de nuestros pasaportes, el Ministerio del Interior –dirigido entonces por los fanáticos religiosos del Sha's– los retuvo sin explicación alguna durante trece meses. Sin documentos de identidad no podíamos contratar ni ser contratados. No podíamos comprar un billete de avión, no podíamos salir de Israel. Estábamos sin documentos en un país cuyo Gobierno nos enviaba un mensaje hostil. En contraste, los kibutzim nos acogían de la manera más solidaria.

Conocí a personas laicas absolutamente justas; dialogué durante horas con excelentes periodistas como Daniel Junovitz, Efrín Davidi y Einat Fishbain, del diario *Ha Aretz*. Tuve la suerte de conocer a la gente de *Shalóm Acshiav* (Paz Ahora) en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En Israel quedan personas a quienes debemos dar voz. No es lógico acusar a todo el pueblo judío por lo que hace el Estado, así como en Colombia no todos somos narcotraficantes.

2 de septiembre de 1999. El diario *Ha Aretz* (La Tierra), publicó el atropello que venía cometiendo el Gobierno de Israel contra nosotros al retener nuestros pasaportes. La información señalaba además que los ultrarreligiosos sefardíes del Ministerio del Interior venían discriminando a algunos judíos de origen ruso y a los judíos negros de Etiopía (Falash Mura). Los redactores reunieron una serie de casos similares y los publicaron. Al día siguiente el Ministerio del Interior nos informaba que ya habían «encontrado» nuestros documentos. Sin saberlo, las peleas políticas entre los partidos israelíes nos afectaron desde la retención de nuestros pasaportes hasta que nos los devolvieron. Sólo entonces el Ministerio nos

dio el permiso de residencia y trabajo. Con pasaportes en mano y papeles en regla, nuestro objetivo inmediato era salir de Israel.

Septiembre de 1999. Descubrí por mera casualidad algunas actividades criminales de los militares del Batallón Colombia en el Sinaí. Ocurrió que un soldado me contó con detalle que en esa guarnición se ocultan militares que han cometido asesinatos políticos en Colombia.

Yo estaba de voluntario en el kibutz Yotvetáh, cerca del Mar Rojo. A cambio de mi trabajo tenía techo, comida, recreación y un ambiente seguro. Un fin de semana salí al Mar Rojo para entrevistar me con un jubilado judío colombiano nacido en Jerusalén, que me proporcionaría algunas anécdotas y datos sobre la ciudad y el puerto de Eilat. A la casa de este amigo llegó, casualmente, un soldado del Batallón Colombia que andaba de permiso en el puerto de Eilat. Mientras el anfitrión nos preparaba comida colombiana, el militar me relató, jactancioso, que había ejecutado en Colombia a una persona que, según sus superiores, era un mando de las FARC. El soldado mencionó a los Lanceros y al Batallón Cazadores, y me dio el nombre del oficial que estaba a su mando. Como premio por el asesinato cometido, los mandos le habían enviado al Batallón Colombia, en la frontera entre Israel y Egipto. Parece que tal viaje es el sueño dorado de cada militar colombiano. El soldado, pensando que yo aprobaba lo que hizo, me relató que en la base donde estaba el Batallón, en el Sinaí, se esconden personas que han hecho acciones similares contra guerrilleros o aliados de la guerrilla. Son soldados sin nombre ni rango que tienen procesos penales en Colombia y están en busca y captura por haber cometido asesinatos. Pasan años en la base, pero no figuran en ningún documento de ingreso a Israel o Egipto. Legalmente no existen.

La base del Batallón está entre el desierto del Néguev y la árida Península del Sinaí. El militar me contó que cuando llega la inspección de la ONU, o alguna autoridad, la guarnición es alertada desde el poblado de Nitzana. El «soldado» sale al desierto con morral, carpa, agua y ración de campaña. Regresa a la base a los dos o tres días, cuando ha pasado la inspección. Entonces vuelve a ser el «soldado» que anda siempre de civil en la base, el mensajero de los oficiales, el que hace trabajos menores o recados de toda clase.

El militar me dijo que quienes vienen bajo cuerda pasan así dos o tres años, hasta que los procesos penales se enfrían. Entonces, con entrenamiento adecuado, vuelven a Colombia y siguen trabajando para el Ejército. En tres años, sin ser realmente cadetes, reclutas o mandos, estos prófugos de la justicia hacen cursos de escoltas, interrogatorios, comandos y lucha nocturna con infrarojos.

Aquel hombre me informó, además, sobre el tráfico de drogas. Me contó riendo que los soldados colombianos compran fácilmente hachís a los beduinos en Egipto, lo entran a la base del Batallón y en sus días libres sacan su mercancía por el poblado de Nitzana. Desde allí la droga sale a Tel Aviv y al puerto de Eilat.

El dueño de la casa nos interrumpió para avisar que la cena ya estaba lista. Él nunca supo de la conversación que ocurrió en su casa pero durante la cena, de sabor caribeño, me aportó otros datos muy interesantes sobre las relaciones entre Colombia e Israel.

5 de octubre de 1999. Presenté mi petición de refugio político ante la Embajada de España en Tel Aviv. Fue admitida a trámite. Otras embajadas nos rechazaron con el argumento de estar en un tercer país seguro. En abril del año 2000 nuestra petición de asilo en España fue aprobada.

Mientras estuvimos en Israel, casi todas las personas con quienes dialogamos apreciaban a Colombia como una democracia sólida, con algunos problemas derivados del narcotráfico. Hablé con soldados israelíes en los kibutz. Todos vacilaban al escuchar otra versión de los hechos. Me respondían con jactancia que Israel es proveedor militar de Colombia, y se sorprendían al escuchar que el material de guerra tiene como blanco a la población civil. Casi ninguno había oído hablar sobre las andanzas de Yahir Gal Klein, el mercenario que entrenó a los sicarios del narcotráfico que luego masacraron a centenares de campesinos. En Israel la sociedad «civil» sigue desinformada. Lejos de entrenar escuadrones de la muerte, casi todos pensaban que Klein ayudaba a los empresarios y a los organismos de seguridad colombianos.

Son demasiadas las coincidencias entre el Estado colombiano y el israelí en su manejo de los conflictos. Comparten doctrinas y acciones militares muy parecidas. Como ejemplo, la masacre del Aro, en Colombia, tiene demasiados parecidos con el arrasamiento que sufrieron poblados como Quibia, en el oeste de Jordania, y Quneytra, en Siria.

El arrasamiento de Quibia fue hecho por Meir Ha Artzión y Ariel Sharon, el otro genocida israelí, en los primeros días del Estado de Israel. Aplicaron técnicas especiales de combate para agredir a la población civil palestina. En incursión rápida (*raid*), la fuerza paramilitar 101 salió del sur del Mar de Galilea, cruzó la frontera de Jordania, llegó al pequeño poblado de Quibia, ejecutó a los habitantes y quemó y demolió todo. Este modelo de *raids* se aplicó centenares de veces contra pequeños poblados civiles en zona de frontera. Nadie fue condenado por las agresiones a las poblaciones de los países vecinos. Conocí al hijo de Meir Ha Artzión en su granja, situada a pocos kilómetros del lugar donde se cometieron los crímenes. Además de ganado, la granja está llena de antenas desde las cuales se monitorea cada señal radiogoniométrica

que se emite al este del Jordán. Ese dato me lo confirmaron los soldados israelíes de origen colombiano con quienes viajé hasta los Altos del Golán y el monte Hermón. La conclusión es muy simple: la familia de Meir Ha Artzión, el masacrador, sigue trabajando en operaciones de inteligencia para el Gobierno de Israel.

El otro coautor de los crímenes de Quibia, Ariel Sharón, llegó a los cargos más altos, y pocos en la sociedad israelí cuestionaron sus nuevos crímenes en Líbano, especialmente los de Sabra y Shatila.

El modelo de Quibia se aplicó a mayor escala durante la destrucción de Qnaytra, en Siria, en la Guerra del Yom Kipur. Esos crímenes de guerra nunca han estado en la agenda de los organismos internacionales. La agresión sistemática de Israel a los países vecinos es institucionalmente aceptada. Lo mismo está ocurriendo en Colombia contra sus países vecinos.

Colombia e Israel aplican la misma doctrina. Israel asesina a los palestinos, uno a uno y, de vez en cuando, a montones. Para eliminar a la oposición política, las «autoridades» de Colombia recurren a las masacres y a los asesinatos selectivos.

El desplazamiento de población afecta a millones de personas expulsadas de sus hogares y tierras. A la violencia interna se suman las incursiones contra pueblos fronterizos. Se utilizan cultivos industriales para marcar el territorio usurpado; mientras en Israel se arrancan olivares y se plantan masivamente dátiles en territorios que antes pertenecían a los palestinos, en Colombia las huertas campesinas se sustituyen por cultivos de palma aceitera para producir agrocombustible.

Se elimina sistemáticamente toda marca territorial, algo que permita identificar los topónimos. Se destruyen señales viales, culturales y todo sitio de referencia. Se altera el paisaje. Se legaliza la

propiedad sobre tierras usurpadas. Se crean leyes que permiten la prescripción del dominio sobre los territorios robados. Se admiten a registro notarial documentos que omiten la tradición (secuencia de sucesiones, ventas o sesiones) de sus propietarios. Es la impunidad total.

Las coincidencias entre ambos Estados incluyen un gran tejido económico y militar. Israel carece de recursos energéticos, por lo tanto necesita el carbón que recibe del Cerrejón, en la península colombiana de la Guajira, en la frontera con Venezuela. Ese carbón alimenta las plantas térmicas que mueven ciudades como Haifa. A cambio, Israel aporta al gobierno colombiano variedad de capacitación y armamento. Las industrias militares israelíes proveen a Colombia de varios tipos de aeronaves, sistemas de información sobre el terreno, detección de movimiento, figura humana, silueta térmica, detección de señales radiogoniométricas y marcación de blancos, así como sensores de proximidad e infrarrojos. Colombia importa de Israel material antidisturbios y fabrica, bajo licencia, los fusiles Galil. Los mandos militares colombianos reciben con frecuencia catálogos sobre material de inteligencia operativa local: lapiceros, monedas, relojes, y miles de objetos de uso cotidiano útiles para escuchar, fotografiar, seguir, escanear y bloquear señales. El Ejército compra material electrónico para implantar en terreno hostil: cámaras en sitios de paso, sensores y minirobots. También recibe doctrinas, prácticas de inteligencia y entrenamiento de escoltas. La oferta de productos de las industrias militares de la Defensa israelí se cerraba en las mismas delegaciones diplomáticas, como se podía leer en las direcciones que aparecían en los catálogos que pude ver gracias a un soldado.

Está comprobado judicialmente que mercenarios israelíes (militares retirados) participan en el entrenamiento de paramilitares en Colombia. Recientemente se ha verificado que la provisión de ar-

mamentos se da tanto a las Fuerzas Armadas como a los escuadrones de la muerte.

Un oficial retirado del Ejército, consultado para este libro, está en capacidad de confirmar que el general Rito Alejo del Río y Carlos Castaño Gil coincidieron en Israel durante los años 1982 y 1983. Carlos Castaño asistía a un curso que tenía como única identificación el número 562. El oficial afirma que, durante el tiempo que ambos estuvieron en Israel, tramitaron el envío de un gran arsenal a Colombia con destino a los escuadrones de la muerte. La información llegó al general Fernando Landazábal Reyes, quien entonces era Ministro de Defensa. Landazábal envió al periodista Ovidio «Peter» Charria a investigar lo que ocurría en el campamento del Batallón Colombia en el Sinaí. El cargamento sería transportado en un avión militar Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana.

La nave salió de Israel y nunca llegó a su destino. Una primera versión decía que un fallo en el cálculo del combustible necesario para el vuelo ocasionó la caída del avión. La versión contraria dice que las autoridades colombianas, al descubrir este tráfico de armas, planeaban incautar la carga a su llegada a Bogotá el 18 de octubre de 1982. Al develarse el plan, los militares colombianos optaron por deshacerse de la carga lanzándola al mar. El incidente del 17 de octubre de 1982 dejó cinco muertos entre los trece tripulantes del Hércules. Uno de los muertos fue el periodista y exmilitar «Peter» Charria. Los tripulantes del barco que rescataron a los sobrevivientes expresaron sus dudas sobre la versión oficial y las circunstancias en las que murió el periodista, que actuaba como agente a las órdenes directas del Ministro de Defensa.

Con esos antecedentes, cabe preguntar: ¿qué están aprendiendo las tropas del Batallón Colombia en el Sinaí?

La respuesta aparece en el libro más apologético de Carlos Castaño (*Mi confesión*, Bogotá, 2002). Además de justificar sus agresiones contra la población civil, el paramilitar confesó haber sido entrenado en Israel. Desde 1983 participó en un curso sobre la guerra y cómo llevarla a cabo. *«Recibía instrucción en estrategia urbana. Aprendimos a bloquear un carro blindado y utilizar las granadas de fragmentación para romper entrando a un objetivo, practicamos con lanzagranadas múltiples y entrenamos para dar golpes certeros con RPG7 o introducir el proyectil de un obús por una ventana».*

En otro apartado sobre la instrucción recibida, Carlos Castaño dice haber realizado un *«curso complementario sobre terrorismo y anti-terrorismo, miras nocturnas y paracaidismo»*. Otra materia que estudió fue la fabricación de explosivos manuales. *«También tuve la oportunidad de conocer militares de nuestro país, los hombres del Batallón Colombia, en el desierto del Sinaí. No conocí el Batallón, pero en mis días de descanso nos encontrábamos en sitios que usualmente frecuentaban; compartía con amigos, oficiales y sargentos».*

El libro circuló por todo el país y nadie cuestionó judicial ni diplomáticamente el entrenamiento dado por Israel al sicario colombiano. Mucho menos se cuestionó el papel del Batallón Colombia. La confesión es extremadamente grave: un miembro de una banda armada ilegal, teóricamente invisible para las autoridades israelíes, participa en un curso donde aprende cosas, que a todas luces serán usadas en acciones criminales. Y además logra, en Israel, contactos para comprar armamento pesado y consigue un avión militar extranjero para transportarlo.

Todo lo anterior pone en cuestión la «neutralidad» de Colombia como fuerza de interposición internacional entre Israel y Egipto. Está claro que el Batallón Colombia está subordinado a una alianza estratégica de largo plazo entre colombianos e israelíes.

Volviendo al tema de los mercenarios, Israel, Sudáfrica, Inglaterra y Argentina se han manchado con la sangre de civiles en Colombia. Así como Israel es la cabeza de la agresión de Estados Unidos a los países de Oriente Medio, el gobierno colombiano ha asumido el triste papel del «Caín» que asesina a sus hermanos en Sur América. Colombia lidera la agresión a los vecinos que osan construir otro modelo de sociedad.

El Gobierno lanza ahora agresiones a Ecuador y Venezuela, con pleno apoyo de los medios masivos. Uribe extiende su sicariato hacia el resto de América, como desarrollo de una secuencia que se inició con las masacres ocurridas en el río Atrato, en el marco de la Operación Génesis*. Inmediatamente, el modelo depredador se extiende a todo el país bajo el mismo *modus operandi*, en complicidad con el Ejército, la policía, los asesores norteamericanos, los mercenarios de todo el mundo y casi todas las autoridades.

Durante su primer mandato presidencial, Álvaro Uribe envió sicarios de las Autodefensas para derrocar (y asesinar) a Hugo Chávez. El 11 mayo de 2004 el Gobierno de Venezuela, documentó la responsabilidad del Comandante del Ejército de Colombia, general Martín Carreño, en acciones opositoras contra el presidente Chávez. Parte de la incursión se preparó desde la ciudad de Cúcuta, capital del departamento del Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Meses antes de la incursión, Uribe convocó a los dueños de la prensa para avisarles que iba a intervenir en Venezuela y que esperaba su apoyo para manejar la noticia. Mientras tanto, se preparaba un grupo de avanzadilla que penetraría en territorio venezolano a través del Estado Zulia. Otro despliegue se haría desde la zona del Catatumbo, donde funciona como avanzada una base militar estadounidense. En mayo de 2004, ochenta y nueve sicarios de las

*Consultar el mapa de la página 188.

Autodefensas fueron capturados. Cuando se interrogó a la fuerza de avanzada, se identificó a los mandos del Grupo Mecanizado de Artillería, en la frontera de Colombia con Venezuela que habían participado en el entrenamiento. Luego de identificar la, cadena de mando está claro que todo apunta al presidente Uribe.

El 1 de marzo de 2008 se produjo el asesinato de Raúl Reyes, negociador de las FARC, mediante una incursión de las Fuerzas Militares de Colombia en territorio ecuatoriano. La pauta es la misma: se asesina al mensajero, precisamente la persona que podía completar la gestión humanitaria de liberar a los soldados cautivos y, posiblemente, abrir un nuevo escenario político. Se trata, en última instancia, de cerrar toda vía de mediación y negociación.

Observamos serios indicios sobre la exportación del modelo paramilitar de Colombia a México, especialmente en el Estado de Guerrero, y contra las comunidades indígenas a las cuales usurpan sus territorios. Es un tema a seguir, pues parte de la represión al pueblo colombiano se hizo inicialmente con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. En Colombia los ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes sirvieron para encubrir posteriores masacres en comunidades rurales, ajenas a actividades ilegales. No es coincidencia que el actual Gobierno de México, similar al colombiano, esté acusado por fraude electoral y represión a los campesinos.

Los exiliados y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia han documentado la presencia de paramilitares colombianos en Honduras, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y otros países latinoamericanos.

Esta amenaza de los escuadrones de la muerte va en dos vías: por un parte, es una punta de lanza contra los países insumisos (Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua). La segunda utilidad del mo-

delo es la de mantener el triste *statu quo*. Al tiempo que se usurpa el poder en Honduras a Zelaya, los escuadrones de la muerte rebrotan en el país centroamericano. Las empresas de vigilancia envían a las haciendas a veteranos de las Autodefensas de Colombia para replicar el modelo de las CONVIVIR. Mientras tanto, la prensa dice cínicamente que «*se ha recuperado la normalidad democrática*».

El modelo común entre Israel y Colombia, que se puede extender a toda Latinoamérica, se resume en el concepto de Autodefensa: *Haganáh*. No es casual que en Colombia los escuadrones de la muerte se llamen «autodefensas» y sus mandos hayan sido entrenados en Israel. En la práctica se masacra a la población civil no combatiente. Al mismo tiempo se asesina de manera selectiva a los líderes comunitarios.

En junio de 2000 la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio de España firmó la resolución que me concedía el status de refugiado. Inicialmente recibimos apoyo económico de Cruz Roja y luego de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Ya tenía documentos de identidad, permiso de residencia y trabajo. Recorrí las calles de Madrid feliz de ir en anonimato. Me sentaba en las bancas de los parques durante horas, con la tranquilidad de que nadie me iba a pegar un tiro en la cabeza.

A mediados del 2000 se anunció en la prensa la visita de Raúl Reyes, mando de las FARC, a España. Venía en viaje oficial a presentar las propuestas que se estaban discutiendo en la zona de despeje acordada con el Gobierno de Andrés Pastrana. Asistí a las reuniones públicas, en auditorios llenos, que se realizaron en Madrid y en el Escorial. El gobierno español estaba entre los países amigos del proceso de paz en Colombia y se ofrecía como mediador. Autoridades españolas y académicos recordaban que en Sitges y en Benidorm ya se habían hecho hacía décadas convenios políticos para Colombia. La visita de Raúl Reyes fue un hecho oficial.

Durante las reuniones públicas, las FARC anotaron el correo electrónico de los asistentes que quisimos recibir información sobre los diálogos de paz. Por esta vía nos llegaba a todos –colombianos y españoles, periodistas y gente que simplemente había sentido la curiosidad de ver a un guerrillero– información que enviaban tanto el gobierno colombiano como la oposición armada. De esta forma miles de colombianos, docenas de parlamentarios europeos, profesores universitarios, analistas de conflictos de todo el mundo y, por supuesto, los periodistas estamos en las bases de datos de las FARC.

Lejos del periodismo pagado, mis primeros trabajos fueron como vigilante subcontratado en las obras de construcción del Metro Sur. Interminables horas nocturnas, vigilando maquinaria, al aire libre, con viento y a temperaturas bajo cero. Los siguientes cinco años recibí el apoyo de CEAR, hasta que adquirí la nacionalidad española. Mientras tanto, la vía diplomática que me sirvió para salvar la vida se está cerrando para los refugiados.³⁴

En España he compartido con refugiados e inmigrantes de todo el mundo relatos similares a los del Atrato. Su martirio tampoco sale en las noticias. Cuando se es refugiado se comparte el dolor. He escuchado a campesinos desterrados de las selvas del Brasil, a periodistas kurdos, refugiados palestinos, sobrevivientes de Chechenia, Chile y Argentina, cristianos de Irán, los traicionados del Sáhara, mujeres mutiladas en Etiopía, inmigrantes rusos y africanos. Es el mismo dolor, porque es una sola la humanidad. También compartimos la alegría de la solidaridad.

³⁴ Según CEAR, desde «2008 la protección de los refugiados experimentó una involución inequívoca, tal y como confirman los datos del Ministerio del Interior: sólo 4.517 personas lograron solicitar asilo (un 41% menos que en 2007 y la cifra más exigua desde 1989) y únicamente 151 obtuvieron el estatuto de refugiado», es decir, menos del 4%.

5 de diciembre de 2005. Por fin un día feliz: inmigrantes y refugiados de todo el mundo, residentes en el Estado español, participamos en la fundación de la FERINE (Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados).³⁵ En la Federación denunciemos las causas del desplazamiento, la precaria vida de los inmigrantes y el recorte de los derechos para los expatriados, exiliados y refugiados. Es una gran alegría y un honor haber aportado en el proceso. Nuestra Federación participa en los espacios asamblearios de las organizaciones de inmigrantes. Nuestro exilio no equivale a silencio.

Noviembre de 2006. Descubro que, poco tiempo después de presentar la denuncia sobre los hechos del Atrato, la Fiscalía, en lugar de verificar mis acusaciones y los datos aportados sobre las masacres, había adelantado un proceso penal en mi contra. En el año 2006 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Bogotá cierra el caso, desestimando todos los cargos. Nunca supe quién fue mi defensor de oficio. Pero tengo especial interés en saber cómo se instruyó el sumario, qué se utilizó como prueba para la acusación y quiénes actuaron como supuestos testigos. Y también cabe otra pregunta: ¿por qué se trasladó el caso a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá?

Si los hechos que tantas personas denunciemos hubiesen sido investigados, Álvaro Uribe Vélez no habría llegado a ser Presidente de Colombia. Nos hubiésemos evitado su mandato, que llenó el país de viudas y huérfanos. Como daño adicional a esta usurpación y arrasamiento de los territorios, se extienden el hambre y la miseria. Los cultivos de palma aceitera y otros usos no alimentarios del suelo sólo dejan hambre. De todas maneras, no debemos centrar la responsabilidad en una sola persona. Lo que ocurre en

³⁵Para más información: www.fferine.org

Colombia es un consenso de la casta que gobierna a sangre y fuego. Si no fuera Uribe, el plan lo habría ejecutado otro criminal de guerra de la misma estirpe. Y, desde luego, no podemos dejar de investigar la responsabilidad de las autoridades y organismos de los Estados Unidos en las masacres.

Tal vez un día pueda ir al río Atrato, a Vigía del Fuerte, y agradecer a las personas que salvaron mi vida. Me gustaría ver a la gente en la calle, con su música y sin miedo. Deseo volver a ver a esos funcionarios honestos, aquellos que me dijeron «*adióos, 'doctor'. Y vuelva.*», pero por ahora es imposible. Colombia es la mayor tragedia humanitaria de América. Los exiliados y refugiados queremos retornar en condiciones seguras y dignas.

La información acumulada sobre los hechos del Atrato está publicada en un blog,³⁶ un simple blog de internet, con el que he conseguido más resultados en la denuncia pública que en los doce años de trámites judiciales en Colombia. Y he encontrado a otros testigos, que me han escrito y ampliado información que, a medio plazo, será de utilidad ante la Corte Penal Internacional y organismos similares.

Les dejo en gratitud este libro, abierto a confrontaciones y adiciones, de manera que sirva como herramienta para conservar la memoria. Memoria insumisa.

Espero que se aplique en Colombia el principio de no-repetición, que no vuelva a ocurrir nunca más «que nos matan y no es noticia».

³⁶<http://testigosobreviviente.blospot.com>



Negocios y masacres en el río Atrato

El departamento del Chocó, frente al océano Pacífico, no importaba a nadie. Sin embargo, de la noche a la mañana todos los académicos estudiaban palmo a palmo sus 44.935 kilómetros cuadrados. En 1997 estaba claro que medio millón de habitantes muy pobres ocupaban un territorio extremadamente rico. Al mismo tiempo que se describía la región noroccidental de Colombia como «la mejor esquina de América», a finales de 1996 e inicios de 1997 miles de habitantes de Córdoba, Urabá y el norte del Chocó sufrieron bombardeos, masacres, desapariciones de líderes comunitarios y vecinos, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado. Una violencia a gran escala en la cual actuaron de manera conjunta todas las Fuerzas Armadas de Colombia y los escuadrones de la muerte al servicio del Gobierno. Han pasado catorce años de esta masiva violación de los derechos fundamentales y el panorama sigue igual.

Como ejemplo retomamos un testimonio que recibió la Comisión Asturiana³⁷ cuando fue a la Zona Humanitaria de Caño Claro-Curbaradó: *«Sin esperanza no se vive; los paramilitares nos sacaron corriendo del territorio Embera, en el Curbaradó, hasta La Paloma. En una casa nos metimos, pero vino el Ejército y nos sacó; cogieron a mi nieto de tres años y dijeron que era un guerrillero, todos llorábamos diciendo que no, que era un*

³⁷ La Comisión Asturiana hace verificaciones anuales sobre los Derechos Humanos en Colombia. Generalmente se compone de un grupo heterogéneo de personas que comprueban la información directamente con las víctimas y sus organizaciones sociales. Al mismo tiempo, se contrastan los datos con la versión de las autoridades. Utilizan una metodología rigurosa y ordenada para validar los relatos y documentos compilados. Finalmente se publica el informe anual y se deja constancia de la citación.

niño, pero dijeron 'maten a ese indio hijueputa' y ahí no más lo mataron. Esos no son gente, son bestias, unos animales».

El argumento habitual de los verdugos del Ejército y sus escuadrones de la muerte es que estaban adelantando una campaña contra la guerrilla en el territorio. En el caso citado, documentado en febrero de 2007, los observadores internacionales constataron que el asesinato de un niño de tres años, indígena embera, era un nuevo caso de agresión a la población civil no combatiente. Los indígenas denunciaron que el Ejército los intimidaba y desplazaba a la fuerza de sus territorios para entregarlos a empresarios e inversores. Hoy está claro que entre ellos están empresas multinacionales. Los vecinos sufrieron la secuencia de costumbre: terror, expulsión de los habitantes del territorio y reasignación institucional del territorio a nuevos «propietarios».

Donde nada se movía, se diseñaron vías de comunicación: al norte con la República de Panamá y el mar Caribe; por el este se trazaron nuevas vías con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca; por el sur con el Valle del Cauca y por el oeste con el océano Pacífico.

Las zonas donde se vivió esta marea de muerte coinciden milimétricamente con los planes trazados en el Plan de Desarrollo del Pacífico antes de 1994. El asesinato de civiles venía con sello del Estado colombiano y los organismos internacionales interesados en el desarrollo de infraestructuras necesarias para la extracción de materias primas. En una sociedad democrática, cuando se hacen grandes obras de infraestructura, la comunidad debería ser informada sobre el proyecto; convocada a consulta y, si aprueban las obras, ser indemnizada la población que se traslade de su territorio.

En el caso de Colombia, para rebajar costos, los organismos de planeación ocultan información a los vecinos sobre los planes que afectarán al territorio. Se omiten las consultas, se procede a la expulsión violenta y a la agresión masiva a la población civil. Posteriormente, los legisladores y las autoridades legalizan el ex-polio. Notarios y registradores escrituran el territorio usurpado y lo traspasan a los nuevos «empresarios», entre los cuales podemos encontrar multinacionales, líderes mafiosos, grandes hacendados y familias tradicionales que manejan a Colombia como una hacienda y a sus habitantes como *población prescindible, masacrable*.

Desde 1996 hasta la fecha, la agresión a las poblaciones indígenas y afrodescendientes sigue en ascenso.

Treinta y cinco corporaciones transnacionales de petróleo y gas operan en 180 áreas zonificadas para la exploración y desarrollo en las selvas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil. Contaminan y destruyen los territorios, sin importarles el futuro de los habitantes, como recoge en una investigación³⁸ Sinaltrainal (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos de Colombia).

¿Será casualidad que toda la zona del río Atrato, todo el departamento del Chocó, Córdoba y Urabá estén incluidas en las rondas petroleras que se han iniciado en 2010? Lo absurdo es que, al mismo tiempo que se multiplican las posibilidades de éxito en la exploración de hidrocarburos, el Estado colombiano promueve la privatización de Ecopetrol³⁹ y todas sus empresas energéticas. Se

³⁸ Megaproyectos. *La amazonía occidental y sus pueblos indígenas*. Sinaltrainal (www.sinaltrainal.or).

³⁹ Es la empresa más grande de Colombia y la cuarta petrolera más grande América Latina. Hasta ahora era una Sociedad Anónima de la que el Estado poseía más del 85% de las acciones.

aplica la misma política de pérdidas públicas y beneficios privados. Mientras la exploración es extremadamente costosa y la asume el Estado, los pozos productivos serán privatizados.

La investigación *Salvemos la Selva de América* anota algo más grave: no se trata solamente del petróleo que supuestamente están buscando las multinacionales, sino de que esta búsqueda es el pretexto perfecto para apropiarse de las zonas más biodiversas del mundo: *«Cuando se examinan los bloques de petróleo y gas, se observa que coinciden perfectamente con sectores claves de la mayor biodiversidad, casi como por diseño, y este es uno de los más grandes, sino el mayor lugar de la biodiversidad de la tierra.»*

Volvamos a las supuestas casualidades: El Chocó, además de su potencial petrolero es la segunda zona con mayor biodiversidad del mundo. En esa jurisdicción, el Batallón Voltígeros, del Ejército, se une a los escuadrones de la muerte para asolar los territorios y Consejos Comunitarios reglamentados en la Ley 70 o Ley de negritudes.⁴⁰

La población se niega a destruir su medio ambiente porque no lo vive ni lo habita de manera comercial ni provisional. Cada afrodescendiente vive en su territorio sintiendo que pertenece a su propia generación y a las posteriores. Tienen claro que los proyectos mineros son arrasadores de la capa vegetal, son contaminantes y el daño es irreversible. Su modelo productivo está diseñado para producir la mínima agresión al entorno con técnicas de cultivo más sostenibles en el tiempo.

⁴⁰ Promulgada en 1993, esta ley reconoce la propiedad colectiva de las tierras y beneficia a las comunidades afrodescendientes con la asignación de títulos colectivos sobre las tierras que vienen ocupando desde el fin de la esclavitud.

El departamento del Chocó tiene valor como región minera, maderera, pesquera y turística. Además, como ya se indicó, es una de las reservas mundiales por su biodiversidad. Sus habitantes, indígenas y afrodescendientes de la Costa Pacífica, vuelven de nuevo a padecer el suplicio del desplazamiento, las amenazas, detenciones, desapariciones, torturas y asesinatos.

Entre los proyectos mineros que atraen a las multinacionales hacia la región podemos indicar el identificado como Mandé Norte, que se dedica a la explotación de una veta de oro y molibdeno. Los municipios que deberían ser beneficiados son el Carmen de Darién y Murindó, pero en vez de un «progreso» compartido, los habitantes, han recibido violencia. La verdadera autoridad la ejercen los escudrones de la muerte y las multinacionales de la minería.

La empresa Muriel Minning, explotadora del yacimiento del Batolito de Mandé, es una filial de la empresa Goldplata Mining, con sede en Colorado, que desde 2005 tiene una representación formal en Medellín. Su influencia es tal que se han sumado a su lobby «periodistas» como Raul Tamayo Gaviria y despliegan anuncios en *El Colombiano* de Medellín: una y otra vez mienten a la opinión pública cuando se refieren a los verdaderos dueños del territorio.

La zona donde se quiere explotar el Batolito de Mandé es territorio colectivo de indígenas y afrodescendientes. Es la comunidad en su totalidad, reunida en consulta, la que decide si aprueba o no la extracción de los minerales. Hasta el momento, la votación de todas las comunidades ha sido en contra pues las vetas coinciden con cerros sagrados. La empresa minera centra su furia contra las comunidades indígenas de Nuevo Cañaveral, Uradá, Alto Guayabal, resguardo de Uradá Jiguamiandó, Chageradó, Turriquitadó y río Murindó. Cabe decir que son poblados agredidos sin pausa desde 1996 hasta 2010. Los indígenas habían tomado la

decisión de ir al lugar donde la empresa MMC había ocupado ilegalmente su territorio, y en particular, el lugar sagrado de La Rica.

La Muriel Minning se ha valido de tres personas que, suplantando a la asamblea comunitaria, han afirmado tener la vocería y la representación de toda la población, pero se trataba de una falsedad legal.⁴¹

Por otros motivos los tres impostores fueron asesinados por las FARC, que los acusaba de estar en relación directa con los escuadrones de la muerte. La multinacional Uriel Minning aprovechó la confusión creada alrededor de los hechos para acusar a las comunidades de indígenas y afrodescendientes de ser cómplices de la guerrilla, algo que no es cierto ya que hace años todos los habitantes suscribieron un documento en el cual se comprometieron a no ayudar a ninguno de los actores armados. Las comunidades no admiten en su vecindario a narcotraficantes, militares, paramilitares, policía, guerrilleros o a cualquiera que porte armas. Esa es la filosofía de las Comunidades de Paz, cuya carta está disponible para consulta en internet.

Al mismo tiempo que el Estado colombiano monta procesos judiciales contra las comunidades indígenas y sus líderes, los escuadrones paramilitares amenazan de muerte a defensores de esa población, como los sacerdotes Javier Giraldo y Alberto Franco o a los miembros de Justicia y Paz Abilio Peña y Danilo Rueda.⁴²

Es común, en toda la región, que las comunidades sufran las visitas de empresarios que quieren imponer asociaciones forzadas

⁴¹ Caso Muriel Minning Corporation, en el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo Colombia, sesión Minería. 10 y 11 de noviembre de 2006.

⁴² <http://justiciaypazcolombia.com/Senalamientos-contra-la-Comision>.

en negocios que son lesivos para los nativos. En medio de oportunas amenazas, los empresarios ofrecen «comprar» las tierras más productivas. Buscan sobre todo destruir a las comunidades e impedir la reconstrucción del tejido social y negar la seguridad alimentaria.

El entramado de violencia–multinacionales que describimos en el noroccidente de Colombia es idéntico al modelo que se aplica en otros rincones del mundo, como Angola, El Congo, el Sudeste Asiático, Indonesia, Madagascar o Brasil: todos tienen en común el hecho de que sus territorios se convierten en el destino de las grandes corporaciones, aparecen milicias o resucitan viejos conflictos; se diseñan trazados viales hacia las materias primas; se acoplan proyectos comerciales; se mina la autoridad civil y, sobre todo, se trata de manera brutal a la población autóctona que no encaja en el rediseño del territorio.

Este modelo, de negocios y masacres, se aplica en el río Atrato: Se crean avanzadas militares como la de Bahía Málaga, en el Pacífico colombiano, que es una base de submarinos usada para cubrir el flanco Pacífico en las Américas; es decir, que hace parte de la estrategia continental de los Estados Unidos. Sirve de base para fragatas y es el centro de control fluvial para los ríos Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La población civil sabe de sobra que es un centro de la guerra sucia en el occidente de Colombia, gestionado con apoyo directo de militares y marines de los Estados Unidos.

Los trazados de las vías como la Carretera Panamericana son acordados desde organismos internacionales y en función de empresas extractoras de recursos naturales. Al mismo tiempo que llegan las empresas mineras, en la frontera con Panamá han sido agredidas las comunidades de Cacarica, Bocas del Limón, y Nueva Esperanza de Dios. Se impone la siembra de palma africana.

Igual situación se vive en obras como la construcción de la vía al mar Ánimas-Nuquí. La carretera Murindó–Mutatá es parte del plan para saquear oro y molibdeno en una comunidad que no aprueba la minería destructiva.

Se embarca al país en la construcción de puertos marítimos y fluviales que, en último caso, solo van a beneficiar al gran capital. En la zona se construirán o ampliarán puertos en Bahía Cupica, Tribugá y Urabá. Igual proceso se hará con el puerto multimodal de Quibdó. Las prioridades sociales pasan a segundo plano.

Se diseñan obras con un costo ambiental y humano enorme, como el Proyecto Arquímedes, que comunicará el río Atrato con Nuquí a través de un puerto. Al mismo tiempo en todos los puertos y futuros puertos se hace «limpieza social». El ejemplo vivo es la ciudad de Buenaventura, donde la mayor cantidad de víctimas son jóvenes. Caen en masacres indiscriminadas que ya no son noticia. Líneas férreas, oleoductos, zonas industriales y nuevos proyectos turísticos se imponen a la fuerza.

Obras farónicas como el canal seco o uente interoceánico Atlántico-Pacífico, del gobierno colombiano, se hace sin indemnizar a los ciudadanos afectados: todos los poblados cercanos a la frontera con Panamá sufren la acción conjunta del Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia. El mismo relato de sangre lo confirman los habitantes de Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó y todos los poblados donde alguna vez se proyectó construir el Canal San Miguel. La persecución judicial a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, Chocó, coinciden con la usurpación o hurto de tierras tituladas a las comunidades afrodescendientes⁴³

⁴³ La investigación que han promovido las comunidades para defenderse de los expoliadores está bajo proceso penal con radicado 3856, Fiscalía 14 especializada en

para sembrarlas con palma aceitera. Dichas tierras son muy fértiles y despiertan la codicia de grandes empresarios palmicultores, miembros del paramilitarismo. Cuentan con la protección de miembros del Ejército y la Policía Nacional.

Afrodescendientes e indígenas han sido expulsados de los territorios donde se instalarán los proyectos Calima III y IV que consisten en la construcción de hidroeléctricas y trasvase del río Cauca. El mismo paquete de proyectos incluye la hidroeléctrica La Unión y otra hidroeléctrica en el municipio de Lloró.

Un caso paradigmático es el megaproyecto que permitirá construir las hidroeléctricas de Boroboro, Juradó y Murri. Cualquier lector que consulte en internet los nombres de esos topónimos encontrará referencias ajenas al progreso, desarrollo comunitario y avance social; casi todas reseñan hechos violentos contra la población civil.

Las poblaciones indígenas son excluidas de la gestión de los Parques Nacionales y áreas de Reserva Forestal. En zonas comunitarias se premia a sicarios de los escuadrones de la muerte con un trabajo estable, que a su vez es pagado con fondos europeos y que consiste en cuidar tierras expropiadas violentamente, creando para ello el programa de las Familias Guardabosques.

Ningún sector de la economía escapó a la acción depredadora de este plan tan siniestro. El Congreso terminó por aprobar todos los proyectos estatales diseñados en 1994 en el *Plan de Acción Forestal para Colombia y explotación industrial del recurso forestal, minero, pesquero, palma africana*. El colmo del cinismo se evidencia en la creación de

UNDH y DIH por delitos de desplazamiento forzado, usurpación de tierras, delitos ambientales y otros.

zonas de libre comercio: los hijos del presidente Uribe son beneficiarios de zonas recalificadas ilegalmente.

Los proyectos, nuevos escenarios económicos, políticos e históricos del entorno, se identificaron y trazaron desde 1984, cuando todo el mundo financiero empezó a hablar de la *nueva era del Pacífico*. El occidente colombiano era la zona más olvidada y se convirtió en la zona con mejor *prospectiva de desarrollo*.⁴⁴

El informe de Amnistía Internacional y la Cruz Roja sobre la región, emitido en 1997, resumió así la inequidad en la distribución de la riqueza: «*La guerra que padece hoy el Chocó no es casual, diríamos en su lugar que es causal. Cuando se ven todos los intereses nacionales e internacionales que se ciernen y proyectan sobre el Chocó, se entiende como por esos mismos intereses se viene asesinando y desplazando a los pobladores; se entiende y comprende cómo cuando empiezan a concentrarse las miradas económicas sobre el Chocó se va incrementando el cordón paramilitar.*»

La política de Estado reorganizaría la zona según las exigencias del capital internacional. Se implantarían los megaproyectos propuestos en la región a toda costa. Negros e indígenas seguirían marginados, negados, excluidos. «*En promedio, el 79.7% de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas, según cifras del DANE. En 1997 la esperanza de vida en la región era de 55 años. Desde 1996, esa esperanza es menor, pues los nativos son asesinados de manera masiva.*»

⁴⁴ Es la misma lógica financiera de los mercados de futuros: un grupo económico descubre o intuye que una región será próspera a mediano o largo plazo. Entonces centra sus capitales en el territorio. Cuando se consolida ese nicho económico la empresa y los capitales actúan con la ventaja de un monopolio y recogen sus ganancias. Para más información se pueden consultar las memorias del Encuentro "Colombia y Antioquia frente al Pacífico 2000".

Las políticas económicas han sido siempre expoliadoras y las sociales nulas. *«Por el Chocó han desfilado las más variadas expresiones de empresas que, con su presencia, han arrasado muchos de los ricos recursos de la región, desde la extracción minera en el San Juan, el Alto Atrato y el Andágueda, la extracción maderera en el bajo Atrato y Truandó, la tala de bosque y potrerización del alto San Juan, Acandí y Unguía, hasta la extracción genética hoy presente en todo el departamento. Pero nunca han hecho presencia políticas de inversión social que mejoren las condiciones de vida de los nativos.*

Por otro lado, lo que estas prácticas extractivas –permitidas y propiciadas por las políticas estatales de desarrollo– no consiguen destruir en términos socio-ambientales, es destruido por la construcción de obras de infraestructura, que buscan más una respuesta a las necesidades de adecuación de la región para el desarrollo del capital, que una respuesta a las necesidades de la población y al fortalecimiento de sus modelos culturales.

500 años de expoliación a negros e indígenas se prolongan con dragas que rompen ríos y montañas, motosierras que cortan bosques y personas, y lanchas que se llevan el botín. Las comunidades rechazan los modelos impuestos por el capital nacional e internacional, y proponen modelos alternativos que tienen en cuenta y respetan su mundo simbólico cultural.»⁴⁵

La agresión contra los habitantes del Atrato ha tenido continuidad en el tiempo y actualmente se enmarca en los megaproyectos de IIRSA (Iniciativa de Integración de Infraestructuras para la Región Sur América).

Así como el modelo paramilitar se experimentó en el Atrato con la Operación Génesis y luego se irradió a todo el país, los proyec-

⁴⁵ Fuente: Informe de Amnistía Internacional y Cruz Roja Internacional, 14 de marzo de 1997.

tos económicos siguieron la misma senda. Los proyectos del occidente de Colombia se enlazan con el diseño de la Red Fluvial Suramericana. Se unirá el río Orinoco con los ríos Negro, Amazonas, Madeira, Mamoré-Guaporé, Paraguay, Tiete, Paraná y de La Plata. El sistema permitirá el transporte desde Venezuela hasta Buenos Aires.

Suena a obra faraónica, pero se habilitará un sistema de comunicación desde el delta del Amazonas al océano Pacífico. La red enlaza el río Putumayo, corta los Andes en su punto más angosto y bajo, para llegar por autopistas al puerto de Tumaco (Nariño) en Colombia y llega a San Lorenzo (Esmeraldas) en Ecuador. El trazado más promocionado es el corredor logístico Belém-Manaos-Manta promovido directamente por el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva.

La ofensiva paramilitar en el sur de Colombia ha copado milimétricamente los ramales de este proyecto colosal. Tampoco escapan a la invasión paramilitar los desarrollos del proyecto en Ecuador. No es coincidencia la participación de Estados Unidos, Israel y los sicarios de Colombia en incursiones y bombardeos en zonas del norte de Ecuador.

Ante la comunidad internacional se justifican las acciones militares y paramilitares como parte de la lucha contra la guerrilla. Realmente, en esta zona, los combates frontales entre Ejército y guerrilla no ocurren tan a menudo. El desplazamiento y asesinato de población civil en el departamento de Nariño lo sufren los indígenas, afrodescendientes y campesinos. La población civil no combatiente sufre además fumigaciones con químicos similares al «agente naranja», usado por Estados Unidos en Vietnam.

Para los Estados Unidos el objetivo central es el dominio efectivo económico y militar de la zona llamada «de las 5 fronteras» (Co-

lombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela). Se trata de un enorme yacimiento de petróleo que comparten y explotan los cinco países. De ahí la importancia de los oleoductos transandinos a los puertos de Tumaco y Esmeraldas.

La carretera marginal de la selva, trazada desde el Perú hasta Surinam, sirve para otro objetivo estratégico: el control de la región donde nacen los grandes ríos que dan origen a la reserva de agua más importante del planeta en el Gran Amazonas. La ambición de las multinacionales de los Estados Unidos y Europa es controlar los ríos Caquetá, Putumayo, Apaporis y Vaupes en Colombia, Napo en Ecuador y Marañon y Ucayalli en Perú.

Las masacres y la masiva expropiación de los territorios ancestrales que han sufrido las comunidades indígenas durante 2009 en Perú, bajo el gobierno de Alan García, son la prueba de la exportación del modelo paramilitar colombiano y la aplicación de este plan de saqueo. El Gobierno de Venezuela escapa a esos planes y por ese motivo está en la mira de los depredadores.

Todo cuadra: IIRSA es un plan sanguinario del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La marcha triste de los desplazados y los refugiados se inicia en los despachos de los organismos financieros internacionales. La población no importa, es prescindible. Las materias primas son el objetivo. En las bolsas de valores de Estados Unidos y Europa los mercados de futuros reciben inversionistas que no quieren saber muchos detalles. Luego de la muerte, empresas multinacionales de Estados Unidos, Europa y, especialmente, de España están recibiendo las tierras expropiadas, gentilmente cedidas por el gobierno colombiano. A eso llaman progreso y buen ambiente de inversión.

Ante la prensa, todas las muertes son presentadas como disputas territoriales entre mafiosos y algunas guerrillas. La prensa

de España no cuenta lo que ocurre en Colombia. No es de buen recibo señalar los crímenes que cometen los mejores socios y anunciantes de las empresas de la prensa, la radio, la televisión e internet. No es bueno hurgar en los negocios de telefonía y el entretenimiento masivo. Lo más conveniente, en este caso, es que España se informe muy bien sobre... la última expulsión en Gran Hermano.

Impunidad y continuidad de los hechos violentos: 1997-2010

Pese a las denuncias que se han hecho sobre las masacres en la región del Atrato desde 1996, el panorama sigue igual. Es imposible hacer una relación completa de todos los abusos y tropelías que ha sufrido la comunidad del Atrato, y más aun cuando la matanza se extiende a toda Colombia. Se incluyen en este texto algunos hechos puntuales por su valor simbólico, por la cantidad de población afectada o por ser indicadores de un *modus operandi*.

De julio de 1997 a agosto de 1998 las FARC continuaron la ofensiva que habían iniciado en la primera parte de la Administración Samper. Atacaron en San Juanito-Meta (febrero de 1997), Juradó-Chocó (enero), Arauca (julio), Patascoy-Nariño (diciembre), El Billar-Caquetá (marzo de 1998), El Castillo-Meta (mayo) y Tamborales-Urabá (agosto). La liberación de cautivos, como acción unilateral o como fruto de negociaciones, ha estado en la agenda política desde entonces. La presión contra los mediadores, negociadores, entes neutrales, promotores de la vía política y defensores de Derechos Humanos ha sido constante. Incluso voceros de organismos internacionales como la ONU, ACNUR o CICR han sido objeto de agresiones, usurpación de símbolos, obstaculizados en su trabajo o simplemente invitados a irse de Colombia. Desde 1997 hasta 2010 es evidente el *modus operandi*: las masacres clonadas.

Hay patrones comunes en las masacres del Atrato y las que se realizaron en la costa norte colombiana: desplazamiento forzado de la población; usurpación del territorio; expolio de los bienes; legislación que acepta la prescripción de dominio; legaliza-

ción notarial y registro público del expolio. Se trata de un mismo sistema de terror.

Viendo los hechos en secuencia, es posible afirmar que el modelo de la Operación Génesis, que se aplicó a los habitantes del río Atrato desde 1997, se extendió al resto del país. Se reproducía en cada localidad, con la disciplina militar de verdaderos psicópatas organizados. Hecho el ensayo y vistos sus resultados, el modelo de arrasamiento se aplicó luego a otras regiones y goza del silencio de la prensa oficial en Colombia. Y del silencio de la prensa en los países con más inversión en territorio colombiano: Estados Unidos y España.

Desde 1997 al 2000 los paramilitares cometieron más de doscientas cincuenta masacres que dejaron mil setecientos muertos en otras regiones de Colombia. Entre las poblaciones atacadas estuvieron Mapiripán, El Aro, La Granja, El Salado y Chengue. En todas las acciones fue evidente que tenían pleno acceso y tránsito por todo el territorio nacional; nunca se toparon con la fuerza pública y atacaron prioritariamente a la población civil. Al mismo tiempo, la población pudo verificar la omisión del Estado para proteger a la ciudadanía. Por este motivo, los investigadores resaltan el valor del «testigo colectivo»: poblaciones campesinas que fueron obligadas a presenciar el suplicio y muerte de sus familiares y vecinos. El testimonio grupal agrega legitimidad y certidumbre y abre la puerta a indemnizaciones que permitan las reparaciones de alcance social porque los bienes dañados superan el simple marco individual.

Mientras los mandos militares hacían la vista gorda, la población fue obligada a presenciar un modelo de violencia, con rituales idénticos en el modo de aplicar la tortura y que incluían el desmembramiento y asesinato de los vecinos y seres queridos. Se empleó un modelo de acción militar con métodos sistematiza-

dos y protocolos. No se tortura de la misma manera en todo el mundo. Quienes enseñan a torturar aprenden unas técnicas y sus alumnos las aplican sistemáticamente. Los alumnos de la Escuela de las Américas no torturan del modo en que lo hicieron los franceses en Argelia o los argentinos durante la dictadura. En Colombia se aplicó un patrón muy claro, con parámetros muy constantes en todo el país.

12 de noviembre de 1997. Organizaciones sociales y víctimas del terrorismo de Estado en Colombia reciben copia de sumarios y expedientes judiciales sobre crímenes en los que están implicadas unidades de Boinas Verdes del Ejército de los Estados Unidos. Los funcionarios públicos deciden filtrar esta información porque descubren que hay redes paramilitares en el sistema judicial dedicados a la sustracción masiva de expedientes de los despachos judiciales, y a borrar las memorias informáticas que contienen el pasado judicial de todo tipo de delincuentes, como ocurrió en el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación Judicial) y en el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Los funcionarios deciden preservar y custodiar la información más valiosa. La información se multicopia, se entrega en depósito a personas honestas y aún se guarda con miras a un proceso judicial cuando de den las condiciones.

Enero de 1998. En Urabá un grupo paramilitar quemó con ácido a once campesinos para hacerlos confesar que eran guerrilleros y luego los asesinó.

3 de abril de 1998. Es asesinado, posiblemente por los paramilitares, Luis Fernando González Jaramillo, agente del CTI. Fernando González se había acercado al entorno de los escuadrones de la muerte y estaba compilando información sobre la participación de personal de los Estados Unidos en operaciones clandestinas en Colombia. Uno de sus seguimientos temáticos verificaba datos

sobre las reuniones secretas realizadas en la CONVIVIR–Papagayo⁴⁶, en el Urabá antioqueño.

Lo más sorprendente es que la asociación estaba gestionada por personas con graves antecedentes penales, que no fueron obstáculo para asignarles armas, equipos de comunicaciones y funciones de vigilancia local. La reunión que más inquietaba al investigador judicial se había hecho el 12 de junio de 1996 en el municipio de Carepa. La minuta, debidamente fechada, que fue entregada a la Fiscalía en Medellín, indica que asistieron «'El Alemán', C. Castaño, C. Arce, Diego, Rito Alejo (del Río Rojas) y 'asesores gringos'» (tal como aparece en el manuscrito).

En uno de los documentos que rescató Luis Fernando González Jaramillo se puede leer:

1. *Unidades a organizar. Operación Génesis.*
2. *Van a controlar la desembocadura del río Atrato, el Puerto de Turbo, Ungía, Bajo Atrato, Medio Atrato, Base en río Sucio, Base en Quibdó, Centro de Operaciones Papagayo.*⁴⁷
3. *Se recuentan tres grupos de operaciones: Quibdó, Riosucio y Turbo.*
4. *Unidades Especiales, Fuerzas Militares de Colombia y Brigada 17.*
5. *Plan B. Murindó–Vigía del Fuerte.*⁴⁸
6. *Incursiones en febrero o enero con Alemán apoyo militar.*

⁴⁶ La legalización de la CONVIVIR–Papagayo corresponde a la Resolución n° 42.360 de noviembre de 1996, pero venía funcionando de hecho hacía meses.

⁴⁷ Una hipótesis a considerar es que la «Base en Quibdó» fuera la unidad de agentes del DAS, instalada en el Hotel Malecón. Siempre quedará la pregunta de cómo es posible que el DAS no detectara esta base paramilitar en Quibdó. La única respuesta lógica es el trabajo conjunto entre los organismos oficiales de inteligencia y las AUC.

⁴⁸ Esta es la prueba de que las dos poblaciones fueron previstas como un bloque único y eje de trabajo.

7. Etapas:

- *Preparación con asesores gringos hasta enero de 1997.*
- *Preparación de la gente y unidades hasta finales de enero de 1997.*
- *Coordinación del plan y planeación en febrero de 1997.*

8. (...) *de todo el operativo por (...) grupos*

Hasta diciembre Papagayo organiza inteligencia en la zona.

Con las actas en mano y datos fiables, el investigador judicial tenía claro que las CONVIVIR, los mandos militares, los escuadrones de la muerte y los asesores norteamericanos habían echado a andar la Operación Génesis.

Además tenía abierto otro frente de trabajo: los agentes del CTI. Algunos de sus propios compañeros de trabajo realmente estaban bajo las órdenes de los narcotraficantes y escuadrones de la muerte. Este fenómeno ocurrió en todo el país, en todos los organismos de inteligencia del Estado. Aún así, quedan funcionarios honestos que salvan parte de la información antes de que sus compañeros de trabajo destruyan o desaparezcan los expedientes judiciales y los archivos informatizados.

9 de abril de 1998. Fueron destituidos los generales Rito Alejo del Río Rojas, Comandante de la Brigada XVII del Ejército y el general Millán.

13 de julio de 1998. Es amenazado de muerte, por los militares, el sacerdote Javier Giraldo Moreno, Presidente de Justicia y Paz. Entre las entidades de Derechos Humanos en Colombia, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz goza de gran prestigio por la seriedad de sus documentos, sin embargo, el Ejército no vaciló en allanar la sede de la Comisión como parte de una escalada oficial contra grupos defensores de Derechos Humanos.

7 de agosto de 1998. Termina el mandato del presidente Samper y comienza el de Andrés Pastrana. Se inicia un nuevo proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, que finalmente fracasa. La situación de Derechos Humanos en el río Atrato sigue igual. Se mata a campesinos, afrodescendientes, indígenas y líderes comunitarios con total impunidad. Durante la Administración Pastrana, mientras se realizaban las negociaciones, el crecimiento de las agrupaciones paramilitares, y en particular de las AUC y el Bloque Central Bolívar, fue imparable.

Octubre de 1998. Al revisar las listas de ascensos, entre los nuevos generales y coroneles se observa que los principales mandos señalados por violaciones de los Derechos Humanos continúan su carrera militar sin obstáculos, pese a que acumulan procesos penales por múltiples delitos.

18 de noviembre de 1999. Es asesinado en Lloró (Chocó) el misionero español Miguel Ángel Quiroga Gaona. A raíz del crimen la Iglesia señala que desde 1980 la lista de sacerdotes asesinados en Colombia asciende a cuarenta. El mismo día, en Quibdó, las AUC matan a Jorge Luis Mazo, sacerdote colombiano, párroco de Bellavista–Bojayá y al cooperante español Iñigo Eguiluz Tellería de la ONG Paz para el Tercer Mundo (PTM). Ambos venían de atender a la población desplazada de Murindó.

Domingo 27 de febrero del 2000. La masacre de Mapiripán es llevada a debate en el Congreso de los Estados Unidos. Hay Boinas Verdes implicados. El debate se presenta con muy bajo perfil en la prensa de Colombia. El periodista Ignacio Gómez Giraldo es de los pocos que recoge y procesa la información. Hace un seguimiento informativo sobre la masacre, que posteriormente se publica en el diario *El Espectador* el 27 de febrero del 2000. En el artículo se cita la responsabilidad del Coronel Lino Sánchez: *«la Fiscalía lo acusa de*

planear la masacre de Mapiripán en las mismas fechas en que hacía parte de un ejercicio de planeación militar con los Boinas Verdes...».

*De la Operación Génesis a la Estrategia Génesis**

Cito de nuevo la masacre de Mapiripán, porque es evidente la continuidad con la Operación Génesis. El modelo de la Operación Génesis se aplica en adelante como Estrategia Génesis a escala nacional. El experimento mortal, realizado contra la población civil del Atrato, se extiende a otras regiones de Colombia. Mapiripán fue el segundo escalón en la expansión masiva, tolerada y abierta de los escuadrones de la muerte. Anteriormente, el Ejército colombiano hacía un esfuerzo para disimular su coordinación con los paramilitares, pero desde 1996 hasta la fecha de publicación de este libro los escuadrones de la muerte no se molestaron en ocultar sus relaciones con el Estado.

El debate realizado por el Comité de Apropiaciones del Senado de los Estados Unidos, el 21 de febrero del año 2000, daría para otro libro delator de la democracia genocida en Colombia. Participaron en el mismo los senadores Patrick Leahy, Edward Kennedy y Jackson Jr. Se recordaba, en el Comité, la norma que prohíbe a los militares de los Estados Unidos entrenar a violadores de los Derechos Humanos. Los senadores pidieron hacer *«un riguroso escrutinio de los 'entrenables' para que el Pentágono no termine ayudando a los autores de crímenes de lesa humanidad, como ya ocurrió en Colombia con la masacre de Mapiripán, el 20 de julio de 1997»*.

Se confirmaban las conclusiones contenidas en el trabajo del equipo de periodismo investigativo de *El Espectador*. El diario hizo un acumulado documental importante sobre la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército, construida con apoyo de las Fuerzas

* Consultar el mapa de la página 189.

Especiales de los Estados Unidos en la Isla Barrancón, en medio del río Guaviare. A poca distancia de esta base, cuarenta y nueve vecinos de Mapiripán fueron descuartizados en julio de 1997. *«Los Boinas Verdes tenían al menos tres años de experiencia en Barrancón, y durante dos meses [...] habían estado en la isla haciendo ejercicios de planeación militar con la tropa del Coronel Lino Sánchez, hoy acusado por la Fiscalía de planear con Carlos Castaño la masacre de Mapiripán».*⁴⁹

El senador Patrick Leheahy, el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo y el equipo de periodismo investigativo de *El Espectador* analizaron miles de páginas sobre lo ocurrido en San José del Guaviare, Mapiripán y Bogotá. Incluyeron las decisiones que, al respecto, tomó el Gobierno de los Estados Unidos. El resumen es contundente: *«El 7º Grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos (Boinas Verdes) realizó un entrenamiento en 'Planeación Militar' con la tropa del coronel Lino Sánchez, mientras éste planeaba la decapitación masiva de civiles en Mapiripán. El objetivo era erradicar a las FARC...».*

En otro apartado de los documentos entregados al Congreso de los Estados Unidos se relata que, en junio y agosto de 1997, se realizaron nueve despliegues de Fuerzas Especiales de EE.UU. en Colombia. Nada extraño, pues el entrenamiento sistemático de paramilitares se remonta a 1962. La afirmación se basa en la documentación acumulada por Carlos Salinas, experto de Amnistía Internacional en Washington (año 2000). Tres de los nueve despliegues de las Fuerzas Especiales coinciden en el tiempo con las masacres del Atrato y Mapiripán. No se trata solamente de que los primeros investigadores judiciales que entraron a Mapiripán, luego de las masacres, se toparan con los militares norteamericanos. Las técnicas de combate, enseñadas por los Boinas Verdes en la Base Antinarcóticos de Barrancón a los policías y militares

⁴⁹ *El Espectador*, 27 de febrero de 2000.

colombianos coinciden, en gran medida, con la operativa de combate de los escuadrones de la muerte.

Hay un dato que no se explicó suficientemente en la prensa nacional: los entrenamientos de Combate Riverino o Combate Riveroño que se daban en la base de Barrancón. Se trata de una maniobra de combate ensayada por la Infantería de Marina para copar posiciones hostiles en los ríos y sus riveras. Las referencias sobre el tema describen la distancia y formación de las lanchas, las direcciones del fuego, las secuencias de aproximación, etc. Las descripciones que hemos recogido de los habitantes de Vigía y Murindó sobre los hechos del 22 y 23 de mayo de 1997 y las descripciones del entrenamiento en Barrancón coinciden. *«Más de cien hombres armados con fusiles y ametralladoras ingresaron en seis pangas por el río Atrato».* *«Eso parecía una película, el orden en que venían, el modo en que rafagueaban las orillas desde las lanchas».* Si los vecinos de Vigía y Murindó describieran públicamente lo que vieron, si esa información se contrastara con las maniobras ensayadas en Barrancón todos quedaríamos asombrados por las extremas coincidencias.

La información posterior sobre Mapiripán en la prensa, se redactó sin recapitular el debate realizado en el Congreso de los EE.UU. Esa memoria es, a todas luces, inconveniente para el Estado ya que dejaría en evidencia la profunda relación entre militares estadounidenses, los colombianos y los escuadrones de la muerte.

25 Marzo del 2000. Las FARC entran a Vigía del Fuerte y destruyen el Comando de Policía. Mueren veintiún policías. Mueren también una mujer y dos niños de una casa vecina. Cuando tienen el control del pueblo ejecutan a los colaboradores de los paramilitares, el alcalde incluido. De esa manera las FARC retornan a la región del Medio Atrato y toman las poblaciones de Vigía y Bellavista.

El pacto de Ralito

23 de julio de 2001. En Santa Fe de Ralito (Córdoba) se produjo la *refundación de Colombia* por los paramilitares. Ocurrió durante la mayor cumbre de mafiosos, escuadrones de la muerte, empresarios, militares, políticos y funcionarios públicos en la historia nacional. Se admitió como válida una declaración, que aceptaba el mandato de la delincuencia organizada para trazar el destino de Colombia en los próximos años. Tal aberración institucional fue conocida como *El pacto de Ralito*. Custodiados por quince mil delincuentes, Salvatore Mancuso, Jefe del Estado Mayor de las AUC; «Don Berna», Inspector General de las AUC y «Jorge 40», Comandante del Bloque Norte de esa organización, acordaron «*refundar a Colombia, nuestra patria*» y hacer «*un nuevo contrato social*». Los gestores y firmantes de la declaración eran personajes muy cercanos al candidato presidencial Álvaro Uribe (que gracias a este pacto inició su gobierno el 7 de agosto de 2002) y a su campaña política, basada en el mensaje de contrainsurgencia: la tesis de que la oposición armada podía ser derrotada mediante una campaña militar de tierra arrasada.

Entre 1974 y 2002 Colombia es gobernada por amigos del narcotráfico. Pero desde 2002 hasta la fecha la gobierna directamente el narcotráfico.

Los desarrollos del Plan Colombia, el sistema de guerra sucia o guerra total, minaron todas las opciones políticas para cerrar el conflicto interno colombiano. Los documentos se fueron desvelando desde enero de 2007 por diferentes vías: confesiones de los narcotraficantes para obtener reducción de penas; procesos adelantados por funcionarios judiciales honestos; disputas entre bandas de paramilitares; mafiosos a quienes no se les habían cumplido las promesas de impunidad; etc. Por contraste, el aporte directo de la prensa sólo ha sido muy posterior al pacto. La prensa, por sí misma, no aportó información valiosa que avisara sobre la magnitud de los hechos.

Febrero de 2002. Se rompen los acuerdos entre el Gobierno y las FARC. El Ejército inicia la Operación Tanathos, destinada a recuperar el control de la zona de distensión, ubicada en cuatro municipios del Meta y uno del Caquetá.

Entre 2002 y 2008, iseis años!, casi ningún medio nacional descubrió o denunció la existencia del pacto que regía el país. Los pocos medios y periodistas que publicaron algo pagaron cara su osadía. Inicialmente se desvelaron datos de los políticos de la costa norte colombiana. Luego la información se fue ampliando hasta descubrir que en *El pacto de Ralito* estaba comprometida la plana mayor de la campaña uribista. Había datos sobre Álvaro Uribe Vélez y sus alianzas con criminales de guerra mucho antes de su mandato. Por ejemplo, la vinculación de paramilitares a las cooperativas CONVIVIR adoptadas por su administración; pero las confirmaciones más claras ocurrieron durante las declaraciones de los mandos paramilitares que se emitieron por televisión.

En la crónica de la periodista Jimena Duzán, columnista del diario *El Tiempo*, se detalla que un grupo de cuatro senadores, siete representantes, dos gobernadores, cinco alcaldes y otros personajes –en total treinta y dos políticos de la Costa– se reunió con cuatro jefes paramilitares, sindicados de narcotráfico y masacres. El grupo firmó el documento «confidencial y secreto» que «refundaría» Colombia. Por cinco años y medio mantienen oculto lo sucedido. Cuando, pasado ese tiempo, uno de los asesinos hace público el pacto, los políticos alegan que lo firmaron «obligados». La alianza incluye a conservadores, liberales y miembros de otros grupos como Cambio Radical. Políticos y paramilitares actúan de igual manera en otras regiones, según los datos recogidos por la Corte y la Fiscalía.

El *proceso* 8.000

Existía un precedente de señalamiento al narcotráfico. Monseñor Pedro Rubiano, jerarca de la Iglesia Católica, le preguntó a Ernesto Samper si no había visto todo el dinero que los narcotraficantes habían invertido en su campaña. A la pregunta retórica, el sacerdote respondía irónicamente a Samper que es imposible no ver un elefante cuando entra a tu casa y se pasea en la sala, frente a tu televisor. Desde entonces, en Colombia, hablar de elefantes es hablar de narcotráfico en la política. El escándalo de la campaña presidencial de Ernesto Samper, financiada por el narcotráfico, fue conocido como *El proceso* 8.000. Casi todos los miembros del Congreso habían sido financiados por los narcotraficantes para obtener sus curules,⁵⁰ como se había comprobado mediante las investigaciones del coronel Velásquez. El Congreso de la República, en tiempos de Samper, había sido pagado con dinero de los cárteles de la droga.

Durante 2007 una pregunta idéntica fue dirigida al presidente Uribe: si vio o no el «elefante de la parapolítica». Es decir, si sabía o no del acuerdo entre los narcotraficantes, sus escuadrones de la muerte y la clase política. En el caso del *pacto de Ralito* era un poco diferente. El presidente Uribe, más que ignorar el elefante de la parapolítica, tenía su propio criadero de elefantes en las tierras de Córdoba y Urabá.

De las Autodefensas de Córdoba y Urabá, desde 1997, se desdoblaron Bloques hacia otras regiones del país: Bananero, Calima, Sinú, San Jorge, Sanidad, Catatumbo y Mineros. De ellos, a su vez, salieron docenas de organizaciones sicariales que se extendieron a toda Colombia. En los años siguientes, los ríos se llenaron de cuerpos destrozados. Como resultado de las denuncias, un ter-

⁵⁰ Escaños.

cio del Congreso, el grupo parlamentario de Uribe, está sometido a investigaciones penales por relaciones directas con narcotraficantes y escuadrones de la muerte. Los documentos firmados en Santa Fe de Ralito relacionan a cincuenta jefes políticos, amigos de Uribe. Eran sus compañeros, sus copartidarios, que luego resultaron presos, prófugos, sindicados o mencionados en crímenes graves. Embajadores, ministros, dirigentes del partido, toda la franja uribista aparece en procesos penales.

Vale la pena releer con detenimiento las crónicas de Jimena Duán publicadas en enero de 2007. Describen las horas más tristes de la «democracia» colombiana. La periodista relata que, en ese corto período de destape informativo, se desnudó a los ministros y parlamentarios, aliados del Gobierno, empeñados en encubrir y minimizar la gravedad de la corrupción al más alto nivel de la administración del Estado. Los datos salieron a la luz cuando se contrastó la información acumulada en ordenadores de sicarios al servicio del Gobierno.

Un caso especial fue el del jefe paramilitar «Jorge 40». Se esclareció, por careos judiciales, el secuestro de políticos y amenazas a regiones enteras. Hubo confesiones sobre violencia y amenazas a funcionarios públicos, extorsiones y desvío de dinero público inicialmente destinado a la salud pública y a la educación, que terminó asignado para cubrir la nómina de sicarios al servicio de los escuadrones de la muerte. De ahí la quiebra de hospitales y el cierre de universidades.

Un equipo judicial de la Corte Suprema de Justicia verificó que el criminal «Jorge 40» manejaba todo en el departamento de El Cesar. Ellos decidían qué clase de políticos debían renunciar a sus cargos y quienes estarían en las listas electorales.

El Gobierno de Uribe pone todos los obstáculos al proceso y busca la judicialización de los mismos magistrados que investigan las dudosas relaciones del Presidente.

En su declaración, el mafioso colombo-italiano Salvatore Mancuso confesó que había matado a trescientas treinta y seis personas. Ubicó en mapas los sitios donde se cometieron las masacres, las fechas aproximadas y los nombres de las víctimas. Confesó haber ordenado el secuestro y muerte del indígena embera Kimy Pernía, en Tierraaalta. Mancuso relató una a una sus masacres; el reclutamiento y el entrenamiento de sus sicarios; el apoyo que tuvo para conseguir armas y equipos; cómo los transportó y usó su helicóptero personal para surtirlos de municiones y comida para que siguieran matando. Confesó su relación directa en la masacre de Mapiripán, (por la cual el Gobierno ya había admitido ante la Corte Interamericana de Justicia su responsabilidad). El paramilitar aceptó su responsabilidad en las masacres de Puerto Alvira, El Salado, Macayepo, La Gabarra, El Aro y la Granja. Las acciones paramilitares se hacían durante días, semanas y meses, con total omisión de las autoridades, que nunca intervinieron para proteger a la población civil.

Salvatore Mancuso no señala en su confesión el sitio de las fosas comunes porque la costumbre era desmembrar los cuerpos de los campesinos y arrojarlos a los ríos. Hizo silencio deliberado sobre temas que conocía a fondo: la estructura de los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia y las relaciones con el Gobierno Central, con toda la clase política, el presidente Uribe y las Fuerzas Armadas. Acusó a militares que ya estaban muertos y, en suma, mencionó a personas que ya habían sido descubiertas y a otras que no podían ser judicializadas.

Mancuso, con sus trescientos treinta y seis asesinatos reconocidos, sólo pagará ocho años de prisión. Dicho de otro modo,

un año de cárcel por cada cuarenta y dos muertos. Parte de la pena se le redujo por el tiempo que estuvo reunido en Santa Fe de Ralito, negociando con el Gobierno el nuevo modelo del Estado colombiano. Mientras se desarrollaba *El pacto de Ralito*, el narcotráfico infiltró el sistema de inteligencia militar de Colombia, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y algunas seccionales de la Fiscalía. El DAS, que había sido creado con asesoramiento y modelos operativos de la CIA, había caído en manos del narcotráfico. Mientras el jefe de informática del DAS se había dedicado a borrar los antecedentes penales de narcotraficantes, su jefe tramaba el fraude electoral, orquestado por los paramilitares en el año 2002.

El DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).

Hay muchas cosas graves que Colombia ignora sobre lo que ocurrió en el DAS. Se sabe, por ejemplo, que había funcionarios públicos dedicados a elaborar listas negras de personas que luego fueron asesinadas por los paramilitares, como la lista de profesores de la Universidad del Atlántico. Los profesores de la lista ya están muertos o exiliados y la Universidad está en manos de los paramilitares.⁵¹ Igual proceso de exterminio está en curso contra la Universidad de Antioquia. Ojalá podamos impedirlo.

Se confirmó el desvío de fondos públicos y contratos del DAS que iban a los jefes de las Autodefensas. Pero lo que no se ha difundido en Colombia es la importancia estratégica, en toda América Latina, que tiene la información procesada por el DAS. La entidad es comparable al CNI (Centro Nacional de Inteligencia) de España. El DAS participa con otros organismos en la recolección, procesamiento, tratamiento y circulación reservada de datos estra-

⁵¹ Según datos recogidos por la Delegación Asturiana en 2007.

tégicos sobre los países vecinos. Su dirección está en capacidad de acceder a los datos sobre las capacidades militares de cada país del entorno. En teoría, el director puede acceder a los datos sobre tropa, armamento, despliegue, terreno, doctrinas militares, maniobras, táctica, medidas y contramedidas de cada ejército vecino. Prioritariamente, el DAS acumula datos sobre Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Brasil y reúne, además, datos sobre cada país de América Central, porque Colombia tiene allí los territorios insulares de San Andrés, Providencia y otras islas menores. Dado el conflicto territorial con Nicaragua, el país tiene un expediente propio en las pesquisas oficiales. En otro nivel de prioridades está la recolección de datos sobre el resto de países latinoamericanos no fronterizos.

Ocurre que ese acumulado de información es crucial para los narcotraficantes. Entre los datos sobre las capacidades estratégicas para la defensa de cada país vecino se incluyen los radares, sus frecuencias, sus puntos ciegos, sus potencias, sus vectores y sus tiempos de respuesta y mantenimiento. Y estos datos exactos son los que permiten trazar las nuevas rutas para el narcotráfico. De ahí el empeño de los paramilitares por infiltrar la dirección del DAS. Y a ese cargo solamente se llega por vía presidencial.

Otro tema relacionado con la infiltración de los narcotraficantes en el DAS son las incursiones paramilitares en Venezuela, contra el Gobierno legítimo de Hugo Chávez.

En medio del escándalo de la parapolítica, el Gobierno ataca a la Corte Suprema de Justicia y pretende influir en la elección del equipo que va a procesar a los políticos colombianos. La confesión de Salvatore Mancuso destapó la responsabilidad del general Alfonso Manosalva en las masacres de Ituango (El Aro y la Granja), mientras era Comandante de la IV Brigada en Medellín. A su vez quedó verificado por la justicia que el coronel Jorge Eliécer

Plazas, oficial de inteligencia en Urabá, procesaba listas negras. Es decir nombres de futuras víctimas. Se documentó que el general Quiñónez facilitó la entrada de paramilitares a El Salado, donde se cometió la masacre de treinta campesinos, asesinados a golpes. Este baño de sangre se orquestó con el apoyo del treinta y cinco por ciento del Congreso de los colombianos, la elite empresarial, el alto mando militar y la prensa.

Mancuso, «Jorge 40», «Don Berna», «Ramón Isaza» y otros cincuenta jefes paramilitares tuvieron en sus manos el destino de Colombia. Decidieron el modelo cultural y lo que se podía decir. Decidieron a quién debían callar. *El pacto de Ralito* fue altamente documentado por el diario *El Tiempo* y la revista *Cambio* en enero de 2007.

Vigía del Fuerte de nuevo

21 de abril de 2002. Siete lanchas de alta cilindrada, con unos doscientos cincuenta sicarios, llegaron a Bellavista y Vigía del Fuerte procedentes de Turbo. Cruzaron todos los retenes militares y de policía y recibieron apoyo de la base paramilitar ubicada en La Balsita, terreno usurpado a la Comunidad de Cacarica. Se identificaron como miembros del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

Entre el 21 y el 30 de abril aterrizaron en la pista de Vigía varias avionetas, una de ellas identificada con las siglas AUC. En una región con presencia del Ejército de Colombia, las avionetas podían aterrizar en aeropuertos públicos mientras llevaban logos de los escuadrones de la muerte. Tenían los cielos y los aeropuertos abiertos. A bordo de las aeronaves venían los jefes paramilitares Wilson Chaverra, ex alcalde de Vigía; «El Brujo», comandante paramilitar de Quibdó y Freddy Rendón, alias «El Alemán», jefe del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC.

Wilson Chaverra volvía a su pueblo en uniforme de camuflaje, como jefe paramilitar. Se presentó armado, a cara descubierta y fue reconocido por los habitantes. Era el retorno paramilitar a Vigía del Fuerte, por agua y aire. Los paramilitares se planteaban retomar el control del Atrato, que habían perdido desde marzo de 2000. La Diócesis de Quibdó alertó sobre esta situación al personal de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo. La Diócesis y las asociaciones campesinas emitieron un comunicado público, señalando el peligro que representa para la población civil de Bellavista y Vigía la presencia de dos actores armados en esa región e interpellaron al Gobierno Nacional para que tomara cartas en el asunto.

A su vez, la comunidad civil de Bellavista presentó al jefe paramilitar «Camilo» un reglamento interno, como han hecho todos los caseríos de la ACIA (Asociación Campesina Integral del Atrato), anunciando que ningún grupo armado era bienvenido. «Camilo» respondió a la comunidad que habían llegado a *«limpiar el Atrato como lo hicimos en Urabá»*. Los paramilitares se establecieron en Vigía y Bellavista, mientras la guerrilla de las FARC seguía los hechos desde la zona rural. Durante los días siguientes los paramilitares iniciaron la intimidación de la comunidad con requisas, amenazas y exhibición de armas.

22 de abril del 2002. Con base en la alerta de la Diócesis, Naciones Unidas emitió una nueva alerta para avisar al Gobierno sobre la situación del Medio Atrato a causa de la presión de grupos armados ilegales. Naciones Unidas pide al Estado que intervenga.

23 de abril. La OACNUDH (Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) expresó al gobierno colombiano su *preocupación* por la incursión paramilitar y lo instó a tomar medidas para proteger a los civiles.

24 de abril. La Defensoría del Pueblo se suma al aviso de *alerta temprana*⁵² con carácter de urgencia. Las comunidades en Bojayá y Vigía del Fuerte se encontraban en grave riesgo.

24-26 de abril. Al pedido urgente de Naciones Unidas se unen la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Todos respaldan la alerta temprana emitida por la Diócesis Católica de Quibdó e instan al Estado a que proteja a la población.

25 de abril. A las dos de la tarde el Frente 34 de las FARC, del Bloque José María Córdoba, retiene en el río Arquía a la embarcación «Arca de Noé». La guerrilla requisó e incautó la carga, consistente en ayuda humanitaria y alimentos para las tiendas comunitarias del Medio Atrato. Según la guerrilla, las provisiones podían ir a parar a manos de los paramilitares. La Asociación Campesina del Atrato condena la acción de las FARC por el robo de la ayuda humanitaria.

30 de abril del 2002. La Comunidad invita al comandante paramilitar «Camilo» a una reunión para dar lectura del reglamento interno de la Comunidad de Bellavista, donde se exige el retiro de los efectivos paramilitares del casco urbano. Éste responde que con comunicados así no iban a resolver el problema de la guerrilla.

1 de mayo del 2002. Las FARC entran en Vigía del Fuerte y se inicia el tiroteo. El grupo más grande de paramilitares permanece en Bellavista. Se desata el combate a orillas del río, con ataques desde tierra a las lanchas de paramilitares. «Camilo» es herido y mue-

⁵²Comunicación urgente expedida por un observatorio de Derechos Humanos. Informa sobre las situaciones de extremo peligro que afectan a la población civil más vulnerable. Cuando los organismos convocados convalidan la información actúan inmediatamente y salvan vidas.

re en el Centro de Salud. Algunos habitantes de Bellavista, unas trescientas personas, buscan refugio en la iglesia, ya que era de los pocos edificios de ladrillo, supuestamente sólidos y protectores en caso de combates. Permanecen en la iglesia veintisiete horas, resguardadas por un portón de madera y su fe en el Derecho Internacional Humanitario, que ordena a los combatientes respetar los lugares de culto.

2 de mayo. Las FARC completan el control de Vigía, cruzan el río y toman Bellavista de Bojayá. Combaten a los paramilitares que se encuentran en medio de los civiles. Es entonces cuando ciento diecinueve personas mueren en la iglesia por una carga explosiva que lanza, irresponsablemente, un guerrillero. Entre las víctimas hay cuarenta y cuatro niños.

El 2 de mayo se reinician los combates. Las FARC penetran por el barrio Pueblo Nuevo y dicen a los pobladores: «*váyanse de aquí que esto va a continuar*». Más de doscientas cincuenta personas están refugiadas en la capilla, hasta donde llegan los paramilitares huyendo de la ofensiva guerrillera.

Según la Diócesis de Quibdó:

«Los paramilitares se apostan en el centro del pueblo, refugiándose alrededor de la capilla, el Centro de Salud, frente y debajo de la casa de las Hermanas Agustinas Misioneras. Asimismo, piden que los dejen entrar tanto a la capilla como a la casa de las hermanas, cosa que les fue negada. Los paramilitares se atrincheran debajo de la casa de las hermanas y por detrás y al costado de la capilla.

Una mujer, que se encuentra en la calle, ve cuando varios guerrilleros de las FARC preparan las pipetas cargadas con explosivos; les suplica que no las tiren, que en la capilla hay población civil, pero ellos respondieron 'nosotros sabemos cómo hacer esto'.

A las diez quince a. m., guerrilleros de las FARC lanzan la pipeta explosiva, que cae en el centro del altar de la capilla matando inmediatamente a ciento dos civiles, en su mayoría niños y jóvenes, y a uno de los paramilitares atrincherados en el costado de la capilla. Muchas personas, entre ellos el sacerdote Janeiro Jiménez, se dispersan. Hay desaparecidos. Por acción de la pipeta los paramilitares exigen la entrada a la casa de las hermanas, petición que les fue negada.

Las FARC siguen avanzando. El panorama es dantesco con las decenas y decenas de mutilados, gritos desgarradores de heridos con miembros amputados frente a la impotencia de los que corrían para no ser también asesinados. Muchos de estos heridos se arrastran hasta la casa de las hermanas, ya desocupada, donde posteriormente mueren dos de ellos.»⁵³

Prosigue el relato de la Diócesis de Quibdó: «setecientas personas, aproximadamente, huyen hacia la cabecera del pueblo y, en medio de las balas, deciden cruzar. Dirigidos por los sacerdotes y hermanas organizan una marcha a campo abierto gritando: '¡somos civiles! ¿Qué queremos? Respeto a la población civil'. Así logran llegar hasta el puerto y en las diferentes embarcaciones allí atracadas cruzan a Vigía del Fuerte. Desde el río observan los estragos que hacen en casas dos pipetas más que lanzan las FARC. En la

⁵³Durante su confesión, en mayo de 2008, «El Alemán» aceptó parte de responsabilidad en la masacre de Bojayá. Los paramilitares se apostaron y combatieron en un bosque, al lado de la iglesia. Se trata de información nueva pues, hasta la confesión de «El Alemán», toda la responsabilidad sobre el lanzamiento de la pipeta recayó en las FARC. La prensa señaló la acción como un acto terrorista, un ataque deliberado a la población civil, cuando los datos dejan claro que la intención de las FARC era atacar al grupo paramilitar. Pero con un arma tan poco convencional y fiable cualquier cosa podía ocurrir.

Pese a esta aclaración, queda para ambos grupos el señalamiento por la irresponsabilidad de sostener combates en medio de población civil.

tarde los combates continúan en la montaña, sin saberse aún si afectaron a los pobladores que huyeron hacia allá».

3 de mayo. El Comandante de las FARC avisa en la casa cural de Vigía que ya han tomado Bellavista y que pueden cruzar a recoger a sus muertos y enseres. Se prepara la comisión, pero varios pobladores aterrorizados no tienen fuerzas para cruzar e identificar a sus familiares asesinados. Siguen los combates en la montaña cenagosa. Sale una comisión de Vigía a buscar desaparecidos en la Ciénaga. Encuentran a treinta personas.

4 de mayo. Se reportan noventa y cinco heridos, treinta de ellos de gravedad, a la espera de ser remitidos a Medellín por el Programa Aéreo de Salud de la Gobernación de Antioquia. A las diez de la mañana se informa desde Medellín que el helicóptero ha salido. A los cuarenta minutos aparece un helicóptero civil, por lo que las personas se acercan a la pista. Pero desde el interior de éste se abre fuego sobre ellos, sin que resulten personas afectadas. Cinco minutos más tarde aterriza el helicóptero del Programa de Salud. Continúan las labores de búsqueda de los desaparecidos y el reconocimiento de cadáveres. Los combates no cesan, pero ahora suceden en la montaña. Llega la comisión humanitaria exploratoria de la Diócesis de Quibdó. En la noche, un avión fantasma del Ejército ametralla y bombardea la ribera del Atrato, muy cerca de las poblaciones.

5 de mayo. La Diócesis de Quibdó⁵⁴ envía una Comisión de Ayuda Humanitaria y otra encabezada por el Defensor del Pueblo Departamental, Alberto Boder Valencia. En documentos recogidos por la Diócesis se relata lo siguiente:

⁵⁴ La Diócesis recoge todos los relatos, fotografías y material complementario en www.disaster-info.net/desplazados/informes

«Se disponen comisiones para registrar y enterrar a las víctimas, como para buscar desaparecidos en la ciénaga, entre ellos al sacerdote Janeiro Jiménez. Esta última comisión fue ametrallada por un helicóptero, sin consecuencias que lamentar. No hay presencia de estamentos judiciales que se encarguen de esta responsabilidad legal. Al medio día tres aviones caza Mirage del Ejército sobrevuelan las poblaciones y causan más terror. La población y el equipo misionero producen un comunicado para leerlo a las FARC. En él plantean al grupo guerrillero que se retire del casco urbano, solicitud que no fue aceptada. Aparece el sacerdote Janeiro en precarias condiciones de salud después de estar perdido tres días en la selva.»

6 de mayo. La Comisión Humanitaria, acompañada por el Defensor Departamental, miembros del equipo misionero y varios heridos llegan a Quibdó. El ejército continúa sobrevolando la zona. La comisión de periodistas afiliados a medios nacionales e internacionales, que se dirigía a las poblaciones de Bellavista y Vigía, es obligada a retroceder por el Comandante del Batallón Manosalva de Quibdó, el coronel Pulido. Según éste, el Ejército *«ante los continuos bombardeos que están realizando los aviones Arpía y Fantasma sobre toda embarcación movilizada sobre el río Atrato, no puede garantizar la seguridad de los periodistas»*. A las seis de la tarde se registran bombardeos en el corregimiento de Napipí, a una hora de Bellavista. Como resultado de estas operaciones aéreas en Napipí, hay una campesina muerta y dos personas más heridas.

5 y 6 de mayo. Se presentaron «operaciones de ablandamiento» por parte de la Fuerza Aérea colombiana, con ametrallamientos desde el avión Fantasma, bombardeos desde los aviones caza Mirage y los helicópteros artillados. Fruto de estas operaciones se registran perforaciones en las paredes y en los techos.

7 de mayo. En horas de la noche un buque de la Infantería de Marina llega a Vigía del Fuerte.

8 de mayo del 2002. Llegan las tropas del Batallón Alfonso Manosalva Flórez de Quibdó. El Obispo de Quibdó, Monseñor Fidel Cadavid, y la Defensoría del Pueblo sostienen una reunión con el Mayor de la Infantería de Marina al mando para que se acaten las normas del DIH y sus tropas no se ubiquen junto a la población civil. También para que se respeten las comisiones y ayudas humanitarias. Ante las peticiones expresadas, el Mayor sostiene que debe ser el propio general Montoya, de la IV Brigada de Medellín, quien debe disponer tales asuntos.

La solicitud no es acatada. Se omiten las normas establecidas por el Derecho Internacional Humanitario, observándose la presencia de la Fuerza Pública en los planteles educativos o las viviendas abandonadas por la comunidad, así como el hurto de alimentos. Inmediatamente después se produce el arribo de las tropas del Ejército y la Armada Nacional a los municipios de Vigía y Bojayá. También se constata la salida de paramilitares sobrevivientes de los enfrentamientos. Es así como pobladores de la Comunidad de Bellavista, que se encontraban en las tareas de remoción de escombros y arreglo de sus casas, fueron abordados por estas personas, que se identificaron como paramilitares y les solicitaron ropa y embarcaciones para cruzar personal herido a Vigía. Por tal motivo son saqueadas las viviendas en busca de ropa de civil. Luego de pasar a los paramilitares heridos, el personal médico del hospital de Vigía es obligado a atenderles.

Aunque el Ejército y la Armada son conocedores de la presencia de los paramilitares en las comunidades, se muestran condescendientes con su presencia. Incluso la comunidad identifica a varios paramilitares uniformados entre las tropas del Ejército.

Los helicópteros en que se movilizan las tropas sirven de transporte a los periodistas, a los que con anterioridad se les había impedido el paso por el río. Permanecen cuatro horas en la po-

blación y nuevamente son evacuados en los mismos helicópteros del Ejército.

En medio de esta situación, llegan por vía aérea desde Medellín varios paramilitares, entre los que se encontraba uno denominado «Díaz», un expolicía que hizo presencia con los grupos paramilitares en Vigía del Fuerte entre 1997 y 2000.

9 de mayo. La Diócesis de Quibdó explica lo ocurrido en los días posteriores: «nuevos operativos militares desde Vigía del Fuerte hacia Bellavista por parte del buque y las 'piraña' de la Infantería de Marina, con el objetivo de asegurar el área previo a la visita presidencial. Pese a las promesas presidenciales y frente a la carencia de una respuesta real a la situación que se vivía en las comunidades, los días siguientes continuó el desplazamiento de centenares de personas aterrorizadas y temerosas de permanecer en sus comunidades. Igualmente, se reporta la presencia de grupos paramilitares que, se dice, vienen subiendo por el río Atrato, pasando por el municipio de río Sucio. Algunos pobladores comentan que se encuentran incluso algunos miembros de los grupos paramilitares en el propio Vigía y Bellavista».

La atención a la población desplazada en Quibdó es muy lenta. No hay albergues para los campesinos afrocolombianos que siguen llegando a la ciudad. El Gobierno Nacional omite la atención humanitaria de la población desplazada. Continúa el temor al retorno y los paramilitares ejercen retaliaciones contra las comunidades del Medio Atrato, a la vez que se prolongan y agudizan los enfrentamientos con la guerrilla en la región.

El desplazamiento se reseña así: «Casi inmediatamente cedieron los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares. Luego de permanecer un par de días refugiados en Vigía del Fuerte, los pobladores de estas dos comunidades decidieron desplazarse hacia comunidades vecinas, con el objetivo de arribar finalmente al municipio de Quibdó. Allí esperaban contar con mayor seguridad o al menos salvaguardar sus vidas. Este éxodo, acompañado por los per-

manentes rumores de nuevos enfrentamientos, la llegada de la fuerza pública a Vigía del Fuerte, la ausencia del Estado y las autoridades locales para atender la emergencia hicieron que gran parte de las Comunidades del Medio Atrato decidieran desplazarse hacia la capital del Chocó. Incluso frente a los rumores, las amenazas, la presencia paramilitar en la zona y los posibles enfrentamientos con la guerrilla, comenzaba a registrarse desde el 3 de mayo la llegada de familias provenientes de comunidades como San Martín, Puerto Conto, Buchadó, San Miguel, Murri, Tagachí, el Tigre, la Loma y en general de la gran mayoría de las comunidades de los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá. Esta situación de desplazamiento fue creciendo día a día, observándose una desolación absoluta en gran parte de las Comunidades, ya que la única razón por la cual la población, que aun se encontraba en éstas, expresaba no haber salido era la falta de combustible y embarcaciones suficientes».

En horas de la mañana llega el presidente Andrés Pastrana Arango, *«se compromete con las Comunidades a garantizar la seguridad y reconstruir las poblaciones. En Quibdó, en la segunda semana de mayo, ya eran miles los desplazados [...]». Eran recibidos por la Red de Solidaridad Social, la Cruz Roja y la Pastoral Social.»*

La misión humanitaria se realizó entre los días 9 y 12 de mayo, con el Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Anders Kompas. Visitaron Quibdó, Bellavista, Vigía del Fuerte y Napipí. Entrevistaron a las autoridades locales, fuerza pública, organizaciones sociales y lograron reseñar los testimonios de los pobladores que vivieron y presenciaron los hechos. El informe, aborda las responsabilidades en los hechos, *«a la luz de lo estipulado en el DIH y los DD.HH., tanto de los grupos al margen de la ley como las del propio Estado.»*

Frente a las FARC-EP: *En el marco del DIH, las FARC son responsables de la muerte de más de un centenar de civiles, heridas y lesiones a cerca de ochenta más y la destrucción de bienes civiles a través de cilindros de gas, arma, considerada como no convencional.*

En síntesis, el combate entre guerrilla y paramilitares fue catastrófico para una población que ya venía sufriendo por causa de todos los actores armados. Las investigaciones señalan igualmente las responsabilidades de la Brigadas IV y XVII del Ejército por omisión criminal, pues tenían la misión de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos; y por acción criminal, al haber actuado en conjunto con los paramilitares.

La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra los Comandantes de la I División del Ejército, el Comandante de la IV Brigada y el Coronel a cargo del batallón con sede en Quibdó. La omisión de los mandos militares se centra en que las Comunidades ya habían informado que, desde el año anterior, habían llegado a la región del Atrato Medio más de trescientos paramilitares que habían expresado su propósito de combatir a las FARC. Los militares omitieron combatir a los escuadrones de la muerte.

Uribe en el Gobierno

En agosto de 2002 termina el mandato presidencial de Andrés Pastrana e inicia el suyo Álvaro Uribe Vélez. Colombia pasa a ser gobernada directamente por el consenso de narcotraficantes, empresarios, militares, paramilitares y políticos de los partidos tradicionales y los nuevos partidos uribistas, firmado en Ralito. Como ya comentamos, se completa la infiltración de los escuadrones de la muerte y los narcotraficantes en el DAS y se intensifica la acción conjunta entre los escuadrones de la muerte y las Fuerzas Militares. Mientras crecen sin parar los Bloques paramilitares en todo el país, el Gobierno crea Comandos Conjuntos, Batallones de Contraguerrilla, Brigadas Móviles, Fuerzas Especiales Urbanas, Unidades de Protección de Carreteras, Batallones de Alta Montaña, Unidades para la Protección de Infraestructura, y dos nuevas Divisiones. En pleno crecimiento y despliegue,

los escuadrones de la muerte no son obstaculizados por las Fuerzas Militares, que incrementaron sus tropas y se desplegaron por todo el país. Se trata de esfuerzos paralelos y mutuamente complementarios: la política llamada de «Seguridad Democrática» del Gobierno de Uribe.

La política de soldados campesinos, familias guardabosques y la red de informantes tienden a comprometer a la población civil en la guerra. Son proyectos para reutilizar a los efectivos de los grupos paramilitares desmovilizados. Se ejecutó el *Plan Patriota* y las operaciones *Libertad Uno* en Cundinamarca, JM en Caquetá y *Emperador* en Meta. Se desplegó además la *Operación Marcial*⁵⁵ en el oriente antioqueño.

Durante los siete años siguientes se eleva a la máxima intensidad el ataque frontal, masivo y sistemático contra Centros de Documentación dedicados a la promoción, defensa y enseñanza de los Derechos Humanos. Desde entonces se ha incrementado el robo de ordenadores, maletines, carpetas con información, agendas de teléfonos. Al mismo tiempo se realizan escuchas telefónicas, amenazas, detenciones, palizas y desapariciones. Las agresiones ocurren en cuanto se habla de llevar a juicio a los funcionarios corruptos.

18 de enero del 2005. Se desmovilizan 925 paramilitares de los Bloques Sinú y San Jorge, al igual que la estructura Bloque Sanidad, compuesto por heridos y lisiados. Pertenecían al grupo fundador y más representativo de las ACCU; de hecho, era la retaguardia de

⁵⁵ Se trata de los nombres dados a las campañas militares que lanza el Ejército de Colombia. En teoría las acciones armadas tienen como blanco a la insurgencia, pero el seguimiento de los hechos demuestra el alto sufrimiento de la población campesina.

las AUC, con peso en el departamento de Córdoba. Su base social estaba conformada por ganaderos, comerciantes, organizaciones cívicas y buena parte de la clase política. Seguirían en adelante diferentes «desmovilizaciones» de paramilitares. Pero pronto aparecerían denuncias en Urabá y Bogotá sobre sicarios que se desmovilizaron varias veces en diferentes regiones. O individuos que nunca fueron paramilitares peor que recibieron dinero y beneficios por figurar en listas de desmovilizados. Con tales informaciones, las cifras del Gobierno no son creíbles. Todo esto fue confirmado, en febrero del 2007, por la Comisión Asturiana de Verificación de la Situación de DD.HH. en Colombia.

21 de febrero del 2005. La Brigada XVII del Ejército de Colombia y sus sicarios matan en San José de Apartadó a ocho miembros de la Comunidad, tres niños y cinco adultos. Sus nombres: Santiago, Natalia, Deiner, Bellanira, Sandra, Alfonso, Luis Eduardo Guerra y Alejandro. El presidente Uribe hizo todo lo posible por atribuir el crimen a la guerrilla, pero comisiones de investigadores de otros países pudieron comprobar la responsabilidad del Ejército y sus oficiales.

12 de abril del 2006. Primera fase de la desmovilización del Bloque Élder Cárdenas. Entregaron las armas 309 paramilitares en el corregimiento de El Mello Villavicencio de Necoclí.

30 de abril del 2006. Segunda desmovilización del Bloque Élder Cárdenas en el corregimiento de Turbo. 484 hombres y mujeres dejaron las armas.

15 de agosto del 2006. La tercera fase de la desmovilización se realizó en el municipio de Ungía-Chocó. Se desmovilizaron 745 hombres y mujeres pertenecientes al Frente Norte Medio Salaquí o Frente Chocó. Con ellos el Comandante Fredy Rendón, «el alemán». En total 1.538 hombres y mujeres del Bloque Élder Cárde-

nas se «reincorporaron a la vida civil». Hasta hoy persiste la duda sobre la desmovilización paramilitar si se toman en cuenta la cantidad y calidad de las armas entregadas, la continuidad de la violencia contra los opositores políticos y las nuevas masacres con intimidación a la población. Otra interpretación sobre el proceso de desmovilización paramilitar es que se institucionalizó: los sicarios rasos se desmovilizaron sin recibir ninguna sanción penal, económica o social. Por el contrario, se incorporaron a compañías de vigilancia privada, escoltas, informantes del Ejército, «guardabosques» o cultivadores de palma en los mismos terrenos que habían expoliado a los campesinos. No fueron desmovilizados 156 niños que eran explotados como combatientes al momento de la entrega de armas.

7 de agosto del 2006. Se inicia el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez.

9 de enero del 2009. La revista *Semana* publica un informe sobre la CIA en Colombia. Los norteamericanos tenían pleno conocimiento sobre las relaciones entre organizaciones paramilitares y el Ejército colombiano. *Semana* publica un dossier con los documentos desclasificados. El facsímil de los documentos muestra reportes detallados. Los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos omitieron actuar, como se refleja en este fragmento del artículo: «La CIA y diplomáticos de alto rango de EE.UU. sabían, incluso desde 1994, que las fuerzas de seguridad de Colombia, apoyadas por el Gobierno de este país, utilizaban tácticas de 'escuadrones de la muerte' y tenían nexos con los paramilitares». Según un grupo investigador de la Universidad George Washington, las fuerzas de seguridad de Colombia cooperaban con grupos paramilitares, que a su vez estaban vinculados con el narcotráfico y que además alentaron la táctica de inflar el «conteo de cuerpos» matando civiles.

La política de «falsos positivos» —o muerte ilegal de civiles que luego son presentados como guerrilleros muertos en combate— es una vieja práctica del Ejército colombiano según Michael Evans, analista del grupo en Washington. Incluso desde 1994, Myles Frechette, el embajador de los Estados Unidos en Colombia por aquella época, ya había condenado en notas internas la *«mentalidad de conteo de cuerpos»* que prevalecía entre los oficiales del Ejército de Colombia. El embajador dijo entonces, que los mandos militares colombianos, que no podían demostrar logros tangibles en contra de la guerrilla *«sufrían desventajas a la hora de los ascensos»*. El informe interno de la CIA confirma lo denunciado por las comunidades campesinas. Son precisamente las acciones contraguerrilleras del Ejército las que originan la mayoría de los abusos contra los Derechos Humanos. A más bajas, los militares reciben más ascensos, traslados, permisos y remuneración. Así que el Ejército se dedica a producir «bajas», sin importar que los muertos sean personas ajenas al combate entre Ejército y guerrilla.

En 1994, otro informe de la CIA determinó que las fuerzas de seguridad colombianas utilizaban *«tácticas de escuadrones de la muerte en su campaña contrainsurgente»*. El informe es incluso más contundente: *«Los oficiales también tenían un historial de asesinato de civiles de izquierda en áreas de control guerrillero, colaboración con paramilitares vinculados con el narcotráfico en ataques contra presuntos simpatizantes de la guerrilla, y el asesinato de combatientes capturados»*.

El documentalista indica que tal práctica se ha institucionalizado en el Ejército Nacional de Colombia. *«Aunque el Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha tomado medidas para depurar a las filas militares de oficiales corruptos, claramente no son suficientes»*. La difusión del informe, desclasificado en enero de 2009, provocó el despido de treinta oficiales del Ejército y la renuncia del general Mario Montoya como Comandante en Jefe del Ejército. Vale resaltar que la san-

ción a los oficiales es el despido. En la tradición militar colombiana no hay baja deshonrosa, proceso y juicio penal, sólo un despido, como si estos mandos militares hubiesen cometido una infracción de menor calado. Y estamos hablando de la muerte de miles de campesinos en todo el país.

Los investigadores del National Security Archive publicaron los documentos desclasificados pocos días antes de que Uribe recibiera la Medalla Presidencial de la Libertad. El premio a sus servicios lo entregaba el ex Presidente de los Estados Unidos George Bush, hijo.⁵⁶

En los últimos años las FARC han reducido los abusos contra la población civil, como estrategia para legitimar su beligerancia. De momento han mermado los retenes en las carreteras, que terminaban en tiroteos con el Ejército. Las FARC se han replanteado la retención de civiles y, a inicios de 2009, han entregado a los mediadores los últimos políticos retenidos, aunque aún queda un grupo de militares cautivos. Han optado por la política de intercambio de prisioneros, más conocida como «acuerdo humanitario»; un procedimiento que se ha aplicado en otros conflictos del mundo, siguiendo parámetros del CICR. Mientras la sociedad civil apoya el acuerdo humanitario y a las familias de los militares cautivos, Álvaro Uribe sigue apostando por la guerra y el rescate violento.

21 de Agosto del 2009. El general del Río cambia su estrategia de defensa y decide señalar sus vínculos con el entonces Gobernador de Antioquia: *«Operación Génesis... el Gobernador de Antioquia de*

⁵⁶Las fuentes citadas por la revista *Semana*, están disponibles en la Universidad George Washington y el National Security Archive. Hay completo acceso a documentos desclasificados.

la época, Álvaro Uribe tuvo conocimiento de la Operación Génesis y mantuvo comunicación permanente sobre el desarrollo de la misma con quien comandaba la operación, el señor general en retiro Rito Alejo del Río Rojas y con las demás autoridades tanto de policía judicial como del orden nacional», así lo afirmó la defensa del general, hoy en audiencia preparatoria. Sin embargo, el juez ha decidido no permitir que el expresidente Ernesto Samper y al actual presidente Álvaro Uribe rindan indagatoria a pesar de las afirmaciones hechas por el abogado de Rito Alejo del Río.

A finales de 2009 Álvaro Uribe cedió a los Estados Unidos siete bases militares en Colombia y el uso de los aeropuertos civiles. Un documento de la Fuerza Aérea de los Estados admite que la presencia norteamericana hace parte de un plan contra los países suramericanos que no están bajo la dominación norteamericana.



Conclusiones

Las víctimas del Estado colombiano pedimos justicia y tenemos la firme voluntad de conseguirla. Han pasado 12 años desde la Operación Génesis y el modelo de masacres que denunciarnos se ha extendido a toda Colombia. Desde 1996 la guerra sucia ha ido en ascenso. No hemos visto justicia para los sobrevivientes. Peor aún, el conflicto colombiano afecta ya a los países vecinos. Si dejamos que triunfen los métodos de Uribe y sucesores, la enfermedad se expandirá por toda Latinoamérica.

Dado que la violencia tiene sello oficial, se constituyó el MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia). Las estrategias del MOVICE incluyen acciones jurídicas para perseguir a los máximos autores de los crímenes, delimitar responsabilidad en los agentes estatales, recuperar la memoria histórica o hacer acompañamiento a las víctimas mediante la comisión ética. Igualmente, se han diseñado estrategias para la no-repetición, la prohibición legal del paramilitarismo. Queremos reparación, vamos a luchar contra la desaparición forzada y contra el asesinato sistemático de la oposición política. Queremos verdad, justicia y dignidad para las víctimas y los sobrevivientes. El proceso más activo es la organización: el fortalecimiento del movimiento de víctimas.

Los colombianos y colombianas del exilio consolidaremos el capítulo internacional del MOVICE en Europa. Tenemos ante nosotros la ardua tarea de sensibilizar y romper el silencio. Tenemos el reto de confrontar la complicidad del Estado español con el régimen colombiano. Los insumisos en el exilio nos hemos convertido en un incordio y por ese motivo, el Gobierno de Colombia dice abiertamente que debemos ser eliminados. Las frases que usa el

presidente son idénticas a las que nos escriben los sicarios cuando nos amenazan de muerte.

El represor o criminal de guerra teme que sus víctimas hablen, se organicen, les lleven a juicio y finalmente a la cárcel. Y ese esfuerzo sostenido es el que nos anima: periodistas, dirigentes sindicales, presos políticos, afrodescendientes, comunidades indígenas, sacerdotes, y otras víctimas de crímenes de Estado estamos acumulando datos y testimonios para llevar a los delincuentes ante los jueces. Si no responden los jueces de Colombia buscaremos otras opciones de justicia. La élite colombiana responderá por sus crímenes. Los empresarios pagarán por los sindicalistas asesinados y tenemos la firme voluntad de recuperar las tierras usurpadas.

No caben el perdón ni el olvido para los genocidas. Pero encontramos sorpresas en el camino: la Audiencia Nacional española nos denegó la justicia a quienes denunciarnos los crímenes del Estado colombiano en el Atrato. El fallo que emitió, contra todas las evidencias, el magistrado Fernando Grande-Marlaska se basó en una opinión personal, la de que Colombia es un «Estado de Derecho». La posible prevaricación de Grande-Marlaska se constituye cuando el magistrado tuvo a mano todos los testigos y no escuchó sus testimonios. La gente que vio descuartizar a sus familias fue así nuevamente humillada.

Las familias de los criminales que gobiernan a Colombia tendrán que dejar sus fortunas para cubrir las reparaciones que desde ahora estamos pidiendo. Si hoy hablamos de expropiar las empresas a los personajes más conocidos, como parte de las indemnizaciones por la guerra sucia que ellos han promovido, la prensa internacional seguramente se mostrará escandalizada. Entonces debemos recordar que esa prensa tan sensible hace silencio cuando se usurpan millones de hectáreas de tierra campesina. Tenemos derecho a cobrar la deuda. Sólo es cuestión de tiempo,

pero los capitales acumulados a partir de desplazamientos, tortura y muerte serán destinados a las reparaciones.

Convenientemente, el expolio hecho a sangre y fuego no genera titulares. El rasero de la prensa es simple: si ochenta campesinos toman la tierra de un solo hacendado, eso es noticia. En cambio, cuando se usurpan nueve millones de hectáreas y el Gobierno las entrega a las empresas multinacionales, la prensa sólo acierta a decir que la economía va muy bien, que los empresarios tienen oportunidades de negocio y la democracia colombiana se consolida.

Nos preocupa el cambio de doctrina del Estado español respecto a la justicia universal ante las masacres de Gaza, Colombia o Guatemala, por poner algunos ejemplos. Por tales motivos no aceptamos que nos pongan como modelo la transición española, con miles de fosas comunes sin abrir mientras los victimarios siguen su vida ordinaria, e incluso permanecen en la vida política. *El que ofició la muerte, tranquilo está tomando su desayuno.*

En Colombia rechazamos el modelo de la Paz Centroamericana, porque fue un absoluto fraude: en Guatemala se creó una Comisión de la Verdad, pero los cómplices de Efraín Ríos Montt siguen libres. Torturadores, violadores y masacradores siguen hoy en la política activa. Este mensaje es inaceptable. Si hablamos de indemnizaciones, cobraremos al Estado y a los empresarios beneficiarios de la guerra. Como ejemplo, los empresarios de la Chiquita Brands, que financiaron el sicariato, deben pagar económicamente y sus gerentes deben ir a la cárcel.

Hemos hallado en España y en Europa voces solidarias con Colombia. Movimientos sociales y vecinales que nos han dado su protección, afecto y escenarios para exponer nuestra causa, que es la de toda la humanidad. Hemos compartido con represaliados, defensores de los bienes y derechos públicos como la salud,

la educación, los servicios públicos. Todos nos dan la mano. El exilio colombiano ha ganado afectos entre los defensores de las mujeres, los inmigrantes, y en general los que afirman que «*otra Europa es posible*». Ellos a su vez nos escuchan cuando decimos «*otra Colombia es posible*».

En su tiempo, las Madres de la Plaza de Mayo también nos contaron la importancia de asociarnos, solidarizarnos, romper el aislamiento, escribir periódicos, poemas, libros, cartas y canciones y finalmente presionar a cada político a que defina su posición frente a los Derechos Humanos. Tomamos nota de las lecciones que nos dejan las valientes abuelas argentinas.

Colombia necesita un programa de reconstrucción nacional. Una de las tareas de ese programa es la de rehacer el tejido social. Queremos recuperar, restaurar, liderar la cultura de los Derechos Humanos. En suma, hacer viable la sociedad.

Dado que *la guerra es un negocio*, a los militares colombianos no les conviene ni les gusta que se les hable de procesos de paz. Por tal motivo sabotearán toda negociación o mediación humanitaria. Si Colombia construye una nueva institucionalidad más civil, los uniformados perderán su vida de privilegios y su jubilación anticipada. Para conservar sus empleos, los militares acostumbran a hablar de terrorismo pero no les gusta definirlo. Nosotros entendemos el terrorismo como el ataque masivo e indiscriminado contra la población civil no combatiente. Son dos visiones distintas sobre una misma palabra.

Igualmente debemos tener mucho cuidado cuando nos convocan con otra palabra muy recurrida: reconciliación. Salvo pequeñas treguas, nunca hemos conocido la paz en Colombia. Cada vez que un candidato a la presidencia ha propuesto reformas sociales ha sido asesinado. Las élites siempre nos han negado la construc-

ción de un pacto social de convivencia y una economía más igualitaria para toda la sociedad. Como población civil deseamos ver el final del conflicto por la vía política, y nos arriesgamos a hablar de paz ahora, cuando la sangre cae a borbotones.

Los documentos que he publicado en internet desde el 28 de febrero de 2006 se han convertido en este libro. Presento esta denuncia pública insistiendo en que hubo un testigo colectivo, que hasta ahora ha sido silenciado por la «justicia» colombiana y los medios de difusión. De nada me sirvió haber denunciado ante la Fiscalía y haber aportado datos a la prensa.

A la hora de publicar este texto hay amenazas muy graves contra las personas comprometidas con las comunidades de paz en Colombia. Sacerdotes, monjas, periodistas, investigadores sociales, campesinos, indígenas y afrodescendientes de las Comunidades, que han intervenido en la denuncia, han sufrido atentados, amenazas e intentos de captura y desaparición.

El delito que han cometido es optar por la justicia. Han enfrentado a la autoridad que abusa de los humildes de la tierra. Han confrontado del mismo modo a militares, paramilitares, guerrilleros, al mismo presidente Uribe y a todo el Sistema Judicial colombiano. No ha servido la Justicia colombiana para detener las muertes en el río Atrato. No ha actuado tampoco la Corte Penal Internacional o un ente similar. De ahí la urgencia de este libro.

Hacemos un llamado a cada testigo de estos hechos para someter a los criminales que hoy gobiernan a Colombia. Tenemos el derecho a exigir justicia y nos movilizaremos hasta que un día terminen la Noche y la Niebla y nazca una verdadera democracia.

En todo proceso de reconstrucción nacional –y mucho más en la guerra colombiana, tan prolongada– siempre debemos pensar en

el término de dos generaciones: la actual, herida y doliente, y una nueva generación de niños y niñas que no sean hijos de la guerra. Una generación que se forme con otra impronta social. Deseamos generosamente que esa nueva juventud no presencie los horrores de la guerra, pero que tampoco viva en la amnesia y la ignorancia de lo que le ocurre a Colombia. Por ello nos corresponde perfilar desde ahora un nuevo proyecto de infancia y juventud. Queremos sacar a las próximas generaciones de la cultura del egoísmo, la iniquidad y la violencia. Criaremos una generación que vea la solidaridad como la ternura de los pueblos.

Habrà un tiempo para que los habitantes del Atrato puedan expresar su duelo y obtener reparación. Sin duda alguna, queremos y merecemos otra Colombia.

Sólo me quedaría una pregunta final: ¿qué opciones nos quedan ante la injusticia extrema? Deseamos el final del conflicto. Si es posible, mediante la vía política.



Fuente de los mapas: SIGPROTECTOR–ESPAÑA (Sistema de Información Georeferenciada para la Protección de los Derechos Humanos).

Diseño gráfico: Nelson Restrepo y Ricardo Ferrer.

Mapa general de Colombia y cuenca del Atrato



La zona señalada en el recuadro es la cuenca del río Atrato, donde se ejecutó la Operación Génesis desde 1997. En esa zona, fronteriza con Panamá y con costas en el Pacífico y el Atlántico, posiblemente se construirá el nuevo canal interoceánico. Está entre las regiones con mayor potencial económico de todo el continente.

Operación Génesis



En 1996, en el departamento de Antioquia, nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia, los escuadrones de la muerte. Su primera operación conjunta con el Ejército de Colombia y militares de los Estados Unidos se coordinó desde Apartadó, donde funcionó el Centro de Mando de la Operación Génesis. La Operación se ejecutó durante 1997 en el Atrato, Urabá, Chocó y el occidente del departamento de Antioquia.

Estrategia Génesis



El modelo de la Operación Génesis se extendió posteriormente a todo el país bajo el nombre de Estrategia Génesis.

La fase más reciente de la Estrategia incluye operaciones militares contra los países vecinos de Colombia.



Títulos publicados

Cuentos

Este loco mundo. 17 cuentos.

Miguel Ángel García Argüez, José María Gómez Valero, David Eloy Rodríguez y Amelia Celaya, 2010. 72 pág. ISBN: 978-84-614-0083-6.

Memoria

Nos matan y no es noticia. Parapolítica de estado en Colombia.

Ricardo Ferrer Espinosa y Nelson Restrepo, 2010. 192 pág.
ISBN: 978-84-614-0084-3

Incendarios de ídolos. Un viaje por la revolución de Asturias.

Mathieu Corman, 2009. 170 pág.
ISBN: 978-84-613-0725-8

Inmigración

Migraciones, fronteras y capitalismo. Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial.

Eduardo Romero, 2010. (En preparación).

A la vuelta de la esquina. Relatos de racismo y represión.

Eduardo Romero, 2008. 123 pág.
ISBN: 978-84-612-7617-2.

Rodaré maldiciendo. Poemas y arte callejero.

Silvia Cuevas-Morales, 2008. 37 pág.
ISBN: 978-84-612-4533-8.

¿Quién invade a quién? El plan África y la inmigración.

Eduardo Romero, 2007 (2ª ed.). 68 pág.
ISBN: 978-84-611-4544-7.

Los árboles de la muerte. Crónica de un inmigrante sin papeles.

Marco Valle, 2004 (2ª ed.). 95 pág.
ISBN: 978-84-607-9379-3.

Ecología

Catalina y los bosques de hormigón

Ana Laura Barros y David Acera, 2007 (2ª ed). 53 pág.
ISBN: 978-84-611-8953-3.

Oviedo detrás de la fachada (fotografía / texto-plano de Oviedo)

María Arce, 2007. ISBN: 978-84-611-6895-8.
Miguel Moro, 2007. 182 pág.
ISBN: 978-84-611-6896-5.

Más agua, ¿para qué? El Plan Hidrológico Nacional, el embalse de Caliao y la nueva cultura del agua.

Beatriz González y Eduardo Menéndez, 2006. 119 pág.
ISBN: 84-611-0896-5.

Nos comen. Contra el desmantelamiento del mundo rural en Asturias.

VV.AA., 2005. 195 pág. ISBN: 84-609-7722-6.

Formación

Crisis y deuda externa. Las políticas del Fondo Monetario Internacional.

Miguel Moro, 2005. 242 pág.
ISBN: 978-84-609-5602-0.

Contra la Unión Europea. Una crítica de la Constitución. [agotado]

VV.AA., 2005. 48 pág.
ISBN: 978-84-609-4170-5.

